

2014 : año de elecciones El Salvador y Costa Rica. Miradas sobre el orden político	Titulo
Gori, Esteban de - Compilador/a o Editor/a; Pirker, Kristina - Compilador/a o Editor/a; Villacorta, Carmen Elena - Compilador/a o Editor/a;	Autor(es)
Buenos Aires	Lugar
Sans Soleil	Editorial/Editor
2014	Fecha
Serie Académica	Colección
Participación política; Política; Ciencia política; Ciencias sociales; Elecciones; Costa Rica; Brasil; América Latina; El Salvador;	Temas
Libro	Tipo de documento
"http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20141017051531/El-Salvador-Costa-Rica-2014.pdf"	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



2014: año de elecciones

El Salvador y Costa Rica: miradas sobre el orden político

Esteban De Gori, Kristina Pirker,
Carmen Elena Villacorta Zuluaga (comps.)



Serie
Académica

2014: año de elecciones

El Salvador y Costa Rica: miradas sobre el orden político

Esteban De Gori, Kristina Pirker,
Carmen Elena Villacorta Zuluaga (comps.)



Sans Soleil Ediciones - Serie Académica - 2014

De Gori, Esteban

2014 año de elecciones. El Salvador y Costa Rica : miradas sobre el orden político / Esteban De Gori ; Kristina Pirker ; Carmen Elena Villacorta Zuluaga ; compilado por Esteban De Gori ; Kristina Pirker ; Carmen Elena Villacorta Zuluaga. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sans Soleil Ediciones Argentina, 2014.
E-Book.

ISBN 978-987-45205-6-2

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Políticas. 3. América Latina. I. Pirker, Kristina II. Villacorta Zuluaga, Carmen Elena III. De Gori, Esteban, comp. IV. Pirker, Kristina, comp. V. Villacorta Zuluaga, Carmen Elena, comp. VI. Título
CDD 320.80

Obra editada bajo licencia Creative Commons 3.0:

Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada

(by-nc-nd)

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
Siempre que se utilice esta obra tendrá que reconocerse su autoría.

-© 2014, de los autores

-© 2014, de la edición, Sans Soleil Ediciones Argentina

Se puede por tanto compartir esta obra siempre y cuando se respeten las condiciones de la licencia Creative Commons.

Diseño de la portada: Sans Soleil Ediciones

Maquetación: Sans Soleil Ediciones

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

ÍNDICE

1- Introducción, <i>Kristina Pirker, Carmen Elena Villacorta Zuluaga, Esteban De Gori</i> ,	7
---	---

1. MIRADAS SOBRE LA REGIÓN

2- Las recientes elecciones en Centroamérica en perspectiva regional. "Hay que reconocer las limitaciones en el corto plazopara cambios de mayor profundidad", Entrevista a Álvaro Cáliz	14
3- Brasil en Centroamérica: diplomacia progresista y ambiciones regionales, <i>Ariel Goldstein</i>	24
4- Un istmo en disputa: transformaciones recientes en la coyuntura centroamericana, <i>Agustín Lewit</i>	31

2. COSTA RICA

5- Costa Rica 2014: elecciones teñidas de progresismo, <i>Armando Chaguaceda</i> ,	41
6- Luis Guillermo Solís: nueva derecha, republicanismoneoliberal y "negación" del liderazgo, <i>Esteban De Gori</i>	49
7- Costa Rica 2014: Unas elecciones inéditas, <i>Rodrigo Páez Montalbán</i> ,	59
8- Costa Rica, los límites para la izquierda alternativa, <i>Aránzazu Tirado Sánchez</i>	66

9- Costa Rica en el siglo XXI: La que dejó de ser y la que no termina de nacer, <i>Luis Paulino Vargas Solís</i>	74
--	----

3. EL SALVADOR

10-Relações de quem? – personalidade, política e projeto entre El Salvador e Brasil, <i>Aleksander Aguilar</i>	86
11-The History of Electoral Politics in Modern El Salvador, <i>Erik Ching</i>	99
12-Lecciones de la post guerra en El Salvador para un nuevo gobierno progresista, <i>Gilberto García</i>	108
13-“Habrá que esperar un tiempo más”. Las limitaciones y los principales desafíos del FMLN en el gobierno. Entrevista a Rafael Guidos Vejar por Lucrecia Molinari	118
14-De la hegemonía conservadora al debut de la izquierda: Implicaciones y retos para una sociedad más igualitaria en El Salvador, <i>Irene Lungo Rodríguez</i>	131
15-El FMLN, el movimiento popular y la “marcha por las instituciones”, <i>Kristina Pirker</i>	139
16-El Salvador: continuidad del cambio, <i>Ricardo Ribera</i>	150
17-La situación económica de los gobiernos de izquierda en El Salvador, <i>Melissa Salgado</i>	158
18-Rivales siempre, <i>Roberto Turcios</i>	165
19-Sobre las posibilidades de la unidad nacional, Carmen <i>Elena Villacorta</i>	174

ÍNDICE

20- Rupturas y debates internos del FMLN desde los acuerdos de paz a la victoria electoral, <i>Manuel Yañez</i>	183
---	-----

4. ANEXOS

21-Costa Rica: caracterización de los principales partidos políticos, <i>Gisela Brito</i>	194
22-Partidos Políticos en El Salvador, <i>Alejandro Faris</i>	202

Introducción

Este libro integra un conjunto de ensayos intelectuales sobre los procesos electorales desarrollados en Costa Rica y El Salvador durante el año 2014. Sus singularidades políticas, así como los impactos en la interesante coyuntura centroamericana, suscitaron variadas reflexiones, miradas y dilemas que se buscaron plasmar en este trabajo. Quienes nos embarcamos en la edición y compilación de estos artículos hemos procurado recoger las resonancias que toda contienda electoral deja en los circuitos intelectuales, digitales y periodísticos. Se trata de un conjunto de voces preocupadas por una región a la que, peyorativamente, suele atribuírsele como rasgo fundamental un carácter violento. Pero al centrarse la mirada —periodística, sobre todo— en las prácticas violentas para resolver conflictos socioplíticos y/o interpersonales, otras dinámicas, como la participación político-electoral en sus contextos históricos particulares- y su relación con el cambio social e institucional quedan fuera del análisis.

Ventaja del presente volumen es, en ese sentido, que, si bien se trata de textos escritos al calor del acontecer coyuntural, adoptan perspectivas de mediana y larga duración para

encarar el análisis del tiempo presente. Se asume la actualidad como resultado de procesos estructurales que vienen desarrollándose en el tiempo. Se interpreta el hoy sin perder la perspectiva histórica. Es así como se nos revela un El Salvador construido sobre la base económica de la agroexportación del café, para cuyo sostenimiento a lo largo de la mayor parte del siglo XX se consolidó un sistema de dominación oligárquico-militar, caracterizado por la exclusión de las mayorías campesinas de los frutos de su propio trabajo y de la participación en la vida política del país. En contraste con ese cuadro, encontramos a una Costa Rica fruto de un concepto de nación más fiel al liberalismo, más incluyente, cuyo sistema político ha sido considerado —junto con el de Uruguay— como una de las democracias más consolidadas de América Latina.

La escena política de El Salvador actual proviene de la tensión entre dos polos, cuya confrontación fue agudizándose hasta dar lugar a la guerra civil que asoló al país durante la década de 1980. Por un lado, está la estrategia contrainsurgente recogida en la Doctrina de Seguridad Nacional y puesta en práctica en la región por los ejércitos centroamericanos (apoyados por el gobierno de Estados Unidos y por las oligarquías locales) a partir de la década de 1960; y, por otro, el movimiento popular y revolucionario que fue articulándose hasta conseguir la integración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy gobierno. Muy distinta es la trayectoria costarricense, en la cual también hubo predominancia del monocultivo, como lo muestra la presencia de la United Fruit Company en la costa atlántica —con su consiguiente cuota de marginación de los sectores afrocaribeños e indígenas—, pero cuyo andamiaje institucional consiguió garantizar la expansión de mínimas cuotas de bienestar social y la participación de diversos sectores en la vida política del país.

Una vez superada la “crisis centroamericana”, caracterizada por la guerra civil salvadoreña, el boicot contrarrevolucionario en

la Nicaragua sandinista, el genocidio perpetrado contra los pueblos indios y las organizaciones alzadas en armas en Guatemala y la ocupación de Honduras como retaguardia estratégica de los contras nicaragüenses y como centro de operaciones contrainsurgentes por parte de la armada estadounidense, entre otros flagelos, la “pacificación” y “normalización” del Istmo vino de la mano del proyecto neoliberal implementado acelerada y agresivamente en toda la región. Si a lo largo del siglo XX fue el monocultivo de productos como el café, la caña de azúcar, el algodón y el banano¹ un rasgo estructural compartido por los países istmeños, desde inicios de la década de 1990 en adelante ha predominado la combinación entre un modelo exportador de bienes de consumo producidos en empresas maquiladoras, la agroexportación de viejos y nuevos productos, la terciarización de la economía y el exponencial crecimiento del ingreso de remesas provenientes de los trabajadores migrantes radicados en Estados Unidos.

¿De qué modo estos rasgos histórico-estructurales, con sus respectivos matices y particularidades, continúan presentes o han dado lugar a los escenarios políticos, económicos y sociales de hoy? Es una de las preguntas a la que los textos aquí recogidos ofrecen distintos ángulos de respuesta, incorporando también interrogantes respecto de los destinos estatales y gubernamentales. El lector encontrará, además de la mirada hacia el pasado, un intento prospectivo, una inquietud por el futuro. Los autores han colocado su “punto de observación” en los posibles cambios, variaciones o persistencias que las fuerzas políticas triunfantes en Costa Rica y El Salvador introducirán o consolidarán en sus realidades. Otros trabajos muestran interés en los impactos regionales y continentales, así como en reflexionar sobre el conjunto de actores a los que apelaron, organizaron o excluyeron los partidos vencedores en la construcción de

¹ Hecho que llevó al célebre historiador argentino, radicado en Costa Rica, Héctor Pérez Brignoli a caracterizar como “economías de postre” a las economías centroamericanas.

sus bases de apoyo y adhesiones. La pregunta por el cambio, la variación o el mantenimiento de diversos proyectos políticos y económicos, y la reflexión en torno de los actores que acompañaron, legitimaron o participaron en estos procesos electorales y sus impactos en la región/continente, es otro de los ejes que atraviesan el corpus de preocupaciones de este libro.

Centroamérica sigue siendo un territorio de convulsiones políticas y económicas, pero también de actores que han construido una estabilidad difícil de imaginar décadas atrás. Las intervenciones que aquí recogemos podrían ser denominadas de “posguerra” y de post-consolidación de frágiles democracias. La clausura de la guerra en la década de 1990 y el ejercicio de la competencia democrática en los años del Consenso de Washington y del desarrollo del neoliberalismo han transformado a la región, introduciendo nuevos fenómenos sociales y reclamando nuevos enfoques y análisis. El Istmo centroamericano continúa siendo un “laboratorio” de cursos de acción de fuerzas políticas y de recreación y surgimiento de múltiples actores inscritos en los influjos y discusiones que atraviesan a todo el continente americano. Sin embargo, a la vez que Centroamérica se inscribe en dicho continente, posee una capacidad performativa que obliga a pensarla en diálogo con realidades y culturas políticas propias de otras regiones o continentes.

En términos singulares, Costa Rica y El Salvador ofrecen dos escenarios estimulantes. Por un lado, el triunfo electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC), ratificado en segunda vuelta el 6 de abril de 2014, el cual por vez primera en la historia de Costa Rica logra acceder a la primera magistratura. Por otro, el segundo triunfo electoral del FMLN, para el cual también fue necesario el balotaje el 9 de marzo de 2014, mostrando a un partido de izquierda con renovada voluntad —por lo menos inicial— de profundizar y amplificar los cambios introducidos (en algunas áreas) por el gobierno de Mauricio Funes. Aparecen, pues, dos

“novedades”: una, dada por las posibilidades que se abren ante la llegada al poder de una nueva fuerza de centro-izquierda, el PAC; y, otra, por el arribo al poder Ejecutivo de El Salvador de un comandante histórico de la ex guerrilla que, no obstante, debe revalidarse ante la sociedad, en virtud de la estrecha diferencia electoral con la que aventajó al derechista partido ARENA, el segundo competidor.

En el caso salvadoreño, la configuración histórica del país posibilita que la fuerza política proveniente de la lucha revolucionaria conduzca hoy el Estado. En Costa Rica, en cambio, el desplazamiento del Frente Amplio como opción izquierdista y el triunfo de Solís revelan la tendencia cauta y moderada de una cultura política forjada al calor del libre juego de la democracia representativa. Con todo, en los dos países se exigen respuestas a los estragos sociales dejados por dos décadas de política neoliberal y en los dos países se revela el corrimiento de los discursos de izquierda hacia el centro. En términos ideológicos, se impone la moderación.

Llamativo es también que, pese a las marcadas diferencias entre los dos países —expresadas en hechos como que en el caso salvadoreño se imponga el abordaje de la seguridad y la violencia social como prioridad, mientras que en el caso “tico” la conservación del medio ambiente sea un problema político de primer orden—, los analistas de ambos procesos coincidan en marcar la mayor participación, organización y movilización popular como indispensable para la conquista de cambios estructurales profundos. A ello cabe añadir el irresuelto problema de la integración económica de Centroamérica como asunto pendiente y obligado de cara a un plan de desarrollo efectivo en el combate de la grave desigualdad social que caracteriza al Istmo. Si la integración de Nuestra América es un aspecto insoslayable de todo proyecto posneoliberal, es en la región centroamericana en donde la desintegración muestra su resultado

más perverso: la continuidad y profundización de la exclusión social de las grandes mayorías.

Este libro intenta ser un “libro en tiempo presente”. Uno que, sin caer preso de los tiempos vertiginosos de las redes sociales, que a veces conspiran contra la aguda reflexión —pero aprovechando la posibilidad democratizadora del conocimiento que estas herramientas brinda—, pretende, en su “inmediatez meditada”, aportar a los debates que siguen impulsando los procesos costarricense y salvadoreño. Además de arrojar luz e inteligibilidad sobre estos procesos y animar a la discusión, la crítica y el debate sobre los mismos, es objetivo de este libro fortalecer la “latinoamericanización” de nuestras miradas sobre nuestras propias realidades, aprendiendo a identificar aquello que nos enlaza y a apreciar aquello que nos diferencia, como modos de potenciarnos y aprender a caminar juntos en el desafío de superar nuestros males atávicos.

Agradecemos la participación de las y los veinte autoras y autores que en Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos han destinado tiempo y energía a pensar y a escribir sobre la actual coyuntura salvadoreña y costarricense, en clave centroamericanista y latinoamericana. Asimismo, invitamos a lectores y lectoras de Nuestra América a recibir crítica y creativamente este grano de arena con el que pretendemos continuar fortaleciendo el pensamiento crítico y auténtico en nuestro continente.

Kristina Pirker

Carmen Elena Villacorta Zuluaga

Esteban De Gori.

1.

Miradas sobre la región

Las recientes elecciones en Centroamérica en perspectiva regional

“Hay que reconocer las limitaciones en el corto plazo para cambios de mayor profundidad”

Entrevista a Álvaro Cálix

Escritor, investigador social, docente y analista político hondureño, Álvaro Cálix es Doctor en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En el Programa Latinoamericano en Trabajo Social (PLATS) de dicha casa de estudios desarrolla sus actividades académicas. En cierto sentido, el presente libro deviene del también publicado por la editorial Sans Soleil en Argentina, a inicios de 2014, *Honduras 2013: golpe de estado, elecciones y tensiones en el orden político*¹. Y fue Álvaro Cálix quien propuso emular la buena experiencia anterior, en esta ocasión para el caso salvadoreño y costarricense. Animados por el espíritu centroamericanista que nos convoca a la realización de estos trabajos, los editores del volumen actual propusimos a Álvaro responder a este cuestionario, interesados en contar con un punto de vista

¹ <http://www.sanssoleil.es/argentina/producto/honduras-2013-golpe-de-estado-elecciones-y-tensiones-del-orden-politico/> Disponible también en la Red de Bibliotecas virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ar/ar-030&d=D9924&cl=CL1#>

hondureño respecto del panorama regional abierto por las recientes elecciones en el Istmo. El autor aporta en esta entrevista elementos para la contextualización geopolítica en la que necesariamente hay que encuadrar el desarrollo de los comicios. Su mirada respecto de los márgenes de maniobra de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador, y de Luis Guillermo Solís, en Costa Rica, es cautelosa. Ello se debe, entre otras razones, a que la ausencia de *commodities* en las pequeñas naciones centroamericanas limita la autonomía económica de sus estados, marcando diferencias importantes respecto del paisaje político suramericano.

1. Tomando en cuenta el decisivo papel del gobierno estadounidense en la política hondureña en general y en el reciente golpe de Estado en particular, ¿podría decirse que hubo una suerte de intención “aleccionadora” de parte de la Casa Blanca hacia las fuerzas progresistas del Istmo centroamericano? ¿Qué repercusiones tuvo el golpe de Estado en Honduras a nivel regional?

No ha quedado del todo dilucidado si el gobierno de Obama apoyó directamente el diseño del golpe de Estado, o si bien puso el mayor empeño en blanquearlo. Lo que consta es el apoyo de los halcones republicanos a los grupos que fraguaron el derrocamiento. Al ponderar el gobierno de Obama el nivel de riesgo que representaba Zelaya, es probable que pensasen que se podía eludir el golpe, ¿por qué?... porque en las elecciones de noviembre de 2009, el ganador sería Elvin Santos, un empresario conservador, del mismo partido liberal, pero representando una corriente contraria a la de Zelaya. Entre ambos existían profundas diferencias, al grado que Santos renunció a la vicepresidencia para la que fue electo cuando Zelaya triunfó en las elecciones presidenciales.

La Embajada EE.UU. en Tegucigalpa intentó mediar con los

sectores empresariales y políticos que planeaban el derrocamiento, arguyendo que sería mejor esperar que el presidente concluyera su mandato, pues con Elvin Santos sería otra cosa, o, dado el caso, intervenir si Zelaya intentase quedarse en el poder. Al fin y al cabo los adversarios del presidente contaban con el aparato militar, judicial, parlamentario, mediático, y, por supuesto, con el apoyo de los EE.UU.

Para el gobierno estadounidense, neutralizar a Zelaya era un objetivo indiscutible. La pregunta que cabe es si el método utilizado fue el más conveniente, ya que precipitó el episodio de movilización social más grande que ha visto el país, con amplias muestras de solidaridad continental hacia las fuerzas hondureñas en resistencia. El matiz anterior sobre el método no es obstáculo para afirmar que las potencias hegemónicas apelan como recurso preventivo cortar por los eslabones más débiles. Es decir, de una u otra forma hubiesen insistido en Honduras, con golpe o sin golpe. Después vino lo de Paraguay.

El golpe trajo repercusiones de diferente magnitud. Quisiera resaltar que además de servir como experimento para ir perfeccionando las estrategias de contraofensiva oligárquica (véase Paraguay), por otra parte, también vino a levantar la guardia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y así anticiparse al repertorio de acciones desestabilizadoras en contra de los gobiernos “incómodos” para la hegemonía imperial.

2. ¿El golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, en 2009, tuvo algún impacto sobre la gestión de Mauricio Funes, quien asumió la presidencia el mismo mes y el mismo año en que Zelaya fue expulsado del poder?

Por la naturaleza y contexto que rodearon la candidatura del *outsider* Mauricio Funes, es sensato pensar que este no iba a seguir la línea de Zelaya, es decir ingresar al ALBA, o desafiar

simbólicamente al *statu quo* nacional y continental. Desde antes de que llegase a la presidencia, era previsible que adoptaría como referencia nominal gestiones como la de Lula en Brasil.

Ahora bien, el derrocamiento tuvo que ser visto con lupa por las cúpulas del FMLN, analizando la reacción de las derechas centroamericanas en alianza con EE.UU. Esta ponderación de riesgos fue uno de los factores que incidió para que los sectores más ortodoxos del FMLN tuviesen que mostrarse más “tolerantes” con la gestión de Funes.

De cualquier forma, las características del sistema político hondureño difieren sustancialmente del salvadoreño. En ese momento (2009), Honduras carecía de un partido de aceptable caudal electoral que representase las demandas de fuerzas progresistas. Mientras que en El Salvador, el FMLN ha ido afianzándose en el sistema de partidos, con una fuerte presencia en las municipalidades, Asamblea Nacional, hasta llegar a ganar la presidencia luego de cuatro periodos consecutivos del derechista partido ARENA. La institucionalización del FMLN, lo constriñe o faculta —según el ángulo de mira— a emplear estrategias distintas a las de Zelaya, por cuanto éste aprovechó la coyuntura para crear, aceleradamente, una fuerza alternativa como nunca había existido en la historia política hondureña.

3. En los procesos electorales costarricense y salvadoreño se observó de nuevo la emergencia de un discurso anticomunista para inspirar miedo en el electorado. ¿Cuánta productividad política poseen estos discursos en la coyuntura actual?

Por cierto que ese rasgo se vio también en Honduras, no así en las elecciones en Panamá en mayo de 2014. ¿Por qué razón? En Costa Rica, El Salvador y Honduras, despuntaban fuerzas etiquetadas de izquierda por las elites conservadoras. En Costa Rica, la creciente aceptación que alcanzaba el Frente Amplio

(FA), al grado que punteaba en las encuestas meses antes de las elecciones, causó preocupación y una virulenta reacción mediática de los grupos de poder. En El Salvador, los principales segmentos oligárquicos querían evitar los riesgos de que el FMLN ganase un segundo período con un candidato que venía de las cepas del partido.

Conviene aclarar que ninguna de las fuerzas políticas estigmatizadas en los tres países proclamó al comunismo como ideología central de su propuesta. La constante en las tres fuerzas fue el cuestionamiento al modelo neoliberal —no al capitalismo— y un leve guiño hacia los gobiernos progresistas y procesos emancipatorios que se desarrollan en América Latina.

Sobre las consecuencias de ese tipo de campañas, se advierten al menos dos. Por un lado, sirvieron para poner foso de por medio a la simpatía que sectores inconformes y escasamente politizados comenzaban a expresar hacia los partidos progresistas. Pero por el otro, las campañas de miedo tendieron a compactar la unidad de las fuerzas estigmatizadas.

Además, los ataques recibidos por el FMLN, FA y LIBRE llevó a estos partidos a ponderar más sus mensajes electorales. Empero, el más lamentable efecto de las campañas de miedo es que estanca la conciencia crítica de la población, ya que en vez de privilegiar el debate argumentado, favorecen la alienación y la manipulación.

4. ¿Qué cambios, reformulaciones o persistencias económicas, geopolíticas y políticas introducen en la región centroamericana los triunfos de Salvador Sánchez Cerén y Luis Guillermo Solís?

Ambos gobiernos acceden en un momento económico complicado. Es de esperarse que sigan cuestionando e intenten corregir las aristas más agresivas del enfoque neoliberal. Es muy probable que intenten aumentar y optimizar la inversión social, según lo permitan las finanzas públicas. No se ve todavía cómo

puedan avanzar sustancialmente hacia una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos fiscales y coadyuve a corregir las desigualdades.

Las señales iniciales del segundo mandato del FMLN apuntan a reducir aún más la apelación a la *mano dura* en los asuntos de seguridad para privilegiar un enfoque integral y de respeto a los derechos humanos. También se observa voluntad política para estimular la participación ciudadana, así como profundizar los esfuerzos iniciados por Mauricio Funes para ampliar las oportunidades de crédito, asistencia técnica y encadenamiento productivo en favor de las pequeñas y medianas empresas, sector cooperativo y sector agrícola.

En Costa Rica, el gobierno del PAC muestra dos grandes focos de interés: reducir los niveles de corrupción que han penetrado al Estado y recuperar la vivencia de las garantías sociales tan venidas a menos durante los últimos 20 años. En este campo, cobra especial atención para el PAC acelerar la recuperación de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

En ambos países el margen de maniobra es limitado, no solo por las circunstancias económicas, también por la correlación de fuerzas que favorece aún a los grupos empresariales más poderosos.

En la dimensión geopolítica, parece que ninguno de los gobiernos apostará por desafiar directamente los intereses hegemónicos en Centroamérica, aunque se esperaría que al menos se sumen a los esfuerzos latinoamericanos para ganar más autonomía regional y apostar por la multipolaridad global.

5. ¿Qué reflexión puede hacerse sobre el estrecho triunfo del FMLN en El Salvador? ¿Qué sucesos, déficits, procesos o prácticas impulsaron dicho resultado?

Hay que reconocer el gran mérito del FMLN al haber ligado un segundo mandato consecutivo. Esto quiere decir que, en lu-

gar de desplomarse, pudo afrontar el desgaste natural del primer mandato, presentar un candidato de sus entrañas y, a la vez, seguir siendo una de las primeras dos fuerzas políticas del país.

En cuanto a los resultados del balotaje, era en cierta forma previsible que ARENA pudiese recomponerse y reducir los diez puntos de distancia que le sacó el FMLN en primera vuelta. El espectro político en el país se decanta todavía hacia el pensamiento de derecha, de manera que ARENA contaba con mayor espacio político para buscar votos, pero además corrigió algunos desaciertos, alejó del paisaje al cuestionado expresidente Francisco Flores, profundizó la compra de lealtades y mantuvo la campaña del miedo en contra del candidato Sánchez Cerén.

La lección para el FMLN es que pese a la victoria electoral, debe hacer crecer sus bases de apoyo, sumando nuevas demandas, cumpliendo las asumidas y, no menos importante, fortalecer la cohesión y convicción partidaria en torno a un proyecto transformador. Esta última tarea se complicaría más si el partido siguiese mostrando dos síntomas: a) burocratizarse con las cuotas de poder estatal obtenidas, y b) privilegiar convertirse en un segmento importante de la burguesía emergente, en disputa de los nichos de acumulación de las élites históricas salvadoreñas.

6. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre el proyecto de los liberacionistas y el del PAC en Costa Rica?

Ambos vienen del mismo tronco. El Partido Acción Ciudadana surge en el año 2000 como una escisión del Partido Liberación Nacional (PLN). Los disidentes cuestionaron tanto la corrupción de los gobiernos liberacionistas como el abrupto giro neoliberal del partido. Por otra parte, ambas fuerzas políticas comparten una vocación antimilitarista y el respeto a un núcleo básico de libertades públicas.

Durante la segunda mitad de la década anterior, el PAC cobró protagonismo por ser el referente partidario que enarbo-

laba la oposición al DR-CAFTA, en medio de una polarización social pocas veces vista. En contraste, el PLN, partido de gobierno a la sazón, abanderaba la aprobación del tratado de libre comercio con EE.UU. Traído al día de hoy, el presidente Solís no mencionó durante su campaña deseo alguno de desconocer el DR-CAFTA, pero ha planteado la necesidad de revisar aspectos que perjudican el desarrollo y equilibrio de las fuerzas productivas nacionales.

Varias de las diferencias entre el gobierno de Solís y el de la presidenta saliente — Laura Chinchilla— obedecen más a orientaciones personales que a ideologías partidarias. En todo caso, el combate a la corrupción es una demanda abanderada por el PAC sobre la cual tendría la presión de la opinión pública. También sería previsible que incrementara el apoyo a las fuerzas productivas dejadas de lado por la estrategia neoliberal. Aunque ambos proyectos políticos coinciden en diversificar relaciones económicas y atraer inversión extranjera directa (IED), el gobierno del PAC tendría mayor interés en establecer mejores condicionalidades fiscales y de transferencia de conocimiento a la IED. Y por su involucramiento en el proceso de integración regional, Solís podría tener una actitud más colaborativa con el sistema de integración centroamericana.

Al PAC se le concibe como un partido que busca recuperar y reactualizar los principios que llevaron al PLN a convertirse en un partido promotor de la inclusión social. Pero no lo tendrá fácil, dos factores se interponen de inicio: a) la crisis fiscal que constriñe la posibilidad de aumentar sostenidamente la inversión social, b) ser una minoría parlamentaria, lo que le impide — salvo que forje una sólida alianza con otras bancadas— impulsar una agenda progresiva.

Para ciertos asuntos, el ala más progresista del PAC pugnará por acuerdos con el Frente Amplio, partido de izquierda que logró posicionarse como tercera fuerza política. Al mismo

tiempo, en otros temas, los sectores más conservadores del partido defenderán la alianza con el antiguo bastión bipartidista —el Partido Social Cristiano (PUSC). Será difícil en el corto plazo, aunque no imposible, una sólida alianza PAC-PLN; al menos hoy se ven más como competidores por posicionarse como el partido mayoritario de Costa Rica.

7. ¿Qué valoración puede hacerse de las elecciones presidenciales realizadas en noviembre de 2013 en Honduras, entre febrero y abril de 2014 en El Salvador y Costa Rica, y en mayo de 2014 en Panamá, en perspectiva subregional y latinoamericana? ¿Qué correlaciones de fuerzas, ejes transversales, desafíos, fortalezas y continuidades se detectan?

Dadas las características de los partidos que llegaron al poder, así como las restricciones internas y externas de los países, ningún partido gobernante representa un profundo proyecto de transformación ni de oposición directa a los intereses imperiales en la región —aunque podrían darse gestos simbólicos en temas aislados. Los Estados centroamericanos, salvo el caso panameño, no cuentan con *commodities* estratégicos o rentas especiales (como la del Canal de Panamá) para acumular capital y plantearse una mayor autonomía política y económica respecto de los grandes intereses económicos que capturan la región. Esto no es una condición que impida de modo absoluto procesos de emancipación nacional, pero sí plantea una diferencia significativa con los procesos más sugerentes de la América del Sur.

En Honduras, la fragmentación partidaria tras el golpe de Estado ha permitido que el conservador partido nacional siga en el gobierno, con una agenda de militarización, privatización y de reducción del Estado. En El Salvador, el segundo período del FMLN es una buena noticia y las primeras señales insuflan opti-

mismo, pero hay que reconocer las limitaciones en el corto plazo para cambios de mayor profundidad. En Costa Rica, el PAC representa un valioso intento de recuperar la estatalidad perdida y de combatir la corrupción, si bien sin mayores pretensiones de construir un bloque hegemónico para transformaciones de mayor calado. Y en Panamá se cerró la puerta al ambicioso proyecto político del empresario Ricardo Martinelli, pero el partido ganador, el Panameñista, es un partido de centro derecha que tratará de recuperar el equilibrio tradicional del *statu quo*.

Habrá que seguir la evolución y peso político que puedan mantener LIBRE (Honduras) y el Frente Amplio (Costa Rica), ambos partidos situados como la segunda y tercera fuerza en sus respectivos países. Queda en evidencia que en Panamá la izquierda está disminuida y fragmentada, pues hasta el barniz de partido progresista que ostentaba el PRD se descascara cada vez más.

Pero más allá de analizar a quienes ganaron las elecciones, lo importante de ver es la articulación que pueda surgir entre los movimientos sociales y los partidos políticos que se presentan como alternativas de cambio e inclusión social. Es decir, lo estratégico pasa por construir alianzas horizontales entre los distintos sujetos que cuestionan, desde diferentes trincheras, el histórico aparato de dominación y marginación construido en Centroamérica.

Se podría concluir diciendo que, pese a las circunstancias adversas del presente, en algunos países del istmo hay oportunidades para ir construyendo bloques históricos que en un futuro, ojalá no muy lejano, viabilicen procesos emancipatorios. Pero esas oportunidades no se logran de manera automática; hay que ir las concretando paso a paso, desde la acción colectiva solidaria e inteligente.

Brasil en Centroamérica: diplomacia progresista y ambiciones regionales

Ariel Goldstein

LA POLÍTICA EXTERIOR DURANTE LOS GOBIERNOS DE HEGEMONÍA DEL PT

Desde su acceso al gobierno en enero de 2003, la administración de Lula da Silva definió la implementación de una política expansiva que le permitiera a Brasil incrementar su capacidad de influencia en América Latina y el mundo. Su intervención en distintos temas relevantes de la agenda internacional fue prueba de esta característica que adquiriría la política exterior a comienzos del siglo XXI con los gobiernos de hegemonía petista.¹ El intento de mediación de Lula en Medio Oriente con respecto al conflicto palestino-israelí, asumiendo una posición equidistante entre ambos países, su intervención para desactivar el programa nuclear iraní y su acercamiento a un entendimiento con Teherán significaron un alejamiento de posiciones tradicionales, lo cual le supuso al gobierno variadas críticas. Otra de las reivindicaciones que

1 Durante las presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva, la política exterior estuvo dirigida por tres funcionarios: el Canciller Celso Amorim; Samuel Pinheiro Guimarães, Secretario-General y Canciller Interno de Itamaraty, así como Marco Aurelio Garcia, Asesor de Política Internacional de la Presidencia, con un cargo al interior del Palacio del Planalto.

modelaron esta activa política exterior resultó de su exigencia de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las críticas, provenientes de influyentes periódicos de San Pablo e intelectuales ligados a la oposición política del *Partido de la Socialdemocracia Brasileña* (PSDB), acusaban al gobierno de haberse desviado de la tradición histórica de Itamaraty para realizar una política exterior “bolivariana”, partidaria y desprovista de rumbo. Estas reprobaciones, en cierta medida se debían, como señala Marco Aurelio García, al

“complejo de perro callejero”, retomando la expresión usada por Nelson Rodrigues para identificar un sentimiento de subalternidad que llega incluso a sectores de la élite brasileña, y que puede ser detectado incluso hasta hoy entre ‘observadores’ de la política exterior —algunos ex diplomáticos— cada vez que Brasil asume mayores responsabilidades en el escenario internacional, subiendo, para emplear una expresión de un ex embajador, “por encima de sus zapatos”.²

Por supuesto, esta pretensión de elevar el papel de Brasil a nivel regional e internacional generó tensiones con los intereses existentes por parte de los Estados Unidos hacia la región, así como con los sectores brasileños que buscan una mayor cercanía entre las definiciones de Itamaraty y las de los Estados Unidos. La política expansiva desarrollada durante la era Lula presentó ciertas diferencias con la ahora morigerada de la era Dilma, evaluada como más moderada en comparación³, así como con la desarrollada durante las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), tendiente a la búsqueda de una proyección autónoma de Brasil, y a nivel latinoamericano promotora

2 García, Marco Aurelio [2010]: “El lugar de Brasil en el mundo: la política exterior en un momento de transición” en *Brasil, entre el pasado y el futuro*, Emir Sader y Marco Aurelio García (comps.), Capital Intelectual, Buenos Aires. Pág. 177.

3 Oliver Stuenkel, “Recuo o normalização na política externa brasileira?”, en *Folha de S. Paulo*, 18/04/2014. Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/opinia0/2014/04/1441871-oliver-stuenkel-recuo-ou-normalizacao-na-politica-externa-brasileira.shtml>.

de una integración centrada en lo comercial a través del Mercosur.⁴ Con Lula ganó mayor ascendencia el discurso de una política “Sur-Sur”, una política “activa y altiva” según la expresión del entonces canciller Celso Amorim, vinculando la proyección de Brasil en el escenario internacional a los avances en materia de integración regional en términos no sólo comerciales, sino desde una dimensión política y estratégica⁵. Sin embargo, estas intenciones no se desarrollaron sin contradicciones con respecto a las ambiciones del gigante al interior de la región y sus pulsiones de proyectarse internacionalmente como potencia.

La política externa desarrollada por Brasil hacia América Central, que es objeto del presente artículo, expresa estas contradicciones hacia afuera que caracterizan al gigante sudamericano, entre un partido progresista (PT) que pretende afirmar sus relaciones con las opciones a la izquierda en el istmo centroamericano, y los intereses comerciales de la burguesía brasileña que pugnan por una maximización de los beneficios del intercambio comercial.

LAS POLÍTICAS HACIA CENTROAMÉRICA: COOPERACIÓN, SOFT-POWER Y AMBICIONES COMERCIALES

Las arraigadas concepciones y análisis que conciben a Centroamérica como el “patio trasero” de los Estados Unidos en la región han opacado en cierta medida la posibilidad de pensar las nuevas modalidades que ha asumido la relación del istmo con Brasil⁶. Como ha sido señalado, “la mayor dificultad en la relación Caribe Brasil procede de criterios académicos fuertemente enraizados en la geografía. Estados Unidos fue la primera po-

4 Mónica Hirst (2006): “Los desafíos de la política sudamericana de Brasil”, en *Nueva Sociedad*, Septiembre/Octubre.

5 “Brasil, un gigante que por fin despierta” Entrevista a Marco Aurelio García por Silvio Caccia Bava y Darío Pignotti en *Le Monde Diplomatique*, Noviembre de 2010.

6 Agradezco este comentario a Esteban De Gori.

tencia que englobó a toda esta región en base a la geopolítica”⁷. Dada la temprana afirmación hegemónica de los Estados Unidos en la región, la presencia del Brasil en Centroamérica hasta la primera mitad del siglo XX resultó limitada⁸. De este modo, hasta mediados del siglo XX, Brasil reconoció cierta preponderancia de los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el istmo centroamericano, tolerando las reiteradas intervenciones militares estadounidenses⁹. En línea con este reconocimiento hacia los intereses estadounidenses, Domínguez Ávila señala que durante los años '50 Brasil formó parte de la agenda anticomunista y desarrollista hacia la región, y esto permitió incrementar los volúmenes de intercambio comercial. Posteriormente, a partir del estallido de importantes conflictos en el istmo en los años 60' y '70, éste país procuró una posición de apoyo para una solución negociada y autónoma de los intereses de las potencias occidentales, principalmente de los Estados Unidos. En los años '80, el apoyo brasileño al Grupo Contadora tuvo un papel relevante al promover una salida negociada para los conflictos armados que asolaban Centroamérica.

Durante las presidencias de Cardoso y de Lula, sin embargo, Brasil comenzó a desarrollar hacia la región estrategias que permitieran una mayor articulación comercial y política. La última década evidenció una diplomacia mucho más activa por parte de Brasil hacia América Central, con una “profundización de las relaciones” como parte de su política Sur-Sur, incrementándose los viajes del presidente Lula, que visitó en sus ocho años de

7 Cabrera, Olga (2007), “Caribe Brasil: una relación en debate.”, en *Memorias, Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, Año 4, Nro. 8, Barranquilla, Colombia. Pág. 23.

8 Aleixo, José Carlos Brandi (1983): “O Brasil e a América Central”. En: *Revista Brasileira de Política Internacional*. Brasília, N° 101-104, 1983, Pág. 22.

9 Ávila, Carlos Federico Domínguez (2006): “Brasil-Centroamérica: cien años de solidaridad y cooperación (1906-2006).” *Cuadernos Americanos: Nueva Época* 4.118. Pág. 558.

gobierno los países de América Central y el Caribe en diecinueve ocasiones para reuniones bilaterales y en tres ocasiones para reuniones multilaterales¹⁰. El centramiento de la política exterior estadounidense hacia Medio Oriente generó condiciones de oportunidad para un despliegue de los instrumentos brasileños del *Soft Power* que pudieran propiciar esta aproximación. Si bien la política de Cardoso fue la base que inició las posibilidades de acercamiento hacia la región, durante el gobierno Lula fue que esta aproximación adquirió real dinamismo. A partir de Lula se evidenció “un ambicioso proyecto de concertación política como forma de generar fuerza para la realización de proyectos internacionales brasileños”¹¹. De este modo hemos visto, según señala Nunes, un discurso inicial defensor de la integración “Sur-Sur” hacia Centroamérica, el cual posteriormente fue dando lugar a la búsqueda de formas de cooperación con estrategias de *soft power*. Según el autor, la política exterior se caracterizó por “(a) la transferencia de tecnología y know-how a través del fomento de programas de cooperación; (b) la diplomacia cultural como forma de desarrollar la imagen del país dentro del subcontinente”¹². En términos comerciales,

la relación brasileño-centroamericana tiene como importante referente al Programa de Incentivo a las Inversiones Brasileñas en Centroamérica y Caribe (PIBAC), anunciado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en Guatemala, en septiembre de 2005. El PIBAC es coordinado por la cancillería de Brasil, y cuenta con el apoyo financiero del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). En términos resumidos, este programa pretende incentivar las inversiones de capitales privados brasileños en los países centroamericanos, sea para proveer productos con demanda reprimida en aquellos países o para aprovechar

10 Nunes, Tiago Estivallet (2012): “Política externa brasileira para a América Central eo Caribe (1995-2010): a ampliação das esferas de influência de uma potência média emergente.” Disertación de Maestría en Ciencia Política. Universidad de Rio Grande do Sul (UFRGS).

11 Ibidem, pág. 110.

12 Ibidem, pág. 111.

las facilidades derivadas de los acuerdos de comercio que los países centroamericanos tienen con terceros mercados.¹³

Otro de los intereses comerciales a partir de los cuales Brasil se manifiesta en la región es la producción de combustible alternativo, como el etanol, que aparece como una de las prioridades en sus intereses hacia Centroamérica. Incluso, en pos de estos fines, aparece la asociación de Estados Unidos y Brasil para producir etanol en los países de América Central.¹⁴

Estas políticas mencionadas, tendientes a afirmar los intercambios comerciales, coexisten de modo complejo con las relaciones que se han producido a nivel político-partidario. La intervención de la cancillería brasileña en el golpe que derrocó en Honduras al presidente Manuel Zelaya en 2009, alojando al mandatario depuesto en la propia embajada en Tegucigalpa frente a la postura dubitativa de Washington, representó la intención de incidir en la política regional poniendo límites a los intereses estadounidenses y en favor de la consolidación de las opciones progresistas en el istmo. A su vez, para las elecciones presidenciales de El Salvador en 2014, el PT apoyó al candidato del *Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional* (FMLN) Sánchez Ceren, considerando que, en tanto la región de América Central se encuentra fuertemente hegemonizada por los Estados Unidos —a diferencia de América del Sur, donde actualmente su influencia es más reducida— resultaba importante el apoyo del PT a alternativas progresistas, según el actual Secretario Ejecutivo del Foro de San Paulo, Valter Pomar.¹⁵ Según Pomar

La tensión entre intereses geopolíticos de largo plazo versus intereses

13 Avila, Carlos Federico Domínguez. "Brasil-Centroamérica: cien años de solidaridad y cooperación (1906-2006)." *Cuadernos Americanos: Nueva Época* 4.118 (2006): 125-143. Pág. 572.

14 "Brasil e EUA tem parceria para Etanol celulósico", *O Estado de S. Paulo*, 23/05/2007.

15 Valter Pomar (2013): *Temas Internacionais*, Página/13, Brasil, pág. 66.

comerciales de corto plazo está presente en toda la política externa del gobierno brasileño desde 2003. Lo que es particular, en el caso de América Central, es la tensión entre una política de integración centrada en América del Sur y una política de integración centrada en América Latina (México y el Caribe inclusive). Antes, ambas tensiones no existían, tanto porque los intereses geopolíticos de largo plazo estaban sometidos a los intereses comerciales, como porque predominaba una línea subalterna a los Estados Unidos.¹⁶

Como hemos podido observar en este artículo, la política del gobierno brasileño hacia América Central expresa, por un lado, un discurso partidario y oficial pro-integración que busca un fortalecimiento de las candidaturas progresistas, a partir del apoyo del PT a quienes representan estas opciones en Centroamérica. Por el otro, un accionar vía Itamaraty y los sectores empresariales que presionan por lazos diplomáticos que fortalezcan los vínculos por la vía comercial en pos de una maximización de los beneficios para esta potencia emergente. De este modo, Brasil expresa las tensiones entre un discurso progresista del partido de gobierno y la presión de las grandes empresas que aspiran a definir en torno de sus intereses materiales una política exterior afín a su rentabilidad. ¿Será el discurso progresista parte de la estrategia de *Soft Power* que brinda mayor eficacia simbólica a las políticas empresariales de maximización de beneficios? Pregunta de difícil respuesta, pero que sin duda se encuentra enraizada en las complejas contradicciones que hacia afuera experimenta actualmente el gigante sudamericano.

16. Entrevista por mail a Valter Pomar, 23/05/2014.

Ariel Goldstein es Magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM). Sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Como Becario de Posgrado del Conicet, se ha especializado en el área de investigación de medios y política en América Latina, con especial énfasis y desarrollo de trabajos sobre el caso de Brasil. Actualmente está realizando el Ciclo Superior del Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales-UBA).

Un istmo en disputa: transformaciones recientes en la coyuntura centroamericana

Agustín Lewit

A esta altura no hay que argumentar demasiado la idea de que, en términos generales, el escenario político en América del Sur ha virado en los últimos años algunos grados hacia la izquierda.

Aun cuando dicho desplazamiento no comprenda a todos los países, puesto que también han surgido durante los últimos años en la región gobiernos conservadores, e incluso en aquellos donde aquél movimiento se constate no falten cuestionamientos sobre el alcance del mismo, lo cierto es que a esta altura parece más bien un dato de la realidad que cierto espíritu progresista se ha desparramado y consolidado por el subcontinente suramericano.

Sin embargo, el viraje mencionado —que contrasta, por lo demás, con el reposicionamiento de las fuerzas conservadoras en los grandes centros mundiales de poder— parece haber trascendido las fronteras del Cono Sur.

En efecto, algo de lo mencionado también ha ocurrido en Centroamérica donde, a contrapelo del escenario de las últimas décadas, marcado por una cerrada hegemonía neoliberal y una descollante injerencia norteamericana, varias naciones

del istmo continental han visto surgir experiencias políticas que, incluso en su heterogeneidad, se inscriben cómodamente en la amplia gama del progresismo latinoamericano.

Ya sean versiones actualizadas de fuerzas insurgentes del pasado, como lo sucedido en Nicaragua y El Salvador, ya como emergencia de proyectos políticos novedosos, como en el caso de Honduras y, más recientemente, Costa Rica, los escenarios políticos centroamericanos se han visto tensionados por la aparición de distintas fuerzas progresistas que pusieron en jaque —con mayor o menor éxito— un dominio hasta entonces solidificado de las fuerzas conservadoras, ganando en algunos casos las presidencias y, en otros, consolidando una presencia legislativa importante.

DE LA INSURGENCIA AL GOBIERNO: NICARAGUA Y EL SALVADOR

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es un movimiento insurgente de izquierda que surge en 1961 en Nicaragua, inspirado en el pensamiento de Augusto Sandino, aquél líder que capitaneó la resistencia nicaragüense frente a la ocupación norteamericana durante la primera década del siglo XX.

Fuertemente inspirado por la experiencia de la Revolución Cubana, como así también por los movimientos anti-colonialistas africanos —en especial el de Argelia—, el FSLN orientó su lucha armada a combatir la dictadura de la familia Somoza, en el poder desde 1934.

Tras largos años de estrategia centrada en el *foquismo* y en la acumulación de fuerzas de manera silenciosa, el FSLN acecha el golpe final a una moribunda dictadura somocista y llega al poder el 19 de julio de 1979, comenzando un período de once años de gobierno consecutivos, en los cuales fue ratificado electoralmente en varias oportunidades. Nacionalización de la banca, reforma agraria, expropiación de bienes de las clases acomodadas y la casi total erradicación del analfabetismo, fueron algunas de las medidas más disruptivas del FSLN en el poder.

Sin embargo, después de más de una década de gobierno, el Frente pagó caro las graves consecuencias de una persistente guerra civil, azuzada incansablemente por EEUU, quien también bloqueó económicamente al país, generando graves perjuicios para el mismo.

Así, en las elecciones de febrero de 1990, el sandinismo es derrotado por la candidata Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora (UNO), espacio donde convergieron —bajo la celosa tutela del gigante del Norte— todos los partidos opositores al FSLN.

Se inicia desde entonces para Nicaragua la etapa neoliberal, que incluirá entre otras medidas la extranjerización de la economía y un crecimiento exponencial de la deuda externa. Dicho perfil se agudiza desde 1993, con la privatización de la mayoría de las empresas estatales y un riguroso ajuste fiscal. Las presidencias subsiguientes de los empresarios Arnoldo Alemán —catalogado como uno de los presidentes más corruptos de toda la historia latinoamericana— y de Enrique Bolaños Geyer, ambos representantes de la conservadora Alianza Liberal, completarán el ciclo neoliberal nicaragüense, con gravosas consecuencias sociales para las mayorías populares.

El retorno del FSLN en 2006, de la mano de uno de sus antiguos referentes, Daniel Ortega, supuso el fin de los años de hegemonía conservadora. En efecto, la implementación de numerosos programas sociales para hacer frente a casi un 60% de la población sumida en la pobreza, marcaron su primer mandato. Al respecto, la CEPAL consigna que Nicaragua ha sido uno de los países que más ha reducido la desigualdad en los últimos años¹.

Asimismo, la recuperación de la gratuidad en la educación y la salud y el persistente aumento del salario mínimo, al igual que la implementación de diversos programas de mejoramiento

¹ Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], mayo, 2014.

del trabajo rural, apuntalan la hipótesis de un nuevo tiempo nicaragüense de signo *posneoliberal*.

En el plano internacional, Ortega impulsó el acercamiento de Nicaragua a Venezuela y Cuba, y la incorporación de su país a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) —con seguridad, la iniciativa de integración más revolucionaria de esta época—, lo cual supone, sino un corte abrupto —puesto que aún permanece vigente un TLC con EEUU— sí una disminución de los agobiantes vínculos con el Norte.

Si bien el retorno del FSLN no carece de ambigüedades, y aun cuando pueda darse crédito a aquellas posturas que critican su “moderación” respecto a lo que supo ser en décadas pasadas, lo cierto es que desde el 2006, Nicaragua ha entrado, junto con varios países de la región, en la ardua tarea de desarmar el ominoso entramado neoliberal en sus múltiples dimensiones. Por su parte, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) —espacio de convergencia de distintos partidos de izquierda y experiencias armadas— surgió en El Salvador a mediados de los setenta, como resistencia a la Junta Militar de Gobierno, por entonces en el poder.

En enero de 1981, el FMLN lanza una ofensiva armada, la cual desata una guerra civil que se extendió hasta 1992, año en el que se firmaron los acuerdos de paz. Desde entonces, el Frente ha participado en la arena política salvadoreña como principal partido de oposición. Ello hasta que en 2009, de la mano de Mauricio Funes, logra llegar a la presidencia, dando inicio al primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña.

Cierto es que los cinco años de Funes en el poder, si bien mostraron algunos avances sociales respecto a las décadas pasadas², no han cumplido las grandes expectativas de muchos simpati-

2 Entre los que destacan el “Programa Ciudad Mujer”, implementado desde el 2011, el cual se orienta a brindar atención integral a las mujeres frente a la violencia de género, a su salud sexual y reproductiva, y al empoderamiento económico; un plan integral de ayuda a los escolares y otro orientado a los adultos mayores.

zantes *farabundistas*. Faltas de definición sobre lo se esperaba en función de una agenda clara de izquierda, como así también persistentes coqueteos con EEUU, tiñeron de ambigüedad la primera gestión del FMLN al frente de la presidencia salvadoreña.

Sin embargo, la reciente ratificación electoral del Frente y, sobretodo, la elección como presidente de Salvador Sánchez Cerén, generan grandes expectativas de la instalación definitiva de un rumbo progresista. Y es que, a diferencia del presidente saliente Funes —un *outsider* que arribó al FMLN con el objetivo de amalgamar a un amplio abanico social— Sánchez Cerén es un cuadro que proviene de las entrañas del farabundismo y representa algo así como “la izquierda de la izquierda”. Con promesas que van desde “un giro hacia el sur”, que acerque a la nación salvadoreña a Suramérica, hasta avances concretos en la redistribución de la renta —en un país con altísimos índices de pobreza y marginalidad—, el flamante presidente parece haber oído con atención el cansancio de muchos respecto a los titubeos de Funes y los reclamos por profundizar la senda abierta hace un lustro.

De hecho, apenas asumido, el nuevo mandatario oficializó la incorporación de El Salvador a Petrocaribe, la iniciativa comandada por Venezuela que busca abastecer de recursos energéticos a la región caribeña y centroamericana, sobre la base de la equidad, la justicia y la autonomía, llevando así a la práctica las promesas lanzadas sobre una mayor integración regional.

También es cierto que factores estructurales de la economía salvadoreña dificultan la autonomía respecto de EEUU y, quizás, allí radique el principal desafío de la nueva gestión que comienza. Como muestra de ello, aparece el FOMILENIO II, un mega-préstamo que el gobierno estadounidense está pronto a desembolsar en El Salvador para el desarrollo de emprendimientos productivos en la región costera, a cambio de la ratificación del TLC entre ambos países.

Por lo demás, y con los desafíos planteados presentes, un segundo mandato del FMLN, además de contar como capital

con la experiencia de los cinco años anteriores, confirma la inclinación de la mayoría de los salvadoreños por una fuerza de izquierda cada vez más consolidada como fuerza de gobierno.

COSTA RICA Y HONDURAS: LA NOVEDAD DE LA IZQUIERDA Y EL FIN DE LOS BIPARTIDISMOS

Las elecciones presidenciales en Costa Rica, celebradas en primer término el 2 de febrero y una segunda vuelta el 6 de abril de 2014, dejaron como consecuencia una alteración notable del escenario político costarricense.

En primer lugar, el presidente electo, Luis Guillermo Solís, académico y referente del Partido de Acción Ciudadana (PAC), una formación política de corte socialdemócrata surgida hace apenas trece años por fuera de las estructuras tradicionales, logró desplazar del poder al conservador Partido de Liberación Nacional (PLN), derrotando a su candidato Jhonny Araya, y poniendo fin, con ello, a los cuatro años de gobierno de Laura Chinchilla.

Al mismo tiempo, el abultado triunfo del PAC —ganó el ballottage con el 77,9% de los votos— marcó el final de casi tres décadas de un bipartidismo de hecho, dominado por el derrotado PLN y el ahora partido minoritario Unidad Social Cristiana (PUSC). El ascenso a la presidencia de una fuerza novedosa, de la mano de una figura *externa* a la política institucional, puso en evidencia las ansias de gran parte del electorado *tico* de inclinarse por una opción que trascienda las estructuras tradicionales, dejando en evidencia el agotamiento de las mismas.

El otro dato contundente de las recientes elecciones costarricenses, que apuntala la idea de una mutación del escenario político en dicho país, fue la importante participación del Frente Amplio (FA) y de su candidato, Mauricio Villalta. Si bien estuvo lejos de ganar las elecciones, tal como lo consignaban diversas encuestas previas, lo cierto es que la obtención de 17,25% de los votos posicionó a este conglomerado de fuerzas de izquierda

en el tercer lugar, toda una novedad en la historia política del país. La buena performance electoral se tradujo para el FA en la obtención de nueve bancas parlamentarias, lo que le permite tener una interesante presencia parlamentaria.

En suma, un presidente que emerge de una fuerza política novedosa y que promete, además, revertir las medidas neoliberales, junto con el también novedoso arribo de la izquierda al Parlamento con un buen número de escaños, permiten inscribir a la nación tica en esta corriente de renovación política regional.

Por último, en Honduras, Libertad y Refundación (LIBRE), el partido surgido tras la crisis política de 2009 en la cual se depuso mediante un golpe parlamentario al entonces presidente Manuel Zelaya, si bien no logró imponer a su candidata Xiomara Castro, que resultó derrotada por el conservador Partido Nacional (PN), sí llegó a constituirse —estructurado en torno a un claro programa de izquierda— como la segunda fuerza nacional, rompiendo más de un siglo de bipartidismo conservador entre el PN y el Partido Liberal, alterando con ello de manera sustancial la arena política local.

Aunque no obtuvo la presidencia, LIBRE consiguió una importante presencia legislativa al obtener treinta y nueve de las ciento veintiocho bancas del Parlamento unicameral, lo que le otorga, aun sin tener mayoría, una buena plataforma desde la cual hacer frente a las políticas conservadoras que los partidos tradicionales buscan continuar.

Al mismo tiempo, con el surgimiento de LIBRE como primera fuerza política de izquierda, se ha activado en Honduras un sustancioso movimiento social que incluye a un sector importante de campesinos, estudiantes y trabajadores, que encontró en las filas de Libertad y Refundación un espacio casi inédito desde el cual participar activamente en la política partidaria hondureña.

Asimismo, el destacado lugar de LIBRE en relación a su cortísima vida —se inscribió formalmente como partido recién en 2012—

hace suponer que es una fuerza en pleno crecimiento y con altas chances de ganar la presidencia en los próximos comicios.

Así las cosas, el inesperado giro hacia la izquierda de un presidente proveniente de uno de los dos partidos conservadores, el golpe de Estado al mismo como manera de frenar abruptamente dicho movimiento sorpresivo y la resistencia popular a esa estrategia conservadora, parecen haber despertado en Honduras las fuerzas sociales hasta entonces excluidas de la vida política. El nuevo pulso que LIBRE le ha impreso a la coyuntura política hondureña también colocan a dicho país en la senda de un renovado tiempo político y social.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis hasta aquí expuesto, el cual, por cuestiones de extensión, dejó afuera numerosos elementos que hacen a la coyuntura política de los distintos países, alcanza sin embargo para dar cuenta de una idea principal: hay en Centroamérica claros indicios de la instauración de un nuevo tiempo político y social, que marcha en sintonía con lo sucedido en los últimos años en el Cono sur del Continente.

El comienzo de nuevos procesos sociales, que —claro está— no carecen de contradicciones ni contramarchas, pone en evidencia que la región central de América no se ha mantenido al margen de una geopolítica mundial y continental en plena mutación, donde la indiscutida hegemonía norteamericana en paralelo al predominio exclusivo del pensamiento neoliberal, comienzan poco a poco ser puestos en duda.

En términos de política institucional, distintas alternativas electorales de izquierda o progresistas se han ido materializando poco a poco en las arenas políticas centroamericanas, nutridas tanto por movimientos sociales vigorosos como por el agotamiento de la forma de gestión política de la derecha. Así, los cambios recientes en los sistemas de partidos de los cuatro paí-

ses analizados, han reflejado la renovación política mencionada.

El desafío para el futuro inmediato y no tanto es, sin dudas, encontrar la manera en que las distintas experiencias alcancen una integración virtuosa, que las oxigene para avanzar en sus golpeadas realidades y traiga, sobre todo, alternativas a la dependencia económica respecto de EEUU. El punto primordial en ese sentido parece ser la transformación de las estructuras económicas tradicionales que no generan suficiente empleo. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) parece ser un buen espacio para tal fin, si es que los nuevos gobiernos progresistas avizoran su importancia. Con igual relevancia se inscriben los posibles lazos con los nuevos bloques regionales, en especial el ALBA, por la cercanía territorial de Venezuela, motor de dicho bloque regional.

Una gran cantidad de golpes de Estado, numerosos fraudes consumados y una asfixiante injerencia norteamericana han signado una historia complicada para las izquierdas centroamericanas. Es cierto que esos peligros lejos están de desaparecer. Pero cierto es también que el aire de “un nuevo tiempo” proveniente del sur, ha colaborado con una revigorización de dichas fuerzas, las cuales han sabido interpretar el gran descontento popular, el agotamiento de los modelos económicos centrados en el libre cambio y la crisis de representación que afecta a muchos partidos tradicionales.

En ese resurgimiento de alternativas concretas frente al liberalismo económico y el conservadorismo político que hoy proliferan en Centroamérica, van anudadas las esperanzas de una mejor vida de millones de personas. Ojalá, entonces, que esas esperanzas comiencen a materializarse.

Agustín Lewit, politólogo argentino. Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, UBA) y Maestrando en Ciencia Política y Sociología de FLACSO-Argentina. Colaborador en distintos periódicos nacionales (Tiempo Argentino, Página/12), Editor/redactor de NODAL. Investigador colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Argentina).

2. Costa Rica

Costa Rica 2014: elecciones teñidas de progresismo

Armando Chaguaceda

Costa Rica tiene, desde hace unos meses, un presidente de centroizquierda y una nueva Asamblea Legislativa con una importante bancada de izquierda. En un contexto tradicionalmente dominado por los poderes institucionales y fácticos de la derecha nacional, semejante repunte —y los procesos que lo acompañan— constituye un fenómeno digno de atención y estudio. Siendo un país conocido por su sorprendente estabilidad política y relativa igualdad y progreso socioeconómicos en el contexto centroamericano, la emergencia de alternativas progresistas en Costa Rica da cuenta de las grietas en el *sui géneris* Estado de Bienestar *tico*, en la legitimidad de la clase política local y en los consensos que sobre el modelo de participación política y ascenso social existen dentro de la población costarricense.

Las elecciones de 2014 se produjeron en un contexto inédito de tendencia ascendente de la protesta social a lo largo de la administración de Laura Chinchilla Miranda, en lo que fue el ciclo de acción colectiva más intenso en lo que va del nuevo milenio.¹ Si bien la protesta disminuye durante los años electorales,

¹ El número registrado de acciones colectivas pasó de 117 en noviembre de 2011, a 107 en junio de 2012, 92 en noviembre de 2012 y 109 en febrero de 2013.

esta campaña se inició en medio de un ciclo de movilizaciones diversas aunque dispersas. La gran cantidad de temas que motivan la protesta —la corrupción e incompetencia gubernamentales, las obras en construcción en la frontera con Nicaragua, el deterioro de los servicios sociales, entre otros— tuvieron como correlato posturas variadas de las organizaciones y movimientos frente a los candidatos y el proceso electoral (Raventós, 2013).

El 2 de febrero de 2014 los costarricenses fueron a las urnas en un clima caracterizado por una profunda desconfianza ciudadana hacia “los políticos”, derivada de la suma de escándalos de corrupción y de percepción de mal desempeño gubernamental de los últimos veinte años; profundizados en la pasada administración. Factores que incidieron en la caída de los indicadores de estabilidad democrática a su punto más bajo desde el inicio de su medición en 1979 (Estado de la Nación, 2013). Semejante descenso de la valoración de “los políticos” se inscribe en una cultura política ciudadana fuertemente delegativa, que —a diferencia de otros países, donde el acento del tal rasgo se expresa en la acción discrecional del presidente— privilegia el voto como forma de participación ciudadana y deposita colectivamente en funcionarios, parlamentarios y dirigentes partidistas la responsabilidad de llevar a buen puerto la gestión de gobierno.² Con una presidencia relativamente débil y una asamblea legislativa tradicionalmente dominada por los principales partidos, es comprensible que los procesos de desafección ciudadana tengan como foco a una clase política que busca preservar sus privilegios y posicionamientos en temas como el acceso a financiamiento público y la colonización de la administración gubernamental.

En los últimos quince años se ha pasado de un sistema bipartidista a uno pluripartidista moderado. A inicios del milenio, uno de los partidos del sistema se desplomó (Unidad Socialcristiana, PUSC), mientras que el otro (Liberación Nacional, PLN) so-

2 Raventós, Ciska (2013) *La sociedad civil frente a las elecciones del 2014* [inédito].

brevivió como el único partido que conserva lealtades estables, aun cuando su total de adherentes haya disminuido respecto de niveles precedentes. Mientras, los partidos que han emergido en el nuevo milenio (Acción Ciudadana, PAC) no han consolidado lealtades estables en el electorado. En suma, quienes simpatizan con algún partido son cada vez menos: cálculos optimistas hablan del 50% de la ciudadanía, mientras los pesimistas identifican apenas un tercio.³ Además, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, casi el 42% de los votantes empadronados son menores de 35 años, nacidos en medio de políticas neoliberales, cuyas formas de participación y socialización políticas son diferentes y resultan refractarios a la seducción de los partidos tradicionales, cuyas candidaturas están fundamentalmente integradas por personas mayores de 35 años.⁴

Desde julio de 2013, la candidatura presidencial de José María Villalta (diputado del Frente Amplio) pareció calar, allende la izquierda, en importantes sectores de la ciudadanía, desencantados con la política dominante (particularmente personas jóvenes, de sectores urbanos e ingreso medio) que alguna vez apostaron por el PAC⁵, así como en zonas costeras particularmente azotadas por la desigualdad y exclusión. En su programa de gobierno⁶, Villalta hizo hincapié en el impulso a la democracia participativa aunada a los mecanismos establecidos para las consultas, audiencias e iniciativas ciudadanas, presupuestos participativos locales, participación para la aprobación

3 De esta cifra, alrededor de la mitad de quienes simpatizan lo hacen con el PLN, mientras que la otra mitad se distribuye entre los demás partidos, sin predominios importantes ni estables.

4 Ver <http://aceraenfrente.blogspot.mx/2014/01/votos-jovenes-y-partidos-viejos.html>

5 Solano, Héctor (2013) *Elecciones en Costa Rica: el crecimiento del Frente Amplio y las perspectivas para el avance de las izquierdas* en http://www.rosalux.org.mx/Las-elecciones-en-Costa-Rica_Hector-Solano

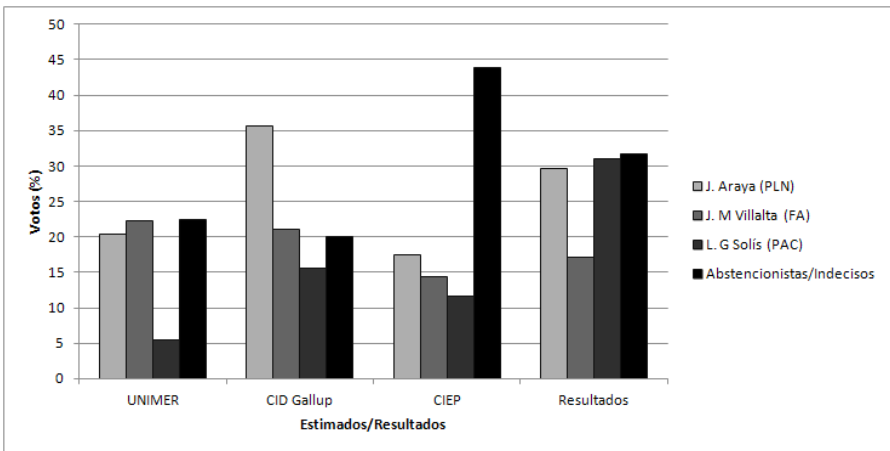
6 Frente Amplio (2013) *Plan de gobierno de Frente Amplio. Un país de oportunidades para todas y todos* en <http://www.villaltapresidente.cr/plan-de-gobierno-frente-amplio/>

de grandes proyectos de obra pública y funcionamiento de las instituciones autónomas. Además, llamó a vincular a la agenda de un hipotético gobierno del FA la lucha por la defensa del territorio y la recuperación de una Ley de participación ciudadana en los asuntos ambientales —vetada por los gobiernos de Oscar Arias— para apoyar a las comunidades afectadas por los megaproyectos. Una cuestión sin duda neurálgica, dado el hastío ciudadano con el tema, lo constituyó su llamado a fortalecer los mecanismos de combate y denuncia a la corrupción, abogando por eliminar la inmunidad de funcionarios y políticos, equiparar los delitos de corrupción a crímenes de lesa humanidad, y crear las condiciones que impidan el maridaje entre recursos públicos y beneficios privados que practica la clase gobernante. Para impulsar tal agenda, superando la resistencia de los poderes facticos y de la partidocracia dominante, el FA señaló la necesidad de una legislación de medios que recupere el control social de estos y democratice la comunicación masiva.⁷

No obstante, en los comicios del 2 de febrero el electorado costarricense hizo gala de su proverbial gusto por las soluciones moderadas, dando su apoyo no a Villalta, sino al candidato de centroizquierda, el académico Luis Guillermo Solís. Johnny Araya (por el oficialista PLN) y Solís (por el PAC) resultaron punteros en la elección presidencial, quedando para una segunda ronda el 6 de abril. Se produjo una doble “sorpresa”: Acción Ciudadana quedó en primer lugar (contra los pronósticos de las encuestas) disputando el poder a los *liberacionistas*, y la izquierda del Frente Amplio, obtuvo un histórico 17,4%, multiplicando su presencia parlamentaria. Los resultados de la primera vuelta electoral revelaron que ninguna encuestadora acertó en sus

7 El politólogo Manuel Rojas ha señalado la responsabilidad de los medios de comunicación en mejorar la calidad de su cobertura de los procesos y propuestas político-electorales, en un clima caracterizado por la desconfianza ciudadana hacia políticos y partidos, en: http://aceraenfrente.blogspot.mx/2013/07/los-medios-y-la-campana-electoral_23.html

pronósticos y que buena parte del electorado se asustó con el ambiente de polarización —basado en declaraciones de los candidatos y en su manipulación por los medios—, prefiriendo la opción que les parecía inofensiva. A continuación se representa la diferencia entre los pronósticos de las principales encuestadoras y los resultados reales de la primera vuelta.⁸



Fuente: Elaboración Propia.

NOTA: En tanto estos no fueron los únicos candidatos en disputa, se explica que la suma de sus votos no cubra el total de los concurrentes. Mientras, el porcentaje de los abstencionistas/indecisos se calcula respecto de la masa total de votantes.

⁸ Tomando los candidatos del PLN, FA y PAC, la encuesta de UNIMER (6-12/1/2014) arrojó respectivamente 20,3%; 22,2% y 5,5% de intención de votos favorables; la CID Gallup (14-25/1/2014) daba 35,6%; 21% y 15,6%; mientras que la del CIEP (20-27/1/2014) vaticinaba 17,4%; 14,4% y 11,6%. Frente a estas predicciones, en la primera vuelta de las elecciones resultó J. Araya con un 29,59 %; J.M. Villalta con 17,14 % y de puntero L.G. Solís con 30,95 %. En cuanto al número de abstencionistas e indecisos los vaticinios de UNIMER (22,4 %) CID Gallup(20%) y CIEP (43,9 %) no correspondieron con el resultado real de 31,75 %.

Para el PLN los resultados de esta primera ronda evidenciaron una derrota, dada la enorme maquinaria puesta en juego. Pudo contar, sin embargo, con sus votos tradicionales y el de personas asustadas por el candidato frenteamplista. La campaña contra este último favoreció —pese al declive de su partido— al candidato de Acción Ciudadana, el cual se vio favorecido por parte del voto *liberacionista* urbano y un segmento de la juventud indecisa residente en ciudades. Pese a no alcanzar la presidencia, el FA emerge como segunda fuerza en todas las provincias costeras, zonas principalmente rurales —antiguos baluartes *liberacionistas*— que padecen en mayor medida los efectos de la creciente desigualdad y exclusión económicas. Además, pasa de contar con un solitario diputado, el propio Villalta, a agenciarse 8 curules en la nueva Asamblea Legislativa, convirtiéndose en una fuerza política nacional.

A contrapelo de la propaganda de la derecha costarricense, semejantes resultados no presagian una “venezolanización” de la política local. La base ideológica y electoral del progresismo *tico* podría caracterizarse, dentro de su heterogeneidad, por una mezcla de liberalismo y socialdemocracia, acompañados por representantes de nuevos movimientos sociales —fuertemente creativos y horizontales— y militantes/herederos de las viejas organizaciones de izquierda tradicional; todo lo cual dificulta su caracterización como socialista o izquierdista, al menos en los términos convencionales. Si bien, de haber resultado ganador Villalta, aquellos leninistas del FA habrían podido, aprovechando su capacidad organizativa, disciplina ideológica y apoyo externo, intentar controlar puestos claves en el gobierno, la propia correlación de fuerzas —dentro y fuera del Frente—, la peculiar cultura política y jurídica de la ciudadanía costarricense y el contexto regional habrían complicado tal apuesta radicalizadora.⁹

⁹ En diversas entrevistas e intervenciones públicas, Villalta se ha identificado como un “socialista democrático”, en otras ocasiones ha utilizado el término “socialis-

En abril, tras anunciarse el retiro de la contienda del candidato del PLN (en una movida que suscitó varias interpretaciones), correspondió a Luis G. Solís enrumbar la política nacional durante la etapa 2014-2018. Al político e intelectual josefino se le reconocen su sobriedad personal, sus credenciales para el manejo de la política e historia nacionales, así como el conocimiento del entorno diplomático regional. No caben dudas sobre su compromiso con agendas genésicas del PAC, como la lucha anticorrupción y la promoción de la participación ciudadana.¹⁰ Sin embargo, habrá que evaluar, a partir de este momento, su capacidad para establecer un liderazgo que mantenga los equilibrios intrapartidarios; en particular entre tendencias conservadoras —como el llamado Grupo Amanecer, nucleado alrededor del fundador del partido, Ottón Solís— y otras más a la izquierda —el Grupo Germinal, con notable arraigo en segmentos de la juventud del partido—, potencialmente proclives a acuerdos con un FA reforzado. Y, en un mayor calado, deberá probar su capacidad como estadista para producir la mezcla de buena gestión, honestidad administrativa y reencantamiento con la democracia que la ciudadanía demanda y el país necesita.¹¹

En cualquier caso y para el futuro inmediato, la agenda del progresismo *tico* pasa por neutralizar la agenda neoliberal de las derechas; construir, democráticamente, auténticas ma-

ta” a secas, para reafirmar su carácter progresista. Ver Mata, Esteban (2014) José María Villalta: ‘El PAC quiere votos del Frente Amplio, sin hablar con el Frente Amplio’ en http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Maria-Villalta-PAC-Frente-Amplio_0_1395060650.html. Para conocer las diversas posturas coexistentes dentro de la cultura política del progresismo costarricense, que expresan las oportunidades y tensiones arriba mencionadas, ver el debate convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en la coyuntura preelectoral en <http://www.rosalux.org.mx/evento/proyectos-alternativos-frente-las-elecciones-en-costarica-2014>

10 Para un buen retrato del presidente electo ver: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/01/actualidad/1398957454_201596.html

11 El programa de gobierno de Luis G Solís está disponible en: <https://luisguillermo.cr/propuestas>

yorías sociales e impulsar un rescate innovador de las políticas sociales y democratizadoras. Las mismas que concedieron, alguna vez, el calificativo de “Suiza centroamericana” al hermoso país de la *pura vida*.

Armando Chaguaceda es politólogo e Historiador, especialista en historia y política latinoamericanas. Investigador de El Colegio de Veracruz (México), miembro del Observatorio Social de América Latina y Coordinador de Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Luis Guillermo Solís: nueva derecha, republicanismo neoliberal y “negación” del liderazgo

Esteban De Gori

I

El neoliberalismo ha logrado transformar a la mayoría de los partidos y grupos de derechas de América Latina en actores que avalen y sostengan un orden democrático. De alguna manera, podemos indicar, que el neoliberalismo fue más efectivo que los procesos llamados de “transición democrática” a la hora de socializar a las derechas en el “juego” democrático. Su efectividad principal, cuestión que no logró dicha “transición”, fue crear y afirmar nuevos “actores democráticos” vinculados a la transformación estructural que requería el capital global, como a la incipiente fragmentación social y al desencuchamiento de grandes sectores de la sociedad de anteriores instituciones.

La derrota de las izquierdas a nivel continental en las década del 70' y 80', la disolución del bloque soviético y el vínculo entre democracia y libre mercado diagramado por los *think tanks* de Washington ofrecieron (e impusieron) a las derechas un contexto y una fórmula para viabilizar y ampliar sus intereses. Es decir, existió un conjunto mayoritario de derechas

anteriores al neoliberalismo (antes vinculadas al Estado de Compromiso, a proyectos excluyentes y a las dictaduras), como aquellas creadas por su dimensión modernizadora y su cambio estructural, que se modelaron en la construcción y aceptación de la democracia como conjunto de reglas de alternancia, como instancia de competencia para acceder al poder, como instrumento para ampliar la representación política y, por último, como posibilidad de obtener una fuerte adhesión popular. Una democracia que habilitaba y ponía en entredicho las políticas estatales bienestaristas o aquellas orientadas a la regulación del capital. Por tanto, la imaginación de una “democracia sin Estado regulador” y de una modernización imparable (provista por la revolución tecnológica) reactualizó el sentido de las derechas preexistentes y movilizó la recreación de nuevas derechas políticas en la América Latina de fines del Siglo XX, las cuales fueron reclamando su espacio en la escena electoral y en la conducción de los Estados.

Las derechas, primero tímidamente se “recluyeron estratégicamente” en las condiciones que formularon las “transiciones a la democracia” y, luego, en la promesa democrática que ofrecía (o imponía) la globalización para el continente americano. Pero, a su vez, se produjo otro fenómeno en el registro de la cultura política del siglo XXI y este estuvo relacionado a la elaboración y resignificación por parte de estas derechas de un discurso neoliberal-republicano, el cual se expresó de manera diferencial en las distintas realidades estatales. Esta articulación discursiva, permitía pensar un orden político sujeto a la división de poderes y a las leyes —muchas de las cuales fueron modificadas por el impulso neoliberal para desregular el Estado y la circulación del capital—, cuestión que buscaba impedir el retorno de las figuras “malditas” para la derecha latinoamericana y norteamericana como el populismo y sus liderazgos¹.

1 Aunque pese a esto, existieron muchos liderazgos que fueron concebidos por di-

Figuras “despilfarradoras” que pondrían en duda la austeridad y eficacia que suponían las recetas neoliberales. Entonces, toda idea de “bien común” —ligada al republicanismo clásico y sostenido (de alguna manera) en los discursos de décadas anteriores— es sustituida por la reivindicación de la división de poderes, por un léxico que fetichiza la seguridad jurídica, la tecnocracia, el institucionalismo y por un lenguaje contrario a la corrupción². Esas nuevas derechas se afirman y se fundamentan en la expulsión cultural y política de las necesidades y garantías sociales de la esfera democrática; como en discursos que circulan en sociedades atravesadas por la fragmentación social y la erosión de actores políticos y económicos que habían tenido un lugar gravitante —en términos de integración social— en décadas anteriores. Por cierto, la *nueva derecha* se instituyó con las transformaciones que otorgó el neoliberalismo, en un individualismo que afirmaba la expulsión de las necesidades sociales de la esfera política democrática y en la apelación abstracta a la ley y de las instituciones parlamentarias. De esta manera, la imaginación de un “gobierno de las leyes” y la afirmación del liberalismo político se presentaban como la mejor fórmula para frenar los excesos del populismo y de una democracia reparadora (gasto público, liderazgos y diseminación del conflicto). Pero como el peso de la historia y de las culturas políticas poseen su eficacia política e histórica, en algunos estados, las nuevas derechas debieron pactar y recrearse con algunos liderazgos que garantizasen la reestructuración neoliberal. En los casos de Argentina, México, Brasil y Perú, podemos decir que esas derechas pusieron en entredicho el miedo al liderazgo a condición de disciplinarlo y dotarlo de poder para conducir un proyecto neoliberal.

versos teóricos como populismos de derecha.

2 Corrupción, que como sabemos, fue una dimensión esencial del modelo neoliberal.

II

El nuevo siglo abrió algunos interrogantes, impulsos y recreación para estas nuevas derechas; la imaginación de una “democracia sin Estado regulador”, sin populismos, sin grandes liderazgos se desgastó con la aparición de gobiernos pos-neoliberales³ que ampliaron los límites de la democracia instrumental con políticas inclusivas, heterodoxas y distribucionistas. Inclusive, las políticas de dichos gobiernos garantizaron el desarrollo y rentabilidad de algunos grupos económicos muy afectos al apoyo de propuestas neoconservadoras de las décadas anteriores. Por tanto, estas nuevas derechas —ante la amenaza de estos gobiernos y la erosión de la hoja de ruta neoliberal— se recrearon, afirmaron y asumieron diversas “tonalidades”.

En los países donde se produjeron estos gobiernos heterodoxos y bienestarristas de nuevo cuño, como en otros estados donde algún sector político los reivindicó, se presentaron diversos cursos de acción para las renovadas derechas políticas. O bien, se incorporaron a la lucha frontal con estos proyectos o buscaron acuerdos y negociaciones, siempre en tensión, con los mismos. Pero es importante destacar, que la lucha frontal a estos gobiernos también supuso una lectura por parte de estas derechas donde se percibía cierta efectividad —a la hora de ampliar la adhesión electoral— en algunas de sus políticas públicas. Es decir, existe en la actualidad una nueva derecha que debe entender que deben reivindicarse y mantener algunas políticas públicas —en caso de acceder al Estado— desarrolladas por los gobiernos progresistas o de izquierda. Fundamentalmente, para no licuar su adhesión política ni enajenar la posibilidad de obtener adhesión popular. Por otro lado, existen otras derechas políticas que, dada la historia de sus países, poseen mayores limitaciones

3 Entre los que podemos considerar los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Rafael Correa y Evo Morales.

estructurales para introducir algunos cambios y deben articularse y subordinarse a las propuestas de “crecimiento” del capital financiero, de los grupos empresariales locales, como de los establecidos por los tratados de libre comercio.

En este sentido, Costa Rica, su Estado y sus actores no se encontraron al margen de los cambios abiertos por el neoliberalismo, los tratados de libre comercio, la aparición de nuevos sujetos políticos (entre ellos, los resistentes a los TLC) y la reestructuración de sus instituciones económicas y estatales.

En el año 2000 se funda el Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual comienza la erosión política del bipartidismo costarricense controlado por liberacionistas y socialcristianos. Su introducción al escenario político le posibilita transitar por los márgenes y trayectorias culturales y económicas que las propias élites habían establecido. El PAC trata de “zigzaguar” al interior de las fronteras diagramadas por los grupos de poder. El fortalecimiento (y legitimidad) de las políticas neoliberales, la adhesión a los tratados de libre comercio⁴, la necesidad de lograr “una mínima inclusión social” y el rechazo al posneoliberalismo/populismo iniciado en América del Sur se convirtió en una oferta imposible de sortear por el Partido Acción Ciudadana. De esta manera, pese a su prédica renovadora y su auto-definición como progresista se introdujo en ese espacio que las propias derechas habían construido, redefiniendo las fronteras ideológicas y las posibilidades del PAC. Lo que fue leído por Solís como un resultado beneficioso, la impugnación de los grupos empresariales⁵ sobre la candidatura de José María Villalta

4 En el año 2007, un referéndum que preguntaba sobre si se debía aprobar un TLC con EEUU, Centroamérica y República Dominicana obtuvo el apoyo positivo del 51.62% de los votos, mientras que su no aprobación logró el 48.33% (Participaron el 60% de los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar).

5 Los empresarios costarricenses intervinieron intensamente en la campaña electoral, en la cual resultó electo presidente Luis Guillermo Solís. Llamaron a votar en contra de Villalta, al que consideraban “chavista” o “izquierdista”. Con esta acción, los empresarios “marcaron” los límites del discurso y de la campaña electoral.

(Frente Amplio), en realidad fue una demarcación de los límites ideológicos tolerables por parte de las élites empresariales. Los cuales podrían profundizarse, ya que el PAC no cuenta con mayoría propia en el Parlamento.

III

Teniendo en cuenta los apartados anteriores, advertimos que encontramos interesante e inquietante la discursividad del Presidente Luis Guillermo Solís. En pocos meses articuló una palabra potente como “rescate de Costa Rica” —llave maestra de su Plan de Gobierno—, con la decisión de negar su nombre e imagen en las obras de infraestructura.

Ante ello, podría decirse que ha realizado un acto desinteresado, filantrópico o, tal vez, profundamente republicano, colocando al “pueblo” por encima de sus autoridades. Pero personalmente, entendemos que estamos ante otra cuestión relevante y de otra índole. Este movimiento paradójico, donde el propio Solís se impulsa como candidato para “rescatar” al país y luego retira o impide su nombre en aquellas obras que serían un punto fundamental en la estrategia de dicho rescate podrían hablar —y esta es mi hipótesis— del lento “borramiento” de su figura como actor representante de cambio o de una gestión reformista. De alguna manera, reinterpreta e interioriza el “temor” que han construido las derechas frente a los liderazgos y lo reestructura hacia el porvenir.

Estamos ante una negación de su dirigencia y futuro liderazgo. Por tanto, es un presidente que no desea dejar huellas de su gestión, como si eso fuese parte de una virtud cívica y política a destacar o fetichizar. O como si fuese un signo de “populismo” que hoy los grandes medios de comunicación y las nuevas derechas de la región condenan.

Más allá de la voluntad de Solís y de sus intereses inmediatos, podríamos decir que no hay “rescate” sin actor colectivo

que lo sostenga y lo lleve adelante. La apelación al pueblo o la sustitución del nombre presidencial por el nombre del “pueblo”—en este caso puntual, ya que no se lo convoca a organizarse, ni a participar del gobierno— no solo es una abstracción, sino que carece de efectividad práctica o performativa. Solís no puede “inventar un pueblo” ni apoyos de organizaciones reales con el solo hecho de retirar su nombre propio, sino que esa sustitución podría iniciarse con políticas públicas que deberían ser promovidas por el Estado. Para decirlo a modo de reflexión: el presidente costarricense como representación del pueblo⁶ lleva a éste como instrumento de nominación a espacios simbólicos o a obras de infraestructura, pero, al mismo tiempo, les niega las capacidad de transformarse en actores⁷.

Frente a esta situación nos interrogamos: ¿sino queda el nombre del “Presidente rescatador”, qué nombre se mantiene en la política? El *nombre* del dirigente, del que manda o del presidente es uno de los dilemas más interesantes de la política latinoamericana. Durante décadas los nombres de los presidentes en ejercicio habitaron los monumentos, las infraestructuras e inclusive los territorios. Por tanto, esto suponía algo más que una referencia a su persona inmediata y no al Estado. El “poder del nombre” se inscribía en un proyecto político determinado, en la necesidad de establecer una “huella de cambio o de gestión”, como la posibilidad de elaborar una memoria política en perspectiva de futuro. Por tanto, la “negación del nombre” destierra una dimensión del liderazgo “fuerte”, una forma de vincularse a la memoria política futura, pero, a su vez, se transforma en una metáfora de su descentramiento como actor impulsor de un cambio colectivo. En síntesis, mien-

⁶ Así advierte su carta constitucional.

⁷ Es interesante indicar que su minoría en el Parlamento no lo ha llevado a establecer otra estrategia de construcción de adhesiones que impulsen o “empujen” leyes desde fuera del recinto legislativo. Solo ha apostado a la negociación y el acuerdo entre partidos para lograr votar las leyes del poder ejecutivo en dicha institución.

tras más apela al “pueblo abstracto” más parece ceñirse a las fronteras diseñadas por los grupos dominantes.

En Costa Rica, —en la actualidad— no existen actores con capacidad de establecer y legitimar un cambio o de llevar adelante un proceso de reformas. Esto lo ha demostrado la adhesión ciudadana de las últimas décadas a proyectos neoconservadores. No podemos olvidar que los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla —ambos del Partido Liberación Nacional— han profundizado la lógica económica neoliberal, la construcción de “Estados insolventes”⁸ y de alineamiento con los Estados Unidos. Gobiernos que configuraron, afirmaron y recrearon rutinas económicas e imaginarios políticos que fueron reapropiados y continuados por los primeros meses de la gestión de Luis Guillermo Solís.

IV

La otra reflexión que nos suscita esta figura presidencial está vinculada con el “modelo” de liderazgo. ¿De qué liderazgo hablamos o, mejor dicho, qué liderazgo se imagina el primer magistrado y la cultura política costarricense?

Si bien existe una distancia relevante entre el Plan de Gobierno y el realismo político que impone la dinámica de los actores, la idea de “presidente rescatador” —donde se asocian ideas de “salvador” y “hombre del cambio”— a “presidente negador” de su nombre supone una distancia insondable. Niega su lugar de “rescatador” y se subordina a un realismo político que lo somete a la continuidad y a la cultura política de los gobiernos anteriores, vaciando su lugar de actor impulsor de

8 Centroamérica y Costa Rica poseen la presión fiscal más baja del continente americano y además son territorios con profundas deudas públicas y sociales. Es decir, los estados centroamericanos no poseen recursos públicos para invertir en políticas que reduzcan la desigualdad y exclusión social. El Cuarto Informe Estado de la Región (2011) indica que el 40% de centroamericanos sufre de exclusión social.

colectivos y reformas. Estamos –por lo menos, hasta la actualidad– ante un “liderazgo presidencial” que al aceptar la rutina y un léxico que niega la figura del liderazgo fuerte (temiendo comparaciones con el chavismo, el sandinismo o la reacción que sufrió el gobierno de Manuel Zelaya), como la posibilidad de promover consolidación o surgimiento de nuevos actores pone en juego su posibilidad de constituirse en actor gravitante de un proyecto reformista.

Entonces, lo que estaría muy bien para algunos medios de comunicación y élites políticas y empresariales —la posibilidad de que Solís no se transforme en un caudillo ni en el promotor de actores colectivos interesados en políticas progresistas⁹— se torna problemático para un conjunto de ciudadanos que esperan cierta redistribución de la riqueza, aumento del empleo y reducción de la pobreza. Si consideramos que las élites —como planteaba Wright Mills en “La élite del poder” (1987)— son aquellas que deciden en los acontecimientos nacionales, podemos advertir que esa nueva clase política que asciende con Solís tendrá “escaso” margen para intervenir en una variación o reformulación de dichos acontecimientos. La no introducción de variaciones, permite que dicha élite se refuerce con las anteriores rutinas estatales y económicas, como con los acuerdos comerciales ya planteados. Por tanto, el borramiento del nombre presidencial promueve —entre otras cosas— lentamente una subordinación a las estructuras y élites de poder existentes. Como lo expresó Wright Mills (1987), el fortalecimiento de las mismas se debe al relegamiento del político profesional y del partido a los niveles medios de poder. Por último, observamos un discurso neoliberal republicano —construido, principalmente, en pugna con las experiencias de los gobiernos progresistas de América del Sur— y que logró legitimidad en la mayoría de las sociedad costarricense, el cual orienta a los actores relevantes de la es-

9 Como lo hizo el presidente Manuel Zelaya durante su gobierno.

cena política a la aceptación de las reglas de la competencia democrática en asociación con las pautas del libre comercio, como en prácticas contrarias al establecimiento de liderazgos o actores colectivos proclives a la regulación económica y a la distribución de la riqueza. En este contexto, Luis Guillermo Solís se transforma —en escasos meses de gobierno— en un nuevo actor político al inscribirse plenamente en este discurso, al aceptar las rutinas económicas y estatales que han diagramado las élites económicas y políticas dentro y fuera del Estado y al clausurar la posibilidad de vincular su nombre a un proyecto de reformas. De esta manera, se transforma en un presidente que “habita” las fronteras impuestas por el orden neoliberal, por su minoría parlamentaria y por las acotadas trayectorias que las nuevas derechas han ofrecido a Costa Rica. Que tendrá pocos recursos para hacer política y frenar un proceso de construcción de desigualdades; cuestión que le traerá problemas al interior del PAC y a futuro con sus propios votantes.

Esteban De Gori, sociólogo argentino. Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONACIT) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dirige proyectos de investigación financiados por la UBA (UBACyT) vinculados al estudio y comprensión de las élites políticas, culturales y económicas en América Central. Compilador de los libros: Honduras 2013: Golpe de Estado, elecciones y tensiones del orden político (Sans Soleil, Argentina, 2014) y Centroamérica. Política, violencia y resistencia: miradas históricas (Nueva Trilce, Argentina, 2014).

Costa Rica 2014: Unas elecciones inéditas

Rodrigo Páez Montalbán

El sorpresivo arribo de Luis Guillermo Solís a la presidencia de Costa Rica ha supuesto una recomposición del espectro político-electoral del país centroamericano, poniendo en duda la continuación de su tradicional sistema bipartidista. Esto ha hecho emerger una serie de interrogantes sobre las causas del rechazo de la población a sus referentes políticos tradicionales, así como sobre el rumbo sobre el que se enfila este país, acostumbrado a cambios graduales en su devenir político y social.

En efecto, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la victoria fue para el Partido Acción Ciudadana (PAC), siendo ésta la primera vez, desde la fundación de la Segunda República (1948), en que no alcanza el poder un candidato de una de las dos fuerzas políticas tradicionales: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC).

Las elecciones de 2014 han sido inéditas, no sólo en lo que se refiere al candidato ganador de la presidencia de la República sino también por los cambios en las lealtades políticas hacia las demás opciones presidenciales, debido en parte a la emergencia de nuevas fuerzas políticas, así como a la per-

cepción generalizada de la necesidad de un cambio, de un punto de inflexión, sin que haya quedado clara todavía la naturaleza del mismo, ni la dirección específica del rumbo que debe tomar hacia el futuro.

Todo lo anterior no era previsible, dada la apatía y el desánimo que marcó gran parte del periodo preelectoral; el ambiente de desánimo de gran parte del electorado, debido al descrédito de la política y de muchos de los políticos; las constantes denuncias de corrupción en el desarrollo de las obras públicas, por parte de funcionarios, la mayoría de los cuales siguen gozando de impunidad.

De esta manera, y con cierto “retraso histórico”, Costa Rica ha roto el paralelismo político de dos fuerzas tradicionales que había monopolizado, hasta la fecha, el ejercicio del poder ejecutivo nacional. No estaba previsto que así fuera en esta elección, aunque algo se avizoraba en la dispersión que aparecía en algunas de las principales encuestas realizadas previamente a la elección, algunas de ellas ocultas entonces a la opinión pública. Sin un designio previo, sin embargo, el bipartidismo se fue secando, dejando a gran parte del electorado la tarea, de (re) definir adhesiones y pertenencias políticas para el futuro.

LAS OPCIONES ELECTORALES

A lo largo de la campaña electoral fueron apareciendo tres opciones políticas con posibilidades reales de ganar la contienda. Desde antes de iniciarse oficialmente la campaña, estaba claro que un candidato se presentaba a la justa con evidente ventaja. El alcalde de San José durante veinte años, Johnny Araya Monge, perteneciente a la familia del expresidente Luis A. Monge (1982-1986), se había venido preparando para ser el candidato del PLN. Conocido por “todo el mundo”, debido a su desempeño en la alcaldía capitalina, logró ser reconocido como

candidato por la mayoría de los “barones” de su partido, el cual ha ejercido la presidencia del país en diez ocasiones, desde finales de los años cuarenta.

Paradójicamente, a pesar de ser miembro prominente de la clase política nacional, su prolongado desempeño como alcalde no le reportó suficientes sufragios, quedando lejos del 40% de los votos necesarios para ser elegido en la primera vuelta electoral. Pocos días después de esa fecha, de manera insólita e imprevista, Araya Monge se retiró de la campaña para la segunda ronda electoral, aduciendo dificultades insuperables para llevar a cabo su cometido como candidato.

Ante la reconvencción del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que de todas maneras su nombre aparecería en las boletas en la segunda convocatoria electoral, Araya manifestó que aceptaría la designación presidencial si resultaba electo en la segunda vuelta. La campaña del PLN se convirtió en una campaña sin candidato, una muestra de surrealismo en un país tradicionalmente democrático.

Dentro de la incertidumbre que manifestaban las encuestas a principios de la campaña electoral, fue surgiendo una nueva fuerza política, claramente de izquierda, el Frente Amplio (FA), el cual se fue nucleando alrededor de la figura de José María Villalta, diputado por cuatro años por un partido provinciano. El Frente fue reuniendo a grupos de ecologistas, sindicalistas, miembros de la vieja izquierda, sectores militantes por la equidad de género y especialmente sectores juveniles (el candidato tiene 36 años) y gente sin partido. Recién llegado a la clase política, Villalta manifestó tener un gran carisma, gran claridad en sus planteamientos, haciendo campaña de plaza pública, atrayendo a sectores amplios de clases marginadas y sobre todo a muchos jóvenes.

La opción del FA, en un país en donde anteriores opciones de izquierda sólo habían logrado alcanzar pocos diputados en pasadas contiendas electorales, fue la novedad de la campaña.

Por un lado, provocó enorme entusiasmo en sectores deseosos de un cambio real en el ejercicio político, pero también un fuerte rechazo de sectores conservadores del electorado y de los grandes medios de comunicación escrita y electrónica, los cuales desataron una feroz campaña en su contra, presentándolo como marxista, chavista, o madurista, dentro de un clima de claro linchamiento político.

Una tercera opción electoral, la que al final resultó ganadora, fue la que presentaba a Luis Guillermo Solís como candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), partido fundado a principios de este siglo, con cuadros surgidos sobre todo del PLN. A su alrededor se constituyó entonces una corriente que luchó contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), participando activamente en el plebiscito convocado sobre este tema en el año 2007. Después de muchos avatares, el PAC logró reconstituirse e ir sumando fuerzas para esta justa electoral, subiendo en las encuestas, que al principio lo ubicaban en la tercera, o incluso en la cuarta posición en cuanto a posibilidades de triunfo.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

Contrariamente a lo que se suponía, el candidato ganador, tanto en la primera como en la segunda vuelta, fue Luis Guillermo Solís, un historiador, que se ha desempeñado exitosamente en la academia, además de haber trabajado como político y diplomático, en particular durante los años de la crisis centroamericana. Durante la campaña se distinguió por su moderación y equilibrio, habiendo ganado el apoyo de amplios sectores de clase media. Como candidato, se definió como progresista, eludiendo hábilmente adscripciones de izquierda o de derecha. Tiene en su haber una reputación de honradez, por lo que su elección se ha querido mostrar como una ruptura con el continuismo y la corrupción prevaleciente en la clase política tradicional.

Solís obtuvo el 30.64% de los votos en la primera vuelta, celebrada el 2 de febrero, frente a Johnny Araya, quien alcanzó el 29.71% de los sufragios. Los siguientes lugares fueron para José María Villalta (FA, con 17.25%); Otto Guevara (11.34%), del Partido Movimiento Libertario (PML), una opción de derecha empresarial y Rodolfo Piza (6.02%), del PUSC, por citar sólo las opciones con un porcentaje importante de los votos. En la segunda vuelta, celebrada el 6 de abril, Solís obtuvo una rotunda victoria, con el 77.81% de los votos, la mayor votación para un presidente en la historia de Costa Rica, frente a un 22.19% de Johnny Araya. Hubo, además, un preocupante y elocuente porcentaje de abstencionismo, 31% en la primera ronda y 43% en la segunda, en un país que hasta ahora se había distinguido por el alto nivel de participación de la población en las justas electorales.

La Asamblea Legislativa (unicameral), de 57 diputados, se fragmentó, con 18 diputados para el PLN; 13 para el PAC; 9 para el FA; 8 para el PUSC y 4 para el PML, entre las principales opciones, quedando para el partido ganador (PAC) la tarea de hacer y fortalecer múltiples alianzas para una necesaria y difícil gobernabilidad.

Es importante señalar que en las cuatro provincias del centro del país (San José, Alajuela, Heredia y Cartago), mayoritariamente de clase media, el PAC obtuvo una clara mayoría. En las provincias de la periferia, con menor desarrollo relativo (Guanacaste, Puntarenas y Limón), el triunfador fue el PLN, seguido del FA.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: ¿HABRÁ VIDA DESPUÉS DEL BIPARTIDISMO?

La victoria de Luis Guillermo Solís abre múltiples interrogantes sobre el futuro de la vida democrática costarricense. Más que una disputa en el terreno ideológico, la campaña giró sobre la necesidad de lograr un cambio. Quedó atrás la cantaleta de que el PLN representaba una opción socialdemócrata, frente al

PUSC, de raíz socialcristiana, con la que durante tanto tiempo muchos costarricenses se habían identificado. Una crisis inédita de credibilidad en los partidos tradicionales, y en sus arreglos para monopolizar el ejercicio del poder político, los ha dejado sin sustento y sin capacidad motivadora.

El país se ha vuelto a definir por la gradualidad de los cambios, alejándose de posiciones extremas. El nuevo gobierno enfrentará retos más concretos: el déficit fiscal (6%), la irreductible pobreza de un 20% de la población y una creciente dolarización de la economía, entre otros.

En política exterior se prevé continuidad: la alianza estratégica con Estados Unidos, vía el mantenimiento del DR-CAFTA; el incremento de la relación con China; buenas relaciones con América Latina y sus organismos de integración, sobre todo el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en la que Costa Rica ejerce la presidencia *pro tempore*. No está claro si se mantendrá la solicitud de pertenencia a la Alianza del Pacífico y, seguramente, la relación con Nicaragua, país con el que Costa Rica mantiene diferendos, actualmente sometidos a la Corte Internacional de Justicia, ocupe parte importante del quehacer del gobierno en materia de política exterior.

Pero tal vez el reto principal del flamante presidente, sea el de responder a las altas expectativas que su elección ha suscitado, y no sólo en la aplastante mayoría que lo eligió. El deseo generalizado de “cambio”, sin muchos adjetivos ni precisiones, puede generar más pronto que tarde, desaliento y reclamos varios. Un ejercicio político renovado, así como una lucha frontal contra la corrupción, “que está carcomiendo nuestra democracia y está quebrando las finanzas públicas”, expresión de Solís en su toma de posesión, son los dos ejes sobre los cuales piensa responder a las expectativas de cambio, que se expresaron con fuerza durante la campaña.

Posiblemente también el mayor capital del que goza el presidente Solís sea su propia personalidad, la imagen que ha proyectado en la gente. “Si les abandono, repúdienme”, dijo también al asumir el cargo. La forma en que maneje la situación económica internacional y los desafíos crecientes en el campo económico y social, definirán, más pronto que tarde, si su talante equilibrado y propenso al diálogo llevará a buen puerto a un país en donde se expresa una creciente pluralidad política y cultural.

Rodrigo Páez Montalbán, costarricense radicado en México, es Doctor en Sociología, Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Línea de investigación: Perspectivas de la integración latinoamericana; Investigaciones en curso: Democracia en América Latina. De imaginarios, procesos y transiciones. Email de contacto: paez.montalban@gmail.com

Costa Rica, los límites para la izquierda alternativa

Aránzazu Tirado Sánchez

Las cifras de las encuestas electorales previas a las elecciones costarricenses del pasado 2 de febrero auguraban unos resultados inauditos y muy favorables para una fuerza de izquierda ajena al bipartidismo que había dominado la política de Costa Rica en las últimas décadas: el Frente Amplio (FA). Tales pronósticos desataron el optimismo en algunos analistas que llegaron a avizorar un posible triunfo del FA, en gran parte espoleado por el clima de hartazgo y desafección con los principales partidos políticos que se agudizó en el país durante la última legislatura de la liberacionista Laura Chinchilla. Un descontento vinculado al creciente deterioro del Estado de Bienestar costarricense que ha discurrido en paralelo al proceso de neoliberalización que vive el país desde hace lustros y que tuvo su momento culminante con la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos¹, tras una reñida victoria en referéndum.

La introducción de la agenda neoliberal, proceso global no exclusivo del caso costarricense, aplicada con diligencia por

¹ En realidad, se trata de un Tratado entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, conocido también por su acrónimo en inglés CAFTA-DR.

el otrora socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), comportó la degradación de las condiciones de vida de una población que había mantenido históricamente unos estándares de bienestar por encima de la media centroamericana. La multiplicación de los conflictos y el incremento del malestar hacían prever que el voto de castigo al bipartidismo pudiera canalizarse a través de una opción de ruptura como el FA, que hubiera implicado un salto cualitativo en la historia de esta tranquila nación, poco acostumbrada a moverse en los extremos del espectro político. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta, si bien muy positivos para el FA por su gran ascenso², se encargaron de refutar las expectativas, con el pase a segunda vuelta del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del gobernante PLN.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué tan factible era, a pesar de un contexto claramente favorable para el cambio, que un partido de la izquierda alternativa³, percibida en el imaginario costarricense como “radical”, no sólo pasara a la segunda vuelta sino que lograra ganar la Presidencia en la moderada Costa Rica. En el presente artículo sostenemos que, por lo menos hasta el día de hoy, la izquierda alternativa costarricense, a pesar de lo mucho que ha avanzado, se encuentra todavía distante de lograr aglutinar la mayoría de este descontento transformándolo en votos, debido a que se topa con unos “límites” que provienen de dos factores: la idiosincrasia política costarricense; y el papel ejercido por los poderes fácticos del país (y del extranjero) para torpedear las opciones políticas que cuestionen el marco

2 El FA había obtenido 6,782 votos, el 0,4%, en 2010. En la primera vuelta de 2014 quedó como tercera fuerza política con 354.459 votos que supusieron el 17,25%. Es de destacar, además, que en las tres provincias costeras del país, Guanacaste, Limón y Puntarenas, el FA fue la segunda fuerza detrás del PLN, con un promedio de votos entre dos y seis puntos superior a la media nacional. Véase: <http://www.tse.go.cr/resultados2014.htm>

3 Optamos por utilizar el término “izquierda alternativa” para distinguir al FA de otras fuerzas políticas costarricenses de izquierda o centro-izquierda, de carácter socialdemócrata (o social liberal), como pueden ser el PLN o el PAC.

institucional defendido por el *establishment* y garantizar, así, la fidelidad del más estable de los aliados de Estados Unidos en el subsistema centroamericano y caribeño.

EL AUREA MEDIOCRITAS COSTARRICENSE

Costa Rica construyó su identidad como nación sobre un imaginario mitológico que lo distinguía de sus vecinos centroamericanos y que dotó a muchos costarricenses de un indisimulado complejo de superioridad regional. Un país pacífico, carente de grandes conflictos internos, más “blanco” que el resto, donde la desigualdad no era tan acusada, mesocrático, neutral en su política exterior, etc. Aunque algunas de estas características eran más ideales que reales, mientras otras se fueron desdibujando con el impacto del neoliberalismo, lo cierto es que Costa Rica mantiene todavía una cultura política basada en el respeto a la institucionalidad, la búsqueda del equilibrio y la estabilidad a través del consenso y el pacto. El tico rehúye la confrontación lo que, en la esfera política, parece traducirse en un apoyo a los partidos que aparentemente garantizan la continuidad de ciertos valores o, cuando menos, el cambio sin sobresaltos, como se ha demostrado en la apuesta por el PAC en las pasadas elecciones y las alianzas realizadas por este partido una vez arribado al gobierno.

No obstante, pareciera que este relato de la identidad costarricense correspondería más bien a una mitología construida a imagen y semejanza de los habitantes del Valle Central. Un imaginario “vallecentrista”, una suerte de centralismo a la tica, que dejaría fuera de él a esos “otros” constituidos por los afrodescendientes y los morenos de las costas pacíficas o caribeñas (Cuevas Molina, 2008: 110), zonas donde, por otra parte, se asientan los trabajadores de los enclaves bananeros y donde el FA logró ser segunda fuerza política en la primera vuelta

electoral⁴. Ello abre puertas al futuro quiebre de los consensos nacionales y permite vislumbrar un horizonte de cambio más profundo a mediano-largo plazo, que se ha iniciado desde ya, con la ruptura de la hegemonía bipartidista que monopolizó la política en las últimas cinco décadas.

UNA ESTRATEGIA DEL MIEDO NACIONAL Y CONTINENTAL

A estas limitaciones de carácter estructural, hemos de añadir otras de carácter coyuntural, propias de la campaña aunque basadas en intereses nada pasajeros, como es el papel de la maquinaria político-mediática que se desplegó para atacar al FA. La importancia geopolítica de Costa Rica que, pese a ser un país sin ejército, es la sede de dos bases militares que sirven a la IV Flota del Ejército de Estados Unidos⁵, —además de ubicarse en una de las zonas geoestratégicas más sensibles para el imperialismo como es la del Caribe, colindando con el Canal de Panamá y siendo vecina de Nicaragua, donde Rusia y China planean construir un canal interoceánico alternativo⁶ que tendría un impacto tremendo en el control del comercio internacional— explica, en buena medida, los intentos por evitar a toda costa que una fuerza política potencialmente aliada de los vientos de cambio regionales pudiera arribar al gobierno de la nación.

Sin embargo, destacar los supuestos nexos del FA con el chavismo, el castrismo o el orteguismo, como amenazas foráneas a los intereses de los costarricenses, con la finalidad de

4 Una hipótesis en la que podría trabajarse ante los resultados, a primera vista, del 2 de febrero, es si existe una correlación entre clase social, ubicación geográfica, etnia y voto.

5 Véase “Bases militares extranjeras en América Latina y el Caribe. Recuento provisorio hasta el 10 de abril de 2012” elaborado por el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos en <http://www.mopassol.com.ar/archives/351>

6 Véase “Canal de Nicaragua: China y Rusia desplazarán la influencia estadounidense en la región” en <http://www.noticiaspia.org/canal-de-nicaragua-china-y-rusia-desplazaran-la-influencia-estadounidense-en-la-region/>

asustar al “moderado” elector costarricense, quizás dubitativo a la hora de votar por una alternativa al bipartidismo, no ha sido una estrategia novedosa de esta campaña ni tampoco exclusiva de la política costarricense.

En el país la estrategia del miedo fue inaugurada durante los debates sobre la conveniencia o no de firmar el TLC con Estados Unidos. Un memorando gubernamental filtrado por el *Semanario Universidad*, conocido como Memorando Casas-Sánchez, mostró la manera en que desde el gobierno de Óscar Arias, defensor del “sí”, se daban instrucciones para generar el miedo social en diversos ámbitos, una campaña agresiva a la que se sumó el propio embajador de Estados Unidos en el país (Raventós, 2008: 21). Así, en el punto 6 del memorando, llamado “Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación”, apartado 2 “Estimular el miedo”, subapartado III, podía leerse lo siguiente:

Miedo a la injerencia extranjera en el NO. Hay que restregar por todas partes la conexión del NO con Fidel, Chávez y Ortega, en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios⁷.

Poco importaba que esta conexión fuera inexistente o que la propia administración de Óscar Arias solicitara tiempo después ayuda a la Venezuela de Hugo Chávez para financiar el petróleo a 25 años (Cabezas Moya, 2008).

En cuanto a la campaña del miedo basada en utilizar el fantasma del bolivarismo, aplicada a escala regional, destacaremos sólo dos casos que no son los únicos, pero dan cuenta de su patrón reiterativo. En las elecciones para la Presidencia de México de 2006, el candidato de la Coalición por el Bien de Todos,

7 Véase “Memorando Casas-Sánchez” en <http://www.munditico.com/la-palestra/82-memorando-casas-sanchez>

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), padeció una agresiva campaña de acoso por parte del Partido Acción Nacional (PAN), donde se le vinculaba con el presidente Hugo Chávez insinuando que éste financiaba su elección, amén de otorgarle un apoyo político encubierto y acusándolo de ser “un peligro para México”. A dicha campaña se sumó el Consejo Coordinador Empresarial. En El Salvador sucedió lo mismo en las elecciones presidenciales de 2009, cuando el gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) atizó el “fantasma Chávez” ante la posible —y luego efectiva— victoria del candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes⁸.

Se puede afirmar que la paranoia antibolivariana llega a tales extremos que incluso el actual presidente, Luis Guillermo Solís, hombre conocido por su diplomacia y poco sospechoso de simpatías bolivarianas, tuvo que soportar críticas y acusaciones de “prochavista” en su página de *Facebook*, tras haber expresado sus condolencias tras la muerte del mandatario venezolano en 2012.

CONCLUSIONES

No debería sorprendernos que, tras la llegada al poder de gobiernos de izquierda y progresistas que en las últimas décadas cambiaron la correlación de fuerzas del continente iniciando un periodo de efervescencia integracionista de marcado carácter latinoamericanista, la derecha latinoamericana e internacional se haya rearmado para evitar perder más piezas en el tablero geopolítico. Ante los reveses que supusieron el fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el ostracismo que

8 Detrás de estas dos campañas se pudo encontrar la mano del español Antonio Solá Reche, de la empresa Ostos & Solá, vinculada a la ultraderechista Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) presidida por el ex presidente español José María Aznar, operador político de los intereses del republicanismo *neoon* de Estados Unidos en América Latina y conocido adversario de todo lo que huela a izquierda.

está padeciendo la Organización de Estados Americanos (OEA) desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el imperialismo se está reorganizando a través de proyectos que vuelven a reactivar la agenda neoliberal en el continente, como la Alianza del Pacífico⁹.

Pero también se está acudiendo a los golpes de Estado tradicionales contra países no afectos a los intereses de Estados Unidos, tal como sucedió en Venezuela en 2002 y, con métodos más originales, en Ecuador (2010); así como al derrocamiento de otros gobiernos reformistas por la vía de golpes de Estado de tipo parlamentario o constitucional en Honduras (2009) y Paraguay (2012). En esta lógica de rearme se inserta el uso de la campaña del miedo para modelar las opiniones de los pueblos latinoamericanos y evitar que determinadas fuerzas políticas lleguen al poder; y todas las estrategias —nada nuevas, por cierto— de guerra psicológica, guerra económica y desestabilización política que se vienen aplicando contra estas fuerzas cuando ya se encuentran en el ejercicio del poder.

En el caso específico de Costa Rica, destacar los “límites” existentes para la izquierda alternativa no implica considerar que las identidades políticas sean características inmutables o que las campañas del miedo sean dificultades insuperables. Tampoco supone negar la posibilidad de que el FA pueda constituirse en un futuro como la preferencia mayoritaria de los y las costarricenses, a pesar de todas las presiones en contra que puedan desplegarse.

En las pasadas elecciones los costarricenses demostraron que desean avanzar hacia un cambio, pero que ese cambio va a ser más gradual de lo que algunos quisieran. Por lo pronto se ha roto la hegemonía del bipartidismo y la izquierda alternativa

⁹ La presidenta Laura Chinchilla solicitó la adhesión de Costa Rica a dicha Alianza en febrero del presente año. Por su parte, el FA ha mostrado su rechazo a que Costa Rica se integre en ella.

costarricense ha dado un paso de gigante en la historia política del país. Si el FA logra conservar este sedimento electoral para las próximas elecciones de 2018 y sigue construyendo desde abajo, tratando de rearticular lo social con lo político, quizás entonces sí podamos asistir a un movimiento tectónico en la política costarricense que finalmente dé el triunfo electoral a un partido de izquierdas, socialista, y seguro aliado de los gobiernos que están intentando construir una geopolítica alternativa a los intereses de Estados Unidos desde América Latina.

BIBLIOGRAFÍA:

- Cabezas Moya, Rodrigo (2008). "La estridente conexión Arias- Chávez" en *ALAI, América Latina en Movimiento*, <http://alainet.org/active/26102&lang=es> (consultado el 25 de mayo de 2014).
- Cuevas Molina, Rafael (2008). "Identidad y cultura en Costa Rica a principios del siglo XXI" en Santana, Adalberto (coord.), *Costa Rica en los inicios del siglo XXI*, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/ Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CEIICH), México DF, pp. 109-122.
- Raventós, Ciska (2008). "Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la democracia" en *Revista Ciencias Sociales*, 121, Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-29.

Aránzazu Tirado Sánchez es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, itinerario de Relaciones Internacionales, por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Durante sus estudios de Licenciatura fue alumna de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el curso académico 2000-2001 gracias a una beca de "Movilidad" de la UAB. Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es Doctorante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Costa Rica en el siglo XXI: La que dejó de ser y la que no termina de nacer

Luis Paulino Vargas Solís

Este artículo ofrece una descripción y análisis muy sintéticos de la realidad actual de Costa Rica, ubicando esa temática en perspectiva histórica, y en relación, por lo tanto, con los procesos de reestructuración económica, crisis política y cambio sociocultural vividos en los últimos decenios. En lo esencial, intento mostrar que Costa Rica atraviesa hoy un período de profundas mutaciones: mucho de lo que fue está dejando de ser o ya murió; mucho de lo que es se agita en medio de una profunda crisis; mucho de lo que podría ser sigue siendo un proyecto que, en medio de dolorosos estertores, intenta ser pero aún no es.

EL PROYECTO ECONÓMICO NEOLIBERAL

La economía costarricense actual es el resultado de un proceso de reestructuración que empezó 30 años atrás, cuyas líneas u orientaciones centrales se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Ello corresponde a un proyecto político-económico que, en su núcleo fundamental, responde a un ideario neoliberal. De ahí que, ya desde sus inicios, tomara

forma a partir de un cuestionamiento al rol del Estado en la economía y como una restauración apologética del libre mercado y la apertura de la economía a los flujos mundiales de comercio y capitales.

Diferentes condiciones propician el que esta reestructuración empiece a tener lugar, además del reconocido viraje ideológico que tiene lugar en los países capitalistas avanzados, en particular Reino Unido y Estados Unidos, y más claramente con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente. Influyó directamente la severa crisis económica de inicios de los ochenta (Rovira *et al*, 1983), la cual, en la interpretación dominante, fue atribuida al “agotamiento” del viejo modelo o estrategia de desarrollo (Lizano, 1990, 1999 y 2000). En lo económico, esta última se centraba en la industrialización por sustitución de importaciones y atribuía al Estado un importante papel en la diversificación de la economía, el desarrollo de la infraestructura económica y la elevación de la productividad (Rovira, 1982; Vargas Solís, 2003). Durante ese período (1950-1979, aproximadamente), se desarrolló uno de los sistemas de seguridad social más avanzados de América Latina.

La reorientación hacia una estrategia neoliberal reflejó la influencia de diversos organismos internacionales —en especial el FMI y el Banco Mundial— sobre los limitados márgenes de maniobra que, hacia mediados de los años ochenta del siglo XX, el país enfrentaba en relación con su deuda externa. En ese mismo período el país fue también receptor de una masiva afluencia de recursos financieros provenientes de Estados Unidos (Sojo, 1991 y 1992), cuyo principal propósito era apuntalar el papel de Costa Rica como “vitrina de la democracia” en momentos en que en Nicaragua se intentaba llevar adelante la Revolución Sandinista y Centroamérica hervía sumida en un terrible conflicto militar agravado por la disputa geoestratégica característica de la guerra fría. Ese dinero proveniente de Estados Unidos

atenuó las consecuencias sociales del ajuste neoliberal, pero también presionó a favor de su profundización y aceleramiento.

Toma impulso así el movimiento hacia la redefinición del rumbo de desarrollo del país: privatización de diversas empresas públicas gestadas a la sombra del proyecto de la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. (CODESA); paulatina liberalización y desregulación del sistema financiero, con gradual pero sostenido crecimiento de los bancos privados, los cuales hasta entonces eran prácticamente inexistentes; desmantelamiento del proteccionismo a la agricultura. Empieza también la desgravación arancelaria y, con esta, la creciente apertura unilateral a las importaciones, la cual se ve acompañada de una agresiva política de fomento de las exportaciones. Ello promovió la diversificación de estas últimas y privilegió los mercados de Europa y, especialmente, Estados Unidos, con lo que, a su vez, declinaba el peso relativo del mercado centroamericano. Al turismo se le atribuye también un rol importante como motor de dinamización de la economía (Lizano, 1987, 1990 y 1999). De tal forma, y no obstante su reiterado cuestionamiento a la intervención estatal en la economía así como su opción discursiva por la liberalización de los mercados, el proyecto neoliberal en Costa Rica incorporó, con notable sentido pragmático y oportunista olfato, un componente de fomento y protección en favor de nuevas actividades, las cuales pasaron a ser los nuevos sectores dinámicos y, correlativamente, los nuevos frentes de acumulación de capital desde los que florecerían los nuevos sectores ganadores.

Se configura así lo que podemos reconocer como una *primera etapa del proyecto neoliberal* en Costa Rica, cuyo despliegue se da entre 1985 y 1997. Se basaba, principalmente, en la *exportación ligera*, centrada en productos primarios, bienes manufacturados tradicionales (en particular la maquila textil) y un desarrollo turístico que en su mayor parte seguía bajo control del capital nacional. Con la llegada de Intel y su entrada en ope-

raciones a partir de 1998, se inicia *una segunda fase*, en la cual el capital trasnacional asume un rol hegemónico, con el acelerado crecimiento de las zonas francas, la presencia de grandes corporaciones de alta tecnología y el papel dominante de poderosas cadenas hoteleras transnacionales. Hacia finales de 2005 se entra en *una tercera fase*, en que la afluencia considerable de capitales financieros introduce un elemento novedoso: el tipo de cambio colón-dólar empieza a deslizarse a lo largo de un proceso de mediano plazo de gradual revaluación de la moneda nacional (Vargas Solís, 2011). Al cabo de varios años —al entrarse en el segundo decenio del nuevo siglo— ello impacta, entre otras cosas, en una clarísima pérdida de dinamismo de los sectores exportador y turístico y una declinante presencia del capital nacional en esas actividades.

Paulatinamente se fue consolidando el proceso de inserción de la economía costarricense en la globalización neoliberal en curso. La estrategia de apertura unilateral a las importaciones, iniciada en los ochentas, se reforzó, desde finales de los noventas, con una política de “atracción de inversiones” que devino aspecto clave en el esquema de políticas públicas vigente. Entretanto, el país se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), a inicios de los noventa, y se hizo parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde su fundación. Asimismo, entró en el juego de los acuerdos bilaterales de libre comercio (que, en realidad, tienden a ser sobre inversiones más que sobre comercio) desde 1995 en adelante, hasta completar hoy día 12 tratados vigentes, más tres en proceso de negociación o aprobación legislativa.

LA CRISIS DEL PROYECTO NEOLIBERAL

Con el paso de los años, el proyecto neoliberal ha dado lugar a la conformación de una economía fracturada y fragmentada y a una sociedad aquejada por niveles de polarización crecientes.

Los tejidos productivos, deshilachados y desmembrados, reeditan en versión complejizada lo que la vieja CEPAL llamaba “heterogeneidad estructural”, siendo un problema que se visibiliza tanto sectorialmente como en los territorios. Ello da lugar a lo que he propuesto designar como “*síndrome de la economía archipiélago*” que, en la práctica, implica la emergencia y profundización de múltiples rupturas en los niveles de productividad y dinamismo entre actividades, regiones e, incluso, subregiones (no obstante la pequeñez del territorio costarricense).

Lo anterior se entrevera y complica con la pérdida de dinamismo de la economía costarricense. En 2009 (con un clarísimo antecedente en el año previo), tuvo lugar un bajón de la economía ocasionado por el impacto de la crisis económica mundial (Vargas Solís *et al*, 2011; Vargas Solís, 2012). Luego de eso, y hasta el primer semestre de 2014 inclusive, la economía no ha logrado recuperar los promedios históricos de crecimiento del período neoliberal, los cuales en todo caso eran inferiores a los de la etapa desarrollista previa, de sustitución de importaciones y Estado intervencionista y benefactor.

Todo lo anterior está teniendo severas consecuencias en el empleo y, por esta última vía, en los salarios. Así, y desde 2010, la tasa de desempleo abierta se ha mantenido consistentemente por encima del 9% y por momentos arriba del 10%. Cuando se suma además la población trabajadora en situación de subempleo, el porcentaje supera el 20% de la fuerza de trabajo. Arriba del 32% (una de cada tres personas empleadas) no tiene seguro social, lo cual es indicio de los niveles que alcanza la precarización e informalización laborales. Y, por supuesto, los problemas del empleo son mucho más agudos entre las mujeres y en la población trabajadora más joven. Estas condiciones de deterioro del empleo impactan también en los salarios, los cuales en términos reales han caído cerca de un -7% entre 2010 y 2013.

Pero justo porque las evoluciones son divergentes y hay sectores y territorios más dinámicos y otros que tienden a rezagarse, de forma similar acontece que hay quienes tienen acceso a posibilidades económicas más boyantes, como hay quienes se ven confinados a la pobreza o a situaciones de suma vulnerabilidad económica. De ahí la desigualdad creciente, según se visibiliza, por ejemplo, en el índice de Gini, el cual en el transcurso de los últimos 20 años ha pasado de un valor situado en los alrededores de 0,46 hasta alcanzar el 0,52 en 2012 (Programa Estado de la Nación 2013), con lo cual, y de paso, Costa Rica se ha alejado radicalmente de la posición que en otros tiempos tuvo, como uno de los países más igualitarios de América Latina.

LA DEMOCRACIA SITIADA

En el proceso, la institucionalidad pública de Costa Rica se ha visto duramente impactada. La atmósfera ética e ideológica impuesta por el predominio neoliberal ha propiciado un juego perverso donde la corrupción se entrelaza con políticas ideológicamente motivadas, cuyo fin es restringir los recursos a disposición de las instituciones públicas y debilitar su funcionalidad y capacidad para decidir y actuar. Entonces, y justificadamente, la percepción popular de corrupción en el manejo de los recursos públicos se ha agudizado, espolcada por múltiples escándalos. El recientemente concluido gobierno de Laura Chinchilla fue particularmente fructífero en ese particular. Ello repercutió en niveles de impopularidad sumamente elevados, como también permitió un contundente triunfo electoral por parte de un partido de oposición que nunca había sido gobierno. Sin embargo, ha tendido a imponerse, además, una percepción generalizada de ineficiencia e ineficacia en la gestión de la institucionalidad pública.

Un tema particularmente ilustrativo, donde las acusaciones de corrupción se mezclan y superponen con la incomodidad ciudadana respecto del funcionamiento de la institucionalidad pú-

blica, ha tenido que ver con la llamada “concesión de obra pública”. Es decir, el financiamiento y control privado sobre grandes obras de infraestructura, por medio de un régimen jurídico *ad-hoc*, siendo las carreteras el aspecto donde ello ha despertado un malestar más agudo. Sin embargo, más allá de las percepciones populares, es posible demostrar que ha habido un debilitamiento efectivo de esa institucionalidad, en lo cual se mezclan causas e influencias variadas: la venalidad y corrupción política; el impacto de políticas fiscales ideológicamente orientadas por criterios anti-estadistas y diversos juegos rentistas y gremiales de efectos espoliadores. El caso más dramático, que por la amplitud de sus implicaciones sociales resulta paradigmático, es el de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la institución que tiene a cargo los servicios de salud y pensiones, cuya situación financiera en los últimos años ha sido, y sigue siendo, muy precaria (Badilla y Díaz, 2013).

El deterioro del empleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la agudización de la desigualdad social y el creciente malestar frente al decaimiento ético y la declinante eficacia de la institucionalidad pública han alimentado el cada vez más agudo descrédito hacia la democracia y sus diversos actores, normativas y formas institucionales, incluyendo los partidos políticos y sus liderazgos y los supremos poderes de la república, ninguno de los cuales escapa hoy de la sospecha ciudadana. Ello se manifiesta tanto en los porcentajes de abstención en las elecciones nacionales (que se mantiene persistentemente por encima del 30%), como en el tipo de percepciones, de tonalidad muy negativa, que quedan evidenciados en los diversos sondeos y encuestas que la prensa o diversas instancias académicas realizan (véase, por ejemplo, Díaz González, 2014). Entre otras manifestaciones, ello se visibiliza en comportamientos electorales volubles y fragmentados, reacios a cualquier fidelidad partidaria.

LA CORRENTADA DEL CAMBIO SOCIOCULTURAL

Todo lo anterior tiene lugar en un contexto social que progresivamente ha devenido más heterogéneo y complejo. En parte como reflejo de que Costa Rica es una sociedad relativamente bien educada; en parte, como resultado de una historia que, en buena medida, ha girado alrededor de imaginarios de igualdad y democracia como marcadores centrales de la identidad nacional (Sandoval García, 2008); en parte, también, como efecto del relativamente elevado nivel de integración de la sociedad costarricense en los flujos globales de información. El caso es que durante los últimos dos decenios, y de forma aún más acelerada en el nuevo siglo, han eclosionado en Costa Rica una gama variada de nuevas expresiones ciudadanas que reivindican distintos derechos, se oponen a aspectos diversos de las políticas oficiales o se movilizan a favor de propuestas de la más variada naturaleza.

Hay procesos que, con altos y bajos, llegan a configurarse como verdaderos movimientos sociales en cuanto logran perdurar y sostenerse a lo largo del tiempo. Su permanencia va así generando oleadas de cambio de alcance e intensidad variable en distintos momentos, pero con consecuencias que tienden a perpetuarse. Han sido los casos de los movimientos ambientalistas, por el Estado laico o la defensa del agua y de la seguridad social, los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales y de los pueblos indígenas, entre otros. Pero esto admite una diversificación casi caleidoscópica —desde las personas con discapacidad y de la tercera edad, o las diversas expresiones del fundamentalismo religioso pentecostal, hasta movilizaciones ciudadanas que proclaman la defensa de los “derechos de los animales”. Ello igualmente admite la emergencia episódica de organizaciones y movilizaciones que responden a situaciones más o menos coyunturales o pasajeras, incluyendo las protestas contra proyectos de concesión de carreteras al capital privado, entre otras posibilidades.

El paisaje social se vuelve así mucho más abigarrado y multicolor y adquiere una lógica dual: implica movilización y organización ciudadana autónomas, pero, al mismo tiempo, pone una enorme presión sobre la institucionalidad pública y el sistema democrático. Estos últimos todavía conservan muchos resabios de una organización y un diseño pensados para una sociedad —la Costa Rica de antes de los noventa del siglo XX— que se representaba a sí misma homogénea y compacta y que tendía a actuar disciplinadamente bajo el rígido comando de partidos, caudillos y un Estado controlador y paternalista. Ello configuraba, por otra parte, una lógica de dominación cuya cubierta democrática contenía una corriente autoritaria subyacente (González Ortega y Solís Avendaño, 2001).

CONCLUSIÓN

La Costa Rica actual enfrenta enormes y acuciantes desafíos. Es una sociedad arrastrada en una acelerada dinámica de transformación sociocultural, conflictuada por una economía plagada de asimetrías y desequilibrios, fracturada por la desigualdad y a menudo maniatada por la sospecha y la desconfianza frente al sistema político. De la Costa Rica orgullosa de sus logros sociales y sus sistemas de bienestar público van quedando retazos que apenas sobreviven gracias a la resistencia de un sector de la ciudadanía que sigue aspirando a un país inclusivo e igualitario. La economía, bajo creciente control transnacional, se ha vuelto más desequilibrada e inequitativa, y a la vez más incierta e inestable. La sociedad se agita en medio de procesos de transformación complejos y heterogéneos frente a los cuales el sistema de institucionalidad democrática se queda rezagado y casi paralizado, lo cual profundiza el desprestigio que la corrupción y la ineficacia le han acarreado.

En resumen, Costa Rica es hoy una sociedad urgida de un nuevo pacto social desde el cual reinventar la democracia, re-

construir el sistema de institucionalidad pública, reorientar la economía sobre nuevas bases y rediseñar el estilo de su convivencia social.

BIBLIOGRAFÍA:

Badilla, Andrey y Díaz, Pablo (2013). "Caja Costarricense del Seguro Social: variables internas que perpetúan la crisis". *Revista Rupturas*, Vol. 3, Num. 2, San José: Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo-Universidad Estatal a Distancia, pp. 202-223.

Díaz González, José Andrés (2014). "Activos, pasivos y apáticos: imaginarios de la población costarricense sobre la política y la democracia". *Revista Rupturas*, Vol. 4, Num. 2, San José: Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo-Universidad Estatal a Distancia, pp. 100-123.

González Ortega, Alfonso y Solís Avendaño, Manuel (2001). *Entre el desarraigo y el despojo*. San José: Editorial UCR.

Lizano, Eduardo (1988). *Desde el Banco Central*. San José: Academia de Centroamérica.

_____. (1990). "Programa de ajuste estructural", en: Vargas Solís, Luis Paulino (editor). *Crisis económica y ajuste estructural*. San José: Editorial UNED, pp. 38-60.

_____. (1999). *Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica, 1982-1994*. San José: Academia de Centroamérica.

_____. (2000). "Política económica y desarrollo nacional", en: Jiménez, Ronulfo. (editor). *Los retos políticos de la reforma económica en Costa Rica*. San José: Academia de Centroamérica, pp. 179-195.

Programa Estado de la Nación (2013). *Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*. San José: Programa Estado de la Nación.

Rovira Mas, Jorge (1982). *Estado y política económica en Costa Rica 1948-1970*. San José: Editorial de la UCR.

Rovira Mas, Jorge et. al. (1983). *Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas*. San José: Editorial UNED.

Sandoval García, Carlos (2008). *Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica*. San José: Editorial UCR.

Sojo, Carlos (1991). *La utopía del estado mínimo. Influencia de la AID en Costa Rica en los años ochenta*. Managua: CRIES.

_____ (1992). *La mano visible del mercado*. Managua: CRIES.

Vargas Solís, Luis Paulino, et. al. (2011). *Miradas plurales alrededor de la crisis económica mundial*. San José: Editorial UNED.

Vargas Solís, Luis Paulino (2003). *Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva*. San José: Editorial de la UCR.

(2011). "Costa Rica: tercera fase de la estrategia neoliberal. Contradicciones y desafíos (2005-[2010])". *Revista Rupturas*, Vol. 1, Num. 1, San José: Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo-Universidad Estatal a Distancia, pp. 84-107.

(2012) "Crisis económica mundial: Elementos para una crítica de los paradigmas teóricos e Ideológicos que sustentan la propuesta neoliberal". *Revista Rupturas*, Vol. 2, Num. 1, San José: Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo-Universidad Estatal a Distancia, pp. 142-169.

Luis Paulino Vargas Solís es economista con doctorado en gobierno y políticas públicas, Premio Nacional Aquileo Echeverría 2011, ha publicado 12 libros y es catedrático universitario y Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED de Costa Rica. Autor del blog "Soñar con los pies en la tierra", <http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com.ar/>

3. El Salvador

Relações de quem? – personalidade, política e projeto entre El Salvador e Brasil

Aleksander Aguilar

A política exterior do Estado salvadorenho é tradicionalmente influenciada por posições ideologizadas dos grupos de poder que o governam que incluem, nas últimas décadas, concepções notoriamente liberais de condução do país, sob marcada pressão das cúpulas empresarias nacionais e regionais que incidem na elaboração das políticas estatais domésticas e externas.

Nesse sentido, e em larga medida, as preferências internacionais do primeiro governo da ex-guerrilha *Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional* (FMLN), presidido por Mauricio Funes entre 2009 e 2014, conformaram-se a partir de um legado recebido de governos anteriores da *Alianza Republicana Nacionalista* (ARENA) sem, por consequência, e erroneamente, estabelecer dele uma cardinal distância nessa esfera. Essa leitura crítica dos comportamentos do país no sistema internacional se dá pese o reconhecimento do esforço desse governo, entendido como de esquerda em El Salvador, em ter impulsionado uma política externa de “*puertas abiertas*”¹, fundamentada pela preocupação em fortalecer e diversificar

1 Henríquez, Figueroa, Durán, 2012.

suas interações e acordos de cooperação, notadamente as do âmbito Sul-Sul, e particularmente com o Brasil – um ator de presença comumente vista como inusitada no jogo político centro-americano, de baixo perfil no histórico das relações internacionais da América Central como um todo, mas que foi a assumida referência da gestão Funes e que se altera no novo governo da FMLN, eleito em 2014, que tem à frente Sánchez Céren.

Uma constatação é basilar para o desenvolvimento dessa análise: o país de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos mais populares presidentes da História do Brasil, porém – e note-se que essa metonímia aqui foi intencional, como desenvolveremos a seguir – já vinha marcando, e sendo convidado a marcar, influência no istmo, particularmente em El Salvador, desde a gestão do último presidente arenero, Elias Antonio Saca. Logo, quais foram as motivações e os desdobramentos desse relacionamento entre Brasil e El Salvador durante o governo Mauricio Funes? Ele ainda permanece ou permanecerá no segundo governo consecutivo da FMLN no país? Para atender a esses questionamentos é necessário fixar, como reflexão antecedente, outras perguntas-balizas: a relação estabelecida foi entre Brasil e El Salvador, entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e a FMLN, ou entre Lula e Funes?

DA ARENA A FMLN

A vitória da FMLN nas eleições presidenciais de 2009 representou um marco no processo de amadurecimento institucional de El Salvador. Sua chegada ao poder pela primeira vez enfeixava o simbolismo de exercer, pela via eleitoral e democrática, a condução dos rumos do país que apenas há duas décadas buscava pela via militar. As posições da ARENA desde a sua fundação como partido político sempre foram claras. Um anticomunismo acirrado – motivador ideológico central de sua constituição ain-

da à época da ordem internacional bipolar – e a defesa de concepções liberais de governo, que incluem a defesa de um Estado promotor de arranjos de livre comércio internacional como formas de se obter um ambiente de paz e progresso. O partido obteve seu primeiro governo em El Salvador em 1989, com Alfredo Cristiani, quem foi o chefe-de-Estado que assinou os Acordos de Paz. Mais outros quatro presidentes areneros garantiram a hegemonia do partido no país, até 2009.

Os governos arenereos, de Cristiani até Saca, mantiveram a condução do país ligada aos interesses econômicos norte-americanos, alinhando-se aos tratados comerciais propostos pelo *hegemon* e rechazando articulações de cooperação Sul-Sul com os países da ALBA e especialmente a possibilidade de El Salvador ingressar nessa Aliança. Mesmo no contexto de crise e de aumento dos preços do petróleo no mercado mundial em 2008, dado a posição privilegiada da Venezuela nesse setor e os programas subsidiários da ALBA, o governo salvadorenho na gestão Saca não cogitava essa via de integração. Mas eis que surge entre as relações internacionais salvadorenhas um ator inusitado. O Brasil, num sentido muito específico, converteu-se numa prioridade para El Salvador.

Em poucas e objetivas palavras: a posição do governo Saca era de que a opção mais viável para amenizar a crise do petróleo e atrair investimentos estrangeiros era fortalecer as relações exteriores com o país de Lula – visto como um governo de esquerda moderada – e com isso mostrar-se com uma certa abertura em suas relações diplomáticas a governos aparentemente distantes das matrizes ideológicas da ARENA. Estrategicamente, a aproximação com o Brasil era estimulada por representar para El Salvador uma das principais justificativas do rechaço do país a ALBA, pois relacionar-se amplamente com o país sul-americano – rotulado sob a prestigiosa categoria de potência emergente – amenizava as pressões que o governo Saca sofria

ao ignorar as propostas bolivarianas que, pragmaticamente, eram vigorosas num contexto de crise econômica internacional. Tem-se então que o começo de relações exteriores aprofundadas de El Salvador com o Brasil dá-se a partir do governo Saca. Mas durante a administração Funes esse relacionamento atinge um nível sem precedentes. E os Estados Unidos, nesse interim, fez-se o fiel da balança.

Se por um lado podemos dizer que política exterior salvadoreña no governo Saca não surpreendeu ao ter sido condicionada pelo alinhamento à política exterior estadunidense, por outro, contudo, a política exterior da gestão Mauricio Funes revestiu-se de um racionalismo exagerado, também ideologicamente contaminado, e temerário, ao ter optado em suas relações internacionais, sob a égide do discurso pragmático, por um descarte da aproximação de El Salvador às ideias do Socialismo do Século XXI. E valendo-se com êxito para esse objetivo – igualmente a ARENA – do relacionamento com esse, paradoxal e virtualmente desconhecido no istmo, gigante verde-amarelo sul-americano.

QUAL BRASIL?

Como lembra o diplomata brasileiro Sérgio Danese², o Brasil aumentou enormemente seu prestígio e importância no mundo nos últimos anos. Junto a Rússia, Índia e China, e em certa medida a África do Sul, que conformam o grupo BRICS, converteu-se em um ator preponderante no cenário internacional, com um projeto de ambições de transformação da ordem global – como os pleitos de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Consequentemente, alguns temas e iniciativas de política externa, como a liderança regional, passaram a ocupar um lugar de destaque sem precedentes no debate público brasileiro.

Mas para além do *momentum* essa liderança, para o Itama-

2 Danese, 2009.

raty (o Ministério de Relações Exteriores do Brasil), é um tema constituinte da nacionalidade do país e referente da sua inserção internacional. A diplomacia brasileira sempre esteve orientada a consolidar essa posição em seu espaço imediato, atuando, necessariamente, na integração plena na América do Sul – um interesse nacional brasileiro de primeira grandeza. Assumir-se como um país sul-americano e em desenvolvimento conforma a dupla identidade internacional do país, fruto de décadas de experiências, algumas acertadas e várias errôneas, de trabalho diplomático. O Brasil para liderar exerceria o papel de manter a estabilidade da região com o aprofundamento de iniciativas como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União de Nações Sul-americanas (UNASUL). E uma aproximação firme do Brasil, e desses organismos de integração sul-americana, com o Sistema de Integração Centro-americano (SICA) poderia contribuir amplamente para essa consolidação, ampliando a noção de espaço imediato de influência brasileira.

O Brasil, hoje o mais importante *player* do tabuleiro geopolítico da América do Sul, obteve na era Lula uma maior relevância também nos assuntos políticos da América Central. Além de sua participação protagonista na crise em Honduras em 2009, o Itamaraty criou passagem para o desenvolvimento do seu conceito de “liderança sem hegemonia”³ no hemisfério ao aumentar sua influência no istmo centro-americano, através principalmente de El Salvador.

Segundo a analista internacional brasileira Cristina Pecequillo⁴, a natureza das prioridades e perspectivas da política externa brasileira vem sendo objeto de um debate intenso no país, que está enraizado nas tradições das suas relações internacionais. Por vezes polarizada, esta discussão se desenvolveu em torno do questionamento – por grupos que defendem a recons-

3 Idem.

4 Pecequillo, 2008

trução de uma relação especial com os EUA – das opções feitas pelo governo Lula com aproximações buscadas com as nações emergentes e países menos desenvolvidos. Para essa autora, a agenda brasileira de relações exteriores nesses primeiros anos do século XXI caracteriza-se pela combinação equilibrada dos eixos horizontal e vertical. Sendo o eixo vertical o das relações com os países do Norte industrializado, o eixo horizontal é representado pelas parcerias com as nações emergentes, como os BRICS, e composta também pelos países menos desenvolvidos da África, Ásia e América Latina, onde incluímos também muito particularmente os da América Central. Este eixo representa a dimensão terceiro-mundista da política externa, também definida como relações Sul-Sul.

A ESQUERDA MODERADA

Para o analista internacional mexicano Jorge Castañeda, o Brasil representava uma esquerda pragmática e centrista na América Latina no início do século XXI, que buscou a correção das políticas prévias e atualizava os laços com a comunidade internacional em um ambiente de cooperação. Em oposição, a Venezuela de Hugo Chávez buscou um caminho de contestação aberta à agenda vigente, alianças com Estados condenados pela diplomacia dos EUA como Cuba e Irã, e a promoção do Socialismo do Século XXI⁵.

É fácil concordar com esta análise quanto ao potencial de polarização representado por Chávez, mas na relação bilateral entre Brasil e Venezuela ambos os países buscam uma atualização de suas agendas e a recuperação de espaço, onde o primeiro puxa uma integração pela UNASUL, e o segundo através da ALBA. Como afirma Pecequillo: “Na realidade, estas abordagens táticas diversas possuem objetivos similares: a reforma do neoliberalismo e do Estado e a projeção de uma postura autô-

5 Castañeda, 2006

noma no cenário externo”⁶. Ela lembra, citando outro internacionalista brasileiro, Paulo Vizentini⁷, que mesmo Lula, durante sua primeira campanha eleitoral vitoriosa em 2002, era visto com desconfiança sob o risco de assumir uma postura ideológica militante. Esses temores somente foram abandonados pela comunidade internacional, principalmente pelos EUA, depois da indicação da equipe de governo.

E de fato, entender minimamente as transformações do PT e de Lula na política nacional brasileira é fundamental para afirmar conhecimento sobre o país neste início de século XXI. Considerando, como o faz o teórico Roberto Cox, que a política externa de um país pode ser entendida como “uma luta entre forças sociais locais e a hegemonia econômica, política e ideológica global com o Estado desempenhando um papel intermediário”⁸ podemos afirmar que dessa interação resultou, como sustenta o pesquisador brasileiro Leonardo César Souza Ramos, num PT com uma política externa que, em larga medida, não se diferencia muito da política externa do governo anterior, do socialdemocrata Fernando Henrique Cardoso⁹. E embora algumas vezes tenha se apresentado como um crítico da ordem mundial neoliberal, o governo Lula não contribuiu para uma possível tentativa de superação desse modelo, mas para a sua reconstrução.

O MOMENTO ATUAL: O BRASIL DESNECESSÁRIO?

Retratado em grossas tintas, esse foi o governo e o líder político de referência da, muito criticada internamente, gestão de Mauricio Funes em El Salvador.

⁶ Pecequillo, 2008.

⁷ Um dos principais internacionalistas brasileiros contemporâneos. Perfil em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Gilberto_Fagundes_Vizentini

⁸ Cox, 2001.

⁹ Ramos, 2012.

De acordo com o pesquisador de nacionalidade hondurenha radicado no Brasil, Carlos Dominguez Ávila, ao longo do século XX nas relações entre o Brasil e os países da América Central vê-se a tendência a uma gradual convergência de interesses e um paulatino fortalecimento de vínculos, embora tenham permanecido em níveis modestos. Mas nos anos 80, justamente à época do auge dos conflitos políticos militares e políticos centro-americanos, o Brasil inicia a recuperação das suas instituições democráticas depois de mais de 20 anos de ditaduras civis-militares, e deixava para trás o que Ávila considera “um passado de virtual negligência ou indiferença na sua política centro-americana”¹⁰, passando a apoiar ativamente os processos negociadores da paz denominados Contadora e Esquipulas. Essa contribuição brasileira favoreceu uma sensível aproximação política, econômica e cultural entre Brasília e os governos centro-americanos, e atingiu, já no século XXI, um ápice durante a era Lula.

No contexto da polarizada política salvadorenha, entre esquerda e direita, legado dos tempos de guerra, moderação tornou-se a palavra-chave, um vocábulo que no contexto salvadorenho foi, e ainda é, entendido como tendo um sentido de contornos definidos e cujo melhor representante do Sul Global foi o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas eleições salvadorenhas de 2009, que resultou na primeira vitória da FMLN, isso era claro. Ter a imagem associada a de um presidente visto como internacionalmente respeitado, e moderado, do próprio continente latino-americano era essencial. A FMLN mantém relacionamento explícito com o PT desde o começo da década de 90, quando integrou o movimento chamado Fórum de São Paulo, que buscava unir as esquerdas latino-americanas. Mas a relação entre os dois partidos nunca havia sido tão aberta e profunda como depois da amizade entre Lula e Funes. Mauricio Funes deixou claro que o governo brasileiro era sua referên-

10 Ávila, 2010

cia de gestão logo no seu discurso de posse, quando se referiu a Lula como seu “amigo pessoal”¹¹. E logo após sua vitória eleitoral o Brasil foi o primeiro país que Funes visitou em sua primeira viagem oficial como presidente, em setembro daquele ano.

Essa amizade começou quando Funes foi apresentado a Lula pela sua esposa, a brasileira naturalizada salvadorenha, Vanda Pignato – militante fundadora do PT e uma das principais organizadoras da setorial de Relações Internacionais do partido, que se tornou a primeira-dama do país e a secretária de Inclusão Social do governo, com status de ministra. Ela foi essencial na eleição de Funes com essa mediação com a cúpula petista na estratégia de campanha em El Salvador, e criou e dirigiu programas governamentais importantes e premiados como o *Ciudad Mujer*. Vanda defendeu que El Salvador se tornasse o ponto de partida para que o Brasil ampliasse suas relações comerciais e culturais com outros países da América Central e foi explícita em apontar a amizade entre Lula e Funes para se alcanças-se esse crescimento de influência do Brasil no istmo¹². De fato, antes do governo petista, nunca um presidente brasileiro havia posto os pés em terras cuzcatlecas. Lula quando esteve em El Salvador pela primeira vez, em 2008, foi como convidado da Cúpula de chefes de Estado do SICA, e Antonio Saca ainda era o mandatário, mas o encontro privado foi com o então candidato à presidência, Mauricio Funes, numa clara demonstração de seu apoio eleitoralmente importante naquele momento do jogo.

Com a vitória de Funes, pelo menos 30 projetos de cooperação técnica entre os dois países foram firmados e executados, e apenas em 2012 os valores desses projetos ultrapassaram três bilhões de dólares¹³. E expandiram-se também as relações

11 Discurso de posse de Mauricio Funes como presidente da república de El Salvador. Disponível em vídeo em: <http://www.youtube.com/watch?v=cFupfdbnCE4>

12 Daoun, 2009.

13 Henriques, Figueroa, Durán, 2012.

comerciais. Em 2010 deu-se o Encontro Empresarial Brasil-El Salvador, organizado na sede da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), com o objetivo de estreitar laços que atraíssem investimentos ao país centro-americano. Mauricio Funes e Luiz Inácio Lula da Silva participaram do evento que teve a participação de mais de 200 empresários, 50 deles salvadorenhos. Ciente do abismo entre as duas economias, Funes destacou a possibilidade de El Salvador como centro logístico de distribuição para outros mercados da América Central e da América do Norte, em virtude dos tratados de livre comércio que o país possui com essas regiões e destacou: *“No juzguen la importancia de El Salvador por su territorio o por su mercado, véanlo como un enclave geoestratégico que les abre las puertas a un mercado potencial de 540 millones de consumidores”*¹⁴.

E então em 2014 a FMLN obtém sua segunda vitória consecutiva à presidência de El Salvador, elegendo o ex-comandante guerrilheiro, Sánchez Cerén. A disputa só se resolveu no segundo turno, com uma vitória apertada de apenas seis mil votos de vantagem sobre seu oponente da ARENA, uma diferença de 0,5%. Num discurso concertador e chamando ao diálogo, o presidente diz querer impulsionar reformas econômicas e estruturais do Estado que Funes ambicionava e nos quais chegou a avançar, de maneira tímida, em transparência e inclusão social. A primeira notícia de política internacional do novo governo: El Salvador ingressou no dia 02 de junho, apenas um dia depois da posse de Cerén, oficialmente a Petrocaribe¹⁵, uma aliança de segurança energética também na órbita das propostas bolivarianas de integração, que agora é composta por 19 países do continente. A iniciativa é impulsionada pela Venezuela para que o país provenha petróleo em condições atrativas aos membros da organização. No último ano da gestão Funes El Salvador fez-se observador da

14 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR. 09 de agosto de 2010.

15 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR. 02 de junho de 2014.

organização, mas agora ao tornar-se membro pleno o país pode ter um trato preferencial em preços e em créditos de médio e longo prazo que permitiriam El Salvador usar cerca de 40% do que pagaria por petróleo em programas sociais.

Contudo, ao retornar de sua visita oficial aos Estados Unidos logo de ser eleito, o presidente Cerén assegurou que seu governo cumprirá com todas as condições que foram impostas para que seja liberado os recursos do FOMILENIO – projeto internacional de desenvolvimento estadunidense para o qual os EUA já doaram 461 milhões de dólares para El Salvador entre 2007 e 2012, e tem pendente o repasse de outros 277 milhões condicionados à implementação de reformas jurídicas no país¹⁶. Cerén dá sinais, assim, de que manterá El Salvador próximo aos EUA.

O ponto de inflexão do relacionamento salvadorenho com o Brasil durante a gestão do Funes foi que, assim como na gestão Saca, ele serviu de justificativa para o governo manter um alinhamento dependente da política exterior dos Estados Unidos, rechaçando as propostas da ALBA. O governo Funes souber utilizar a relação com o Brasil para se apresentar como um governo mais arejado em política exterior, com ênfase em relações aprofundadas também com governos ditos de esquerda, sempre que estas fossem moderadas, e não radicalizadas como supostamente são as que estão na órbita da ALBA. Desde de uma origem generalista nos anos 90 entre o PT e FMLN, o contato entre El Salvador e Brasil tem um ganho qualitativo a partir de 2008, e personifica-se com um movimento que, apesar da natureza política, perpassa fatores da esfera do pessoal, com a influência da primeira-dama brasileira Vanda Pignato, e acaba por fazê-lo centrado entre as personalidades de dois governantes específicos em ambos países: Funes e Lula. Isso cristaliza de maneira metonímica as relações internacionais entre os dois Estados, faz explícito, oficial e efetivo a presença brasileira-petista em cam-

16. Martínez, 2014.

panhas eleitorais efelemenistas e em programas de governo salvadorenhos durante o período do Executivo de 2009 a 2014. E por terem nascidas e serem desenvolvidas nessas condições, tal ênfase em relações exteriores demonstraram fragilidade.

Hoje, embora o atual governo de El Salvador sob a presidência de Cerén pareça não rejeitar a priori, diferentemente do seu antecessor, o relacionamento com a Venezuela, e mostre-se disposto a seguir na esfera imediata de influência dos Estados Unidos, o Brasil, assim, não parece figurar entre suas principais relações internacionais. O debate sobre prioridades de relações exteriores, sobre o significado das opções Sul-Sul e o tipo de inserção internacional que se deseja permanece acirrado e em disputa.

BIBLIOGRAFIA:

Avia, Carlos Federico. *As Relações Entre o Brasil e a América Central – Um século de afinidades eletivas, solidariedade e convergência* (1906-2010). Juruá Editora. Brasília, 2011.

Castañeda, Jorge. *Latin's America turn to the left. Foreign Affairs on line. Maio de 2006*. Disponível em: <http://www.foreignaffairs.org/20060501faessay85302/jorge-g-castaneda/latin-america-s-left-turn.html> Último acesso em 04 de junho de 2014.

Cox, Robert. *"Foreword." Counter-hegemony and foreign policy: The dialectics of marginslized and global forces in Jamaica*. Albany Persaud. State University of New York Press, 2001. Pág XI

Danese, Sergio. *A Escola da Liderança – Ensaios sobre a política externa e a inserção internacional do Brasil*. Editora Record. Rio de Janeiro, 2009.

Daoun, Michel. "Brasileira, futura primeira-dama de El Salvador diz que país pode ser ponto de partida para o Brasil". *UOL Notícias*. 19 de março de 2009. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/03/19/ult1859u791.jhtm>. Último acesso em 04 de junho de 2014.

Henríquez, Carmen Isabel, FIGUEROA; Karla Mariely; DURÁN, Rogelio Hen-

rique. Factores ideológicos y políticos condicionantes de la política exterior salvadoreña hacia américa durante la administración del presidente Elías Antonio Saca (2004 – 2009) y del presidente Carlos Mauricio Funes (2009 – 2012) - Aciertos y desaciertos de ambas administraciones. Universidad Nacional de El Salvador. 2012.

Martinez, Julia Evelyn. *Semillas, poder e imperialismo.* Blog Con Nuestra América. Disponível em: <http://connuestraamerica.blogspot.com.br/2014/05/el-salvador-semillas-poder-e.html>. 24 de maio de 2014. Último acesso em: 04 de junho de 2014.

Ministerio de Relaciones exteriores de El Salvador. *Discurso del presidente Funes en el encuentro empresarial Brasil-El Salvador*, en la ciudad de Sao Paulo. 09 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=803:discurso-del-presidente-funes-en-el-encuentro-empresarial-brasil-el-salvador-en-la-ciudad-de-sao-paulo&tmpl=component&print=1 . Declaración del Gobierno de la República de El Salvador para su adhesión al Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. 02 de junho de 2014 Disponível em: <http://www.rree.gob.sv/index.php/noticias-ciudadano/item/3439-declaracion-del-gobierno-de-la-republica-de-el-salvador-para-su-adhesion-al-acuerdo-de-cooperacion-energetica-petrocaribe> Último acesso em: 04 de junho de 2014.

Pecequillo, Cristina. *Política Externa do Brasil no Século XXI: Os Eixos Combinados de Cooperação Horizontal e Vertical.* Rev. Bras. Polít. Int. 51 (2): 136-153. 2008.

Ramos, Leonardo César. *Contra-hegemonia e política externa? A política externa brasileira no governo Lula.* Carta Internacional. Associação Brasileira de Relações Internacionais. Vol. 7, n. 1, jan.-jun. 2012. Pag. 69 a 86.

Aleksander Aguilar é jornalista, graduado em Comunicação Social e licenciado em Letras. Mestre em Estudos Internacionais pela Universitat de Barcelona (Espanha), e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), onde coordena o Grupo de Estudos Subalternos, Periféricos e Emergentes, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Regionais e do Desenvolvimento (GESPE/D&R/UFPE), e edita o blog O ISTMO (www.grupoamericacentral.wordpress.com), sobre a América Central. Email de contacto: antular@hotmail.com

The History of Electoral Politics in Modern El Salvador

Erik Ching

El Salvador's modern political history has been defined by authoritarianism. With only one exception prior to the presidential election of 1994, the regimes that have ruled El Salvador have come to power through non-democratic mechanisms. With little or no accountability to the broader whole of society, those governments, consequently, tended to serve a small segment of society and demonstrated little interest in mobilizing the nation's opportunities and resources in a more egalitarian manner. In short, El Salvador's modern governing structures have been controlled by the political right almost exclusively, perhaps more than any other country in Latin America. Whereas most every other country in Latin America has experienced an extended period of reformist or even revolutionary governance, El Salvador has had almost none. The lone exception is the reform-minded President Arturo Araujo who came to power in March 1931 in the nation's first and only democratic election prior to 1994. But Araujo was quickly ousted in December 1931 in a military coup that ushered in five decades of military governments, which stand as Latin America's longest run of uninterrupted military rule. Only as

a consequence of the civil war of 1980-1992 were the political structures of El Salvador reformed such that democratic procedures could take hold. Still, it was not until the election of 2009 that a “leftist/reformist” regime came to power once again.

Nevertheless, El Salvador’s authoritarianism has been characterized by highly paradoxical traits. First and foremost, despite the absence of democracy, El Salvador’s modern history has been defined by constant and unrelenting elections. No political leader in El Salvador, whether dictator or democrat, ever came to power without an election to legitimize his claim to office. And in those elections, the Salvadoran populace participated in great numbers. Elections were highly regular affairs, at all levels of governance, and many people voted in them. Fortunately, a lot of archival records relating to these elections have survived into El Salvador’s documentary patrimony, and it is quite an experience for a historian who has had the opportunity to scour the archival record to discover how pervasive these elections were and how central a role they played in Salvadoran history.

A second paradox of El Salvador’s authoritarianism was that the non-democratic practices were accompanied by a persistent and unrelenting pro-democracy discourse. Throughout the entire history of El Salvador’s independent life, political actors hailed free suffrage, individual choice and republican governance. No matter how controlled an election may have been, its participants, almost without fail, injected a pro-democracy discourse into their actions. Once again, as a historian reviewing the archival record, it is quite remarkable to witness how this rhetoric was sustained by so many political actors in so many elections, across so many decades, and throughout so many municipalities and regions in the absence of a centralized, coordinating body.

A final paradox of El Salvador’s authoritarianism is that the franchise was always relatively open, and it trended towards

more openness rather than more restrictiveness. Granted, women did not gain the right to vote until 1950. But with that exception, El Salvador's electoral laws steadily expanded the suffrage. For example, race was never a criteria for voting in El Salvador. And while various other restrictions did exist at the time of independence, these restrictions were steadily withdrawn, such that by the late nineteenth century, any able-bodied male over the minimum age had a right to vote regardless of ethnicity, wealth, literacy or any of the other customary restrictions. In this regard, El Salvador's stands apart from some other Latin American countries, such as Colombia, where elite actors restricted the franchise in the face of what they perceived as an autonomous, mass-based articulation of a civic republicanism.¹

El Salvador's vice-presidential election of 1895 provides a case study in how the electoral system functioned well into the twentieth century.² The election of 1895 is a special case because the archival record associated with it is the most extensive for any election in Salvadoran history up to the mid twentieth century. Not only do we have municipality-by-municipality voting results, but also we have copious telegrams of correspondence that flowed back and forth between political operatives before and during the voting. The two candidates in the election were Carlos Meléndez and Prudencio Alfaro, two wealthy aspiring political actors. The election took place in the aftermath of a coup by General Rafael Gutiérrez against the previous president, General Carlos Ezeta. As was customary in the aftermath

-
- 1 The preceding is a summary of the main arguments of my book: Ching, Erik, *Authoritarian El Salvador: Politics and the Origins of the Military Regimes, 1880-1940* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2013). For an example of a nation where the franchise was restricted in the nineteenth century, see the case of Colombia: Sanders, James, *Contentious Republicans: Popular Politics, Race and Class in Nineteenth-Century Colombia* (Durham: Duke University Press, 2004).
 - 2 The evidence pertaining to this election is found in a folder titled "Elección de 1895" in an unclassified box dated 1895 in El Salvador's Archivo General de la Nación (AGN), in the collection of the Ministerio de Gobernación (MG).

of a coup, Gutiérrez ran uncontested and won the election with a unanimous victory. Under normal circumstances, there would have been a single vice-presidential candidate who would have appeared on the ticket with Gutiérrez and won by the same outcome. But 1895 was an exception, and therein its results open a revealing window in to the nature of elections in El Salvador.

Both Meléndez and Alfaro supported Gutiérrez during the coup and both of them wanted to be vice president. It seems that Gutiérrez decided to avoid choosing one of his loyal captains over the other, and so he let them battle it out for the vice presidency in the election. Indeed, their election was quite a competitive affair. Alfaro eventually won the contest by a vote of 38,006 to 18,792, with a handful of other candidates splitting 4,000 remaining votes.

On the surface, the election appears to have been an exercise in democracy. But when the results are examined at the level of individual polling stations, the exact opposite emerges. The election was indeed competitive, but it was not democratic. At each of the roughly 300 polling stations throughout the country, the victor tended to be determined by a unanimous or near unanimous result. The evidence shows that Meléndez and Alfaro functioned in a traditional political manner: they employed their vast networks of patronage and clientelism throughout the country in hopes of controlling as many polling stations as possible and preventing their rivals' voters from casting their votes. In the end, Meléndez proved better at doing this than Alfaro. Under normal circumstances, such intense competition between two relatively evenly matched political rivals would have resulted in widespread fighting and bloodshed. But in this case, because a dominant actor had already been determined —General Gutiérrez— the election proceeded calmly. Throughout the election, and in the weeks following it, Meléndez and Alfaro exhibited another typical characteristic of El Salvador's authoritarianism, an unrelenting pre-de-

mocracy discourse.

This election of 1895 provides a detailed look into the classic functioning of electoral politics in El Salvador throughout the nineteenth and early twentieth centuries. Rival patronage networks battled with one another for control over polling stations in an effort to dictate how voting would transpire on elections day. Elections were sometimes highly competitive affairs, but rarely, if ever were they democratic. And when the state began to centralize at the turn of the twentieth century, the main target of these national-level political leaders was not so much rebellious masses, but rather regional patronage leaders who sought to retain their autonomy and use their political networks as a launching pad for future political activities. The process of centralization reached its apogee under the Meléndez-Quiñónez family, which controlled the presidency between 1913 and 1926.

In the midst of this process a dictatorial centralization, an unexpected reformer emerged-- President Pío Romero Bosque. During his four years in office (1927-1931), Romero tried to change the electoral system by implementing genuine democratic reforms. As a longtime political insider, Romero's motives are unclear, but the archival record reveals his efforts to have been genuine. Although Romero mostly failed in his endeavor, but among his few successes was the presidential election of 1931, which resulted in the victory of the civilian populist reformer, Arturo Araujo in 1931. As mentioned above, Araujo was overthrown a few months later in a military coup in December 1931, which brought to power the notorious General Maximiliano Hernández Martínez, who ruled for the next thirteen years and ushered in fifty years of uninterrupted military-led dictatorships.

Martínez squashed the experiment in democracy and returned the electoral system to what it had been under Meléndez-Quiñónez—a top-down, uncontested affair in which candidates were predetermined and elections were decided by unanimity. In fact,

the archival record shows that the Martínez regime relied upon many of the same networks and political actors that had been in power in the municipalities during the Meléndez-Quiñónez era. And, in accordance with tradition, Martínez employed a pro-democracy discourse to describe his electoral practices. One advantage that Martínez enjoyed relative to his predecessors, is that the military held a monopoly on violence. No longer were central political figures like him worried so much about regional political networks that might gather enough weaponry and allies to overthrow the reigning administration. The central government still depended upon local and regional patronage networks to fulfill the state's mandates and to find appropriate candidates for the next election. But after 1931, the main threats to central authority came from within the military, and thus any civilian elites who might have aspired to hold political influence either had to work within the existing regime and climb their way up, or forge alliances with rebellious officers in hopes of executing a successful coup. For the next fifty years, this complex of internecine maneuvering defined El Salvador's political and electoral lives.

One of Martínez's most important innovations was to inject a dose of populist reformism into the traditional authoritarianism. Prior to Presidents Romero Bosque and Araujo, El Salvador's political leaders rarely, if ever appealed to the masses directly, and certainly they never portrayed civilian elites as the source of the masses' problems. Presidents Romero Bosque and Araujo struck an unprecedented populist tone, but even they moderated the message significantly. Martínez and his fellow officers in government made populist reformism a core aspect of their governing strategy. They appealed directly to the masses and sought to forge an independent relationship with them against civilian elites. They attempted to portray the government as an ally of the common person that would work to defend and protect his interests against potential exploiters, particularly un-

scrupulous landed elites. As part of this strategy, the Martínez government launched a social reform program known as *Mejoramiento Social*, which sought to implement various reformist programs, including redistributing land to landless peasants and building affordable housing in urban areas. The fact that *Mejoramiento Social* achieved very little was less important than the public-relations opportunities it provided to the government, and the way in which it allowed military leaders to modernize the discourse of politics and governance.

Sceptics can justifiably dismiss these appeals to reformism by the Martínez government as mere rhetoric or pieces of a hegemonic project designed to placate the masses in order to make them more vulnerable to the nation's landed elites. Such skepticism is certainly warranted. After all, the Martínez government perpetrated one of the most violent acts of brutality against mass actors in modern Latin American history, carrying out a roughly two-week scorched-earth campaign throughout western El Salvador in late January and early February 1932 in response to a peasant uprising that occurred there between January 20th and the 23rd. But the archival record reveals the need to take the military's populism into account and to see it as a new and important component of El Salvador's evolving authoritarianism. For example, compelling documentation in El Salvador's archival record reveals that in the immediate aftermath of the military crackdown in the western region in 1932, the military government began a campaign of defending and protecting rural poor people from retribution by local elites. One collection of documents from the village of Nahuizalco in Sonsonate department reveals that the military sent undercover intelligence officers into the region for the purpose of determining if local elites were enacting retribution against the rural poor.³

3 See the correspondence from Enrique Uribe, sub-comandante local, Nahuizalco, to comandante of Sonsonate Department, March 4, 1932, AGN, MG, Sección

It is incredibly ironic to see in the documentary record a military that had just massacred peasants by the thousands turn around and suddenly begin to defend them from local elites and their paramilitary gangs. But such was the paradoxical nature of El Salvador's authoritarianism.⁴

This combination of traditional dictatorship with populist overlay become the new, modernized version of Salvadoran authoritarianism. Every military regime after Martínez adhered to it, even if they eschewed the name of Martínez for fear of being associated with the mass killings in 1932. After Martínez left office in 1944, each successive military regime beat back any and all attempts at genuine democratization, all the while utilizing a pro-democracy discourse to describe its political activities and pushing forward a reformist agenda to unprecedented heights. Not until the conclusion of a twelve-year civil war (1980-1992) was the system broken down and rebuilt in a more genuinely democratic fashion.⁵

In summary, El Salvador's modern political life has been defined by a pervasive authoritarianism, but with a series of paradoxes residing at its core. Amidst non-democratic practices, political actors employed a relentlessly pro-democracy discourse. And after 1931, amidst an enhanced authoritarianism, populist reformism emerged as a central component of military rule. If nothing else, these pervasive paradoxes might help to explain why pro-democracy advocates have faced such difficulties in El

Sonsonate (SS), Box 3.

- 4 On the events of 1932 and debates over its interpretation see Gould, Jeffrey and Aldo Lauria, *To Rise in Darkness: Revolution, Repression and Memory in El Salvador, 1920-1932* (Durham: Duke University Press, 2008); and Lindo Fuentes, Héctor, Erik Ching and Rafael Lara Martínez, *Remembering a Massacre in El Salvador: The Insurrection of 1932, Roque Dalton and the Politics of Historical Memory* (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2007).
- 5 See Lindo Fuentes, Héctor, and Erik Ching, *Modernizing Minds in El Salvador: Education Reform and the Cold War, 1960-1980* (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2012).

Salvador. They have had to not only expose and explain these paradoxes, but also in the process undo them. Unfortunately, as evidenced by the civil war of 1980-1992, such an endeavor did not transpire peacefully in El Salvador.

Erik Ching is a Professor of History at Furman University in Greenville, SC, USA. He received his Ph.D. in Latin American history from the University of California, Santa Barbara in 1997. He is a specialist in the history of El Salvador. He has authored and co-authored numerous books and articles about Salvadoran history, including, most recently: *Authoritarian El Salvador: Politics and the Origins of the Military Regimes, 1880-1940* (University of Notre Dame Press, 2013). Email de contacto: eching67@gmail.com

Lecciones de la post guerra en El Salvador para un nuevo gobierno progresista

Gilberto García

Los nombres de los asesinados irán cambiando, pero siempre habrá asesinados. Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia mientras no se cambie la raíz de donde están brotando, como de una fuente fecunda, todas estas cosas tan horrorosas.

Monseñor Óscar Arnulfo Romero

El inicio de 1992 fue muchas cosas, pero sobre todo fue un tiempo de esperanza. Faltando 15 minutos para finalizar el año anterior, justo antes del límite del mandato de Javier Pérez de Cuellar como Secretario General de la Organización para las Naciones Unidas, fue firmado un compromiso entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la sede de la ONU en Nueva York para poner fin al conflicto armado. Dicho Acuerdo fue ratificado ya en todos sus componentes el 16 de enero en el Castillo de Chapultepec, México. Con esto se daba por terminado un conflicto bélico que para algunos había iniciado en 1980, con el asesinato del Arzobispo de San Salvador, para otros desde 1970, con la fundación de las primeras organizaciones político

militares de izquierda, y para otros aún más atrás, con la gran masacre indígena campesina de 1932 que sentó los cimientos de una dictadura militar multifacética a lo largo de seis décadas.

Para 2002, mucha de esa esperanza había desaparecido, la dulzura de aquel momento se había vuelto agría en 10 años. Dos terremotos, en enero y febrero de 2001, abrieron las vísceras de un país en descomposición. Trece años después, Francisco Flores, el presidente de aquel momento, es requerido por haber malversado USD\$15 millones en concepto de donaciones para esa emergencia¹. En diciembre del 2000, había sido aprobada la dolarización de la economía y todos los intentos para revertir una medida inconsulta también fueron sepultados por los terremotos. Cientos de salvadoreños y salvadoreñas abandonaban (y abandonan aún) el país hacia los Estados Unidos, optando por la migración indocumentada y superando los niveles de movilidad que se registraron durante la guerra.

Una nueva guerra se libraba en las calles —y aún se libra quizás más cruenta—, en los barrios, en las zonas marginales, en las cárceles, esta vez no entre bandos declarados, sino entre las pandillas, el crimen organizado, la policía, el ejército, y como siempre y por supuesto, en medio de la población civil de más bajos recursos. Las grandes urbanizaciones edificadas en los años 80's y 90's para la creciente población urbana de bajos ingresos, donde se puede oír respirar al vecino porque fueron construidas sin importar las condiciones de hacinamiento de sus habitantes, esas eran las más afectadas por la nueva espiral de violencia.

Diez años después de la firma, en 2002, la ONU declaró el cumplimiento a cabalidad de los Acuerdos de Paz, frente a los reclamos del FMLN y de muchas organizaciones sindicales y populares. El escenario parecía indicar que, pese al evidente

1 El 30/05/14, la Fiscalía General de la República, solicitó la captura del ex presidente Francisco Flores (1999-2004), investigado por el uso indebido de USD 15 millones en donaciones provenientes de Taiwan que nunca ingresaron a las arcas del Estado y que fueron recibidos a título personal por el ex mandatario.

y desesperanzador panorama, así había sido. Todas las nuevas instituciones emanadas del acuerdo estaban funcionando y aquellas que se determinó depurar o reestructurar lo hicieron de una manera medianamente aceptable. Los acuerdos en materia electoral se habían cumplido, no a cabalidad, pero el FMLN tenía diputados en el congreso y gobernaba importantes alcaldías, incluyendo la ciudad capital. La otrora omnipotente Fuerza Armada fue relegada a un papel subordinado al poder civil. Por supuesto, entre 1989 y 2009, ese poder civil fue ejercido por el partido político de la oligarquía, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lo cual hizo más manejable la subordinación de los militares. El poder político había sido otorgado por la oligarquía al ejército para defender sus intereses, allá por el año 1932. Lo que sucedió en los 90's fue una suerte de pedir la devolución de ese poder de una manera honrosa y rentable, garantizando importantes negocios al alto mando castrense. La guerrilla y la Fuerza Armada incorporaron a sus combatientes en programas de transferencia de tierras, educación, nivelación académica y capacitación empresarial y, aunque muchos no tuvieron un efecto permanente o sostenible, brindaron oportunidades de reinserción.

Es claro que el Acuerdo de Paz necesitaba, luego de 1992, un gobierno progresista y un Estado con visión social para reparar las fracturas del país. Quizás no necesariamente de izquierda, pero sí un gobierno que asumiera la pendiente *Concertación Económica y Social*. Sin embargo, las medidas que vinieron después de la firma de la paz fueron, no solo claramente inconsultas, sino que apuntaron a aumentar la marginalización de grandes sectores sociales y a beneficiar a los pequeños sectores de la oligarquía (en particular la oligarquía financiera), que probablemente ya sentía haber concedido mucho en las negociaciones de paz, por lo que consideraban innecesario concertar las medidas económicas y sociales, amparados en la supuesta legitimidad de haber ganado el Ejecutivo en cuatro elecciones presidenciales (1989, 1994, 1999 y 2004).

Volvamos al año 2002: ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó toda la esperanza de una década atrás? Para responder esta pregunta es bueno voltear la vista, no solo a los acuerdos políticos, electorales, institucionales y de derechos humanos. Es importante recordar el reconocimiento explícito que hiciera el presidente Alfredo Cristiani al momento de la firma en Chapultepec, de las “causas económicas y sociales que generaron el conflicto armado”. Esas raíces del conflicto no fueron abordadas adecuadamente por el acuerdo de paz. Salvo el tema agrario, que implicó un programa de transferencia de tierras a combatientes de ambos bandos y “tenedores” civiles de tierras ociosas en las ex zonas conflictivas. El acuerdo de paz dejó el resto al Foro para la Concertación Económica y Social (FCES).

Quienes tenemos la experiencia sindical, de negociar un acuerdo colectivo con los empresarios, sabemos que, una vez vencida la resistencia de sentarse a la mesa y de aceptarnos como la legítima contraparte, los asuntos normativos serán lo menos complicado para establecer acuerdos. Lo difícil empezará cuando abordemos los temas económicos, buscando distribuir entre los trabajadores las ganancias de la unidad de negociación o empresa. Esta dificultad vendrá, no solo a la hora de negociar estos temas, sino también después, aún firmado el acuerdo colectivo, a la hora de implementarlo. Los sindicalistas sabemos que las transgresiones a los acuerdos colectivos en materia económica son los principales conflictos a la hora de la aplicación de las cláusulas ya negociadas.

Parece que esta lógica hizo falta en los Acuerdos de Paz, especialmente en el otro lado de la mesa al de los empresarios que controlaban el gobierno de aquel entonces. En el acuerdo hubo un importante nivel de detalle en todo lo relacionado con temas políticos, electorales, derechos humanos y reforma institucional, pero no se especificó casi nada en materia económica y social, salvo el Foro para la Concertación Económica y Social (FCES).

Eso significó posponer la parte difícil de la negociación, trasladándola a otros negociadores en el futuro. Según el Artículo V de los Acuerdos de Paz: *“La Concertación será un esfuerzo sostenido por fases, teniendo en cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización del conflicto y otros propios de la reconstrucción”*.

Instalado en 1993, luego de múltiples retrasos del gobierno, la historia del FCES fue fugaz. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), principal gremial empresarial y representante de la oligarquía, nunca lo reconoció formalmente y, pese a que la parte de los trabajadores hizo un esfuerzo histórico en presentar, ya desde 1992, su visión de país en la llamada “Agenda Laboral Prioritaria”², esta agenda apenas si fue levemente discutida en el FCES. Las reuniones del FCES fueron “suspendidas temporalmente” en febrero de 1994, argumentando que las elecciones de marzo de ese año politizarían las discusiones. Una vez más, ARENA ganó las presidenciales de 1994 y el FCES nunca fue reabierto. En su lugar se creó el Consejo Superior del Trabajo (CST), una entidad burocrática en la que la ANEP y el gobierno facilitaron la participación de una decena de sindicalistas, la mayoría de ellos provenientes de organizaciones controladas por los mismos empresarios. Así se acabó la concertación. El CST avaló durante más de una década, sin mayor discusión, todas las medidas propuestas por el Ejecutivo. Sin consultas y muchas veces sin siquiera discusión.

En ese momento, cuando en el mundo predominaba la vorágine de la globalización, normada por los paradigmas neoliberales y desmontando sin mucha resistencia todo lo que le contradijera, la oligarquía salvadoreña entendía que no podría cumplir sus expectativas en medio de las balas. Además, en noviembre del 89, durante la ofensiva guerrillera sobre San Salvador, no

2 <http://www.repo.funde.org/645/> Consultado el 1º de mayo 2014.

solo el campo y los barrios populares fueron escenarios de los enfrentamientos armados. Los combates llegaron a las zonas exclusivas de la ciudad, a las propias casas donde residía la élite económica, incluso a dos cuartos de la residencia presidencial en la exclusiva Colonia Escalón, donde el presidente Cristiani había interrumpido ante cámaras, asustado por las explosiones, una conferencia de prensa.

Pero la oligarquía no negoció solo por temor. Lo hizo también, y quizás aún más, por conveniencia a sus intereses de largo plazo. Ellos tenían grandes planes para sus negocios en Centroamérica. Ahora, 22 años después, podemos ver claramente la importancia de las inversiones de la oligarquía salvadoreña en el istmo Centroamericano. También necesitaban retomar el control del aparato estatal que habían delegado a los militares. Su apuesta económica fue transitar del eje de acumulación de capital a partir del agro en el café y la caña de azúcar, a fundar su eje de acumulación en los servicios financieros, las importaciones, el turismo y las industrias livianas de ensamblaje (maquila). El acuerdo de paz puso los cimientos para construir todo esto, garantizando, también, que la post guerra les permitiera desarrollar sus planes de negocios, contando con el Estado como su aliado.

En la parte agraria, la concentración de la tierra, a pesar de ser una de las principales causas del conflicto armado en los años 70's y la base de la insurrección indígena campesina de 1932, la oligarquía ya había cedido a los estadounidenses, quienes durante los 80's impusieron una reforma agraria parcial, destinada a "quitar la bandera de la reforma agraria a los comunistas". Entonces, para cuando fueron negociados los Acuerdos de Paz, la oligarquía había enfrentado la parte más dura (al menos para el estándar de su ideario conservador): aceptar que no serían más los dueños de la hacienda cafetalera de antaño era *tolerable*; dar concesiones en el Programa de Transferencia de Tierras sobre grandes extensiones abandonadas o inutiliza-

das por años era *aceptable*. Sobre todo cuando tenían grandes expectativas en prolongar su señorío, otrora de las haciendas cafetaleras, a las nuevas actividades económicas emergentes a principios de los 90's. Tenían que darse prisa, porque ¡el tiempo vuela! y aún más en tiempos de globalización neoliberal.

Así, podemos enumerar rápidamente cuales fueron las principales políticas económicas en los años 90's, algunas de las cuales continúan hasta la actualidad:

1990-1994 *Saneamiento de la Banca (absorción de las deudas por el Estado) y posterior privatización de la misma*. Esta fue la prioridad de la oligarquía salvadoreña. La forma en que se distribuyó la banca estatal, poniéndola en manos de la inversión privada, sigue siendo la clave hoy en día para comprender la conformación de los grupos económicos hegemónicos.

1992-2007 *Promoción de los abusos laborales a las zonas francas y recintos fiscales mediante la eliminación de impuestos y tolerancia*. La base de la atracción de inversiones se fundamentó en la industria liviana de ensamblaje (maquilas textiles principalmente), ampliada en 2007 a los llamados Servicios Internacionales (*call centers*, turismo y logística relacionada al comercio internacional).

1990-2014 *Liberalización del comercio exterior*. Eliminación de todas las trabas estatales a esta actividad, las cuales habían sido impuestas por el gobierno demócratacristiano contrainsurgente, apoyado por los estadounidenses en los años ochenta. Se eliminaron los controles sobre la exportación de café y azúcar, entre otros bienes agrícolas. Lo más importante de este período fue la promoción de las importaciones de productos terminados (con lo que se dio fin a la política de industrialización de las décadas de los cincuenta y sesenta). Se facilitó la exportación de las industrias de ensamblaje y se avanzó en la liberalización de bienes, inversiones y patentes. Estas medidas económicas y legales abarcan desde el desmantelamiento del aparato jurídico de los años ochenta, hasta la firma de los Tra-

tados de Libre Comercio (principalmente el firmado con México en el año 2000; con Estados Unidos, en 2004; y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en 2013).

1990-2007 *Flexibilización del mercado de trabajo*. Planteado como una prioridad por el gobierno de Alfredo Cristiani en 1989, las medidas implicaron:

- * Desmantelamiento del sindicalismo en el sector estatal, el cual en la década de los ochenta había crecido de manera importante bajo la modalidad de “asociaciones”, debido en gran parte a que no estaban permitidos legalmente los sindicatos en el sector público.

- * Confrontación frontal, llegando a matices violentos, contra el movimiento sindical, dejando, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1991, un saldo de “87 asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales, 971 capturas y detenciones de sindicalistas y trabajadores y 56 violaciones a sedes sindicales”³.

- * Reformas al Código de Trabajo en 1994, aparentemente promovidas en concordancia con los principios de la OIT, aunque en la práctica fomentaban la división y atomización del movimiento sindical en el sector privado, estableciendo requisitos inalcanzables para la negociación colectiva y limitando la libertad de asociación en el aparato estatal (situación que logró vencerse hasta el año 2007).

- * Masivos programas de “retiro voluntario”, eliminando 50 mil plazas de trabajo en 1995, como parte de la estrategia de reducción del aparato estatal. A partir de entonces se crearon plazas eventuales por contrato y no plazas por el régimen de servicio civil, suprimiendo el derecho a la estabilidad laboral a los trabajadores.

3 <http://white.oit.org.pe/sindi/casos/slv/slv17.html> Consultado el 1º de Mayo de 2014.

* Congelamiento de los salarios mínimos para contener la demanda. Si se realiza una comparación de salarios contra inflación (deflactación en términos económicos), entre 1989 y 2009 los salarios mínimos reales cayeron a menos de su capacidad adquisitiva del año 1988. Esta medida, sustentada en las recomendaciones de Fusades (el tanque de pensamiento de la oligarquía) fue considerada parte vital de la *flexibilización* laboral durante el gobierno del presidente Alfredo Cristiani.

* Desmantelamiento del sindicalismo y la negociación colectiva en todas las empresas privatizadas en los años noventa (sector financiero, pensiones, telecomunicaciones, puertos, entre otros), así como en la negociación colectiva en la industria manufacturera y del sector privado (industria del alimento, cemento, zapatos, industria manufacturera y similares).

* Desincentivo a nuevos Contratos Colectivos (no se registraron nuevos contratos colectivos en el sector privado entre 1989 y 2009).

Privatización de los servicios esenciales: telecomunicaciones, electricidad, puertos y fondos de pensiones. En todos los casos, se favoreció la entrega de las empresas estatales a empresas multinacionales y se negoció la participación de los grupos oligárquicos salvadoreños en las nuevas entidades privadas.

Finalmente, la dolarización, impuesta en el año 2000, entregó a la banca ya privatizada en manos de la oligarquía las reservas internacionales estatales de divisas, hecho que les permitió a estos grupos negociar en condiciones altamente favorables la venta de los bancos salvadoreños a multinacionales financieras entre 2004 y 2009 (CITI Bank, Scotiabank, Bancolombia, HSBC luego Davivienda).

El análisis de lo sucedido en el quinquenio 2009-2013, con el llamado “Gobierno del Cambio” de Mauricio Funes y el FMLN, es material para un razonamiento aparte. Se debe analizar cuáles

de las dinámicas económicas y sociales fueron una continuidad de los 20 años de gobiernos de ARENA (1989-2009) y en cuáles hubo rupturas importantes con el pasado. Entre ambas realidades, ruptura o continuidad, blanco o negro, hay una escala de distintas tonalidades de grises y una variedad de explicaciones que debemos buscar, tanto en la fractura de la derecha política (entre la oligarquía a ultranza y la “nueva derecha”), así como en la acumulación de fuerzas de las organizaciones progresistas, populares y sindicales, para empujar y/o apoyar los cambios. Las explicaciones de lo sucedido no únicamente están en la voluntad política de los funcionarios, como algunos pretenden.

Sin embargo, es el tema de la *Concertación Económica y Social*, la gran deuda de los acuerdos de paz y aquello en lo que, lamentablemente, el Gobierno de Mauricio Funes no logró avanzar, ni aún con el fallido Concejo Económico y Social (CES). Es importante recordar al nuevo gobierno del FMLN que para atender problemas como la desbordante violencia social, donde pandillas y crimen organizado han encontrado un terreno fértil para florecer, hay que atacar las “*causas estructurales que dieron origen al conflicto armado*”. Esas causas, por trillado que parezca, son la marginalidad social de grandes sectores de la sociedad, la falta de empleo, la precariedad de los mismos, la falta de una educación suficiente y de calidad, en fin... la llamada injusta distribución de la riqueza. Aún hoy en El Salvador debemos ir a las raíces de la violencia, a sus causas sociales y económicas más profundas y estructurales.

Gilberto García es salvadoreño, miembro y fundador de la Asociación Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL, organizador y asesor sindical salvadoreño desde 1995.

“Habrá que esperar un tiempo más”

Las limitaciones y los principales desafíos del FMLN en el gobierno

Entrevista a Rafael Guidos Vejar

Por Lucrecia Molinari

Doctor en Sociología por el Colegio de México, Rafael Guidos Vejar es autor de numerosas obras sociológicas y también relacionadas con la política y la economía salvadoreña. Fue coordinador e investigador de importantes proyectos académicos en México y El Salvador. Integró instituciones como FLACSO El Salvador, FLACSO México y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en distintos puestos, y se desempeñó como asesor y consultor de fundaciones, organismos internacionales y organismos gubernamentales a nivel local. En tanto militante contra la represión en El Salvador, integró el Frente Democrático Revolucionario (FDR), organización que apoyó al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en el exterior e interior del país. Interesado en el desarrollo de movimientos sociales, en esta entrevista revela una mirada crítica del FMLN, especialmente de sus dinámicas internas, que se resiste a considerar plenamente democráticas.

Los antecedentes del escenario político actual

- *¿Qué significó la llegada del FMLN a la presidencia?*

El significado más evidente que tiene la llegada de estos dos últimos gobiernos de izquierda o de centroizquierda, como quieran llamarlo, es que el ciclo de la derecha se terminó en El Salvador. Y no estoy hablando de la derecha de los 20 años antes del gobierno de Mauricio Funes, sino mucho antes, desde los años 30. En ese momento surge una forma nueva de gobierno en el país cuyo eje eran los militares. Esa alianza estaba compuesta además por los propietarios de las grandes tierras donde se cultivaba el café, por los exportadores de café -que era un grupo muy pequeño pero muy fuerte-. Había también un elemento presente que es muy importante: la presencia norteamericana en el país.

Las dos elecciones últimas lo que están planteando es la imposibilidad de la derecha de recuperar la capacidad de alianzas entre ellos. La alianza que describí comenzó a tener problemas en 1979. El golpe de Estado de ese año es el resultado de varias brechas. En primer lugar, algunos grupos de esa oligarquía, los grupos más modernizantes, rompen con los militares. Los militares comienzan a quedarse solos dentro del Estado. Ese grupo fuerte y modernizante de la oligarquía, que quizás era el mas fuerte económicamente, comienza a globalizarse ya en esa época. Los militares se quedan con grupos agro exportadores pero que ya estaban perdiendo mucha fuerza dado que se habían especializado demasiado en la exportación del café. Esa actividad ya presentaba bastantes dificultades, no sólo por razones económicas si no también políticas: dejó de ser el lugar donde se producía el poder. Los militares mismos tuvieron una fuerte división el mismo año, 1979.

En ese período, la alianza se hizo cada vez más débil. Y coincide con una explosión de las manifestaciones populares. Se da espe-

cialmente una movilización de campesinos que habían tratado de diversificar las formas asociativas de la producción, intentos en los que habían sido acompañados por la iglesia. La iglesia, desde los años 50 hasta la década de los 70, trata de crear este nuevo tipo de asociaciones campesinas para mejorar la situación rural que era de las más afectadas por la crisis. El sector campesino estaba muy controlado por los militares y era muy difícil acercársele para cualquier otro grupo social. También a nivel urbano se da una creciente lucha sindical que dura toda la década de los 70 hasta finales de los 80; hubo una explosión de las manifestaciones obrero-urbanas que atrajeron fuertes represiones. Todo esto lleva a plantear como solución la vía armada para tratar de buscar nuevas formas de acceder al poder en el país.

Asimismo, durante la década de los 70 comienza una discusión muy profunda en Centroamérica. Creo que es la época en que tuvo lugar uno de los debates públicos más profundos sobre la forma de cambio de gobierno en la región. Y naturalmente comienzan a surgir ciertas expresiones relacionadas con esa discusión: Guatemala tenía ya una expresión fuerte en la cuestión de la guerrilla, aunque ésta no pudo identificarse con las necesidades ni ganar la confianza de la población más marginada: los grupos étnicos.

En El Salvador también fue una discusión extraordinaria entre distintos y emergentes grupos armados contra el Partido Comunista de la época que sostenía que la lucha vía las elecciones era la más efectiva para el país. Era la línea moscovita de la coexistencia pacífica. Y, naturalmente, a partir de la revolución cubana aquí se plantea la búsqueda del poder por la vía de la revolución armada.

En la década de los 70 El Salvador era una sociedad muy dividida. Los grupos empresariales y los grupos militares estaban divididos. La sociedad rural muy dividida y con muchos conflictos, especialmente los causados por la oligarquía, que mantenía una estructura militar para evitar que campesinos

y obreros agrícolas lucharan por mejores salarios y/o prestaciones sociales. Pero se da una formación extraordinaria en la mentalidad y la acción de estos grupos campesinos ligados a la iglesia católica, y ello resulta en un clima de efervescencia revolucionaria. La búsqueda de nuevas formas de gobierno vía la lucha armada se impone. El mismo Partido Comunista después de casi una década de estar en contra de la lucha armada acepta integrarse y logra darse una unidad de las fuerzas revolucionarias. Todas ellas se instalan en territorios donde el Estado era muy débil, lugares que el Estado no podía controlar en su totalidad. Zonas de las que, poco a poco, los grupos revolucionarios fueron adueñándose y en las que, además, crearon formas de supervivencia bastante importantes. Es en este momento donde comienza a fortalecerse ese grupo revolucionario, y a la par la sociedad civil comienza a tornarse cada vez más débil. Y a la derecha comienza a dificultársele darle solidez a una alianza que permita mantener las formas anteriores de gobierno.

Y aquí sucede algo muy interesante con respecto a los movimientos sociales —y cuando hablo de movimientos sociales hablo de aquellos movimientos que no son Estado y que no tienen vinculación con los partidos políticos—, que constituyen una organización con iniciativa civil y una expresión real de las necesidades de los grupos sociales. En esta época surge la expresión más clara de los movimientos sociales así definidos. Estos se vincularon posteriormente a los grupos revolucionarios y se convirtieron en un movimiento político, revolucionario. Los movimientos terminan incorporándose a ese ejército popular que se crea en los primeros meses de la década de los 80. La fuerza civil y social de izquierda se militariza. Eso fortalece naturalmente al ejército popular pero debilita la sociedad civil, que hasta hoy no se ha reconstruido. No contamos aún con movimientos sociales como los que hubo en aquella

época y eso, para mí, es uno de los elementos que explica lo que está sucediendo.

- *¿A qué aspectos de lo que está sucediendo se refiere?*

Me refiero a las formas de dirección política que hay tanto en la derecha como en la izquierda, que no incorporan ningún tipo de movilización civil y popular “desde abajo”. Todo lo estamos haciendo “desde arriba”. Lo he planteado en diversos ámbitos y no siempre acuerdan conmigo. Pero el problema es ese, y retrocedo un poquito para retomar la idea. La cuestión fue que en los 80, en los primeros 4 años, esa debilidad de la sociedad civil no se solucionaba, sino que cada vez se agudizaba más. El movimiento revolucionario cada vez era más fuerte. Los Estados Unidos, entonces, inician, crean, un proceso de recuperación social y política de El Salvador. ¿En qué sentido? En esa época tiene como estrategia unir grupos y partidos políticos que estaban divididos, desmovilizados y dispersos. Crea grupos de partidos políticos para rearmar la institucionalidad del sistema político. Depositán su confianza en la Democracia Cristiana, un partido de oposición que había sido muy importante a inicios de los 70 que, aunque ya había perdido mucho peso político, aún contaba con la simpatía popular. En ese entonces EUA no acepta a ARENA, partido empresarial, formado también con agroexportadores, que comenzaba a surgir en esa época. Desde ahí EUA se fortalece para reestructurar el país. Al crecer electoralmente, ARENA capta la atención de EUA, pero este estaba decidido por Duarte para esta fase de reorganización democrática. En la contienda electoral entre D'Aubuisson, creador de ARENA, y Duarte [candidato por la Democracia Cristiana], es el primero quien logra la mayoría electoral, pero Estados Unidos influye en el proceso y Duarte es declarado ganador.

Inmediatamente, Estados Unidos crea tres grandes reformas

del país y una medida política muy fuerte que preparaba desde antes. La primera de estas reformas es la transformación agraria que implicó una reestructuración rural al limitar la extensión de la propiedad de la tierra. Fue algo inusitado, y fueron justamente Duarte y D'Aubuisson quienes apoyaron a nivel constitucional la medida. La otra gran reforma que impulsa Estados Unidos es la nacionalización de los bancos. Estados Unidos transfiere al Estado los bancos que estaban en manos de los grandes cafetaleros y que se habían "adormecido" al limitar el crédito para la diversificación productiva. La Democracia Cristiana pasa a dirigir, desde el Estado, la banca. Eso también fue un hecho inusitado en El Salvador. Y la tercera reforma importante fue la que nacionaliza el comercio exterior. Todo pasa a manos del Estado. Todas estas medidas debilitan a los grupos cafetaleros tradicionales.

Finalmente, la medida política más importante es la que impulsa la creación de un sistema democrático. Iniciado a mediados de la década de los 80, es el régimen todavía vigente en la actualidad. Se crea durante la guerra misma. Hay votos y balas al mismo tiempo. Es Duarte quien dirige este giro, por lo que es considerado "el padre de la democracia". Duarte llama a todos los partidos ya dinamizados, incluso llama a partidos políticos que habían estado con el FMLN a nivel internacional denunciando lo que pasaba en el país. El FDR estaba formado por el social cristianismo, la social democracia, la Unión Nacionalista y otras formaciones sociales, como las de los intelectuales. Llegan a tener participación en la Asamblea y seguían ligados al Frente. Así se va creando ese sistema político con una ampliación sostenida. ARENA, naturalmente, también participa en el sistema y se perfila como partido dominante. ARENA gana las elecciones y logra controlar y dirigir el sistema electoral. Es a este sistema electoral al que el Frente, después de la firma de los Acuerdos de paz, se incorpora. Claro, los Acuerdos de Paz implican profundas mo-

dificaciones a este sistema político, que no permitía que el Frente se convirtiera en partido político. Con los Acuerdos de Paz, ese sistema se abre, se amplía, y permite la llegada del Frente.

Los gobiernos de ARENA

- *Una vez definido el escenario político con esas características, ¿cómo actuaron ambos partidos? Es decir, ARENA desde la presidencia y el Frente como el principal partido de oposición.*

ARENA era un partido muy diferente a todos los anteriores. Es un partido de empresarios, realmente. Los partidos oficiales anteriores eran partidos dominados por el ejército y en torno al cual se reunían los empresarios, los sindicatos blancos, los campesinos. ARENA amplía sus alianzas con los grupos políticos de la oligarquía que se habían dividido y logra nuclearlos por un largo período. En ARENA están los grandes cafetaleros de aquella época, los nuevos empresarios más fuertes en formación y los militares, con el apoyo creciente de EUA. Su líder, D'Aubuisson, era un eficaz equilibrador de esta diversidad de expresiones políticas. Lo hizo con mucho éxito, desde la perspectiva de derecha, y creó ese partido que llega a asumir el control de la economía, del sistema político y de la visión político cultural de El Salvador. Mantiene y reformula la hegemonía que se había formado en El Salvador en décadas anteriores. Logran formular una nueva hegemonía. Con la llegada de Funes y del Frente en el 2009, la crisis de representación, es decir la crisis de la hegemonía de derecha, muestra dimensiones profundas. Las diferencias entre las derechas han sido importantes casi desde el propio nacimiento del partido ARENA, las brechas lo graban discutirse y cerrarse vía pactos duraderos. Pero en el 2009 la brecha es ya demasiado grande y no pueden controlarla

frente a la oposición cada vez más fuerte del FMLN.

- *¿Qué similitudes existen entre ARENA y la alianza de derecha vigente entre los 30 y los 70? ¿Puede pensarse que ambas fueron habilitadas por el surgimiento de un enemigo interno aglutinador? Es decir, la sublevación a inicios de los 30 y el surgimiento de las guerrillas en los 70.*

Hay una utilización del enemigo común, sí, pero ARENA no logra una alianza sólida como la anterior porque las luchas internas eran mucho más fuertes. Es decir, en los 30 todos los grupos cafetaleros eran muy fuertes. Ahí realmente el grupo opositor de la época fueron los indígenas —campesinos en términos económicos—, que se vieron afectados por la crisis mundial. Pero en las últimas décadas el café fue perdiendo importancia económica en el país y los grupos cafetaleros se debilitaron muchísimo con la reforma agraria, la nacionalización de los bancos y la del comercio exterior. Cuando llega ARENA al poder esas reformas son neutralizadas. Lo único que no logran modificar es la cuestión de la extensión de la tierra. Pero los bancos se privatizan otra vez. Quedan entonces no en manos de los grupos cafetaleros, que eran los dueños anteriores, sino que les quedan a los nuevos grupos empresariales que después los venden al capital globalizado. La cuestión del comercio exterior también se anula. Y vuelven otra vez los grandes exportadores e importadores a tener el control y el beneficio del sistema. En la historia del partido ARENA muchas veces se dieron discusiones muy profundas que llevaron al rompimiento de grupos. Por ejemplo, en la época de Francisco Flores los “fundadores” llegan a abandonar ARENA y formar nuevos partidos fallidos, lo que los reimpulsa a regresar. Hay una cantidad de luchas internas que no logran ser superadas. En esta última elección los “fundadores”, los viejos agro-exportadores, apuntaron contra los grupos empresariales globalizados, contra los cuales han

peleado durante muchos años. Se les llama G5, G20, lo máximo dirigentes de ARENA, los que dirigieron las últimas elecciones y los que no logran construir una hegemonía interna a su partido ni sanar heridas entre los grupos oligárquicos.

- *Usted no considera que esa alianza sea duradera...*

No, no creo. Porque ya no puede darse como algunos de ellos quisieran. La diferencia que hay entre los grupos nuevos, entre ese G5 y los otros grupos, sean agro exportadores o empresarios de ANEP, es gigantesca. Los primeros son globalizados totalmente y los segundos todavía no se globalizan, porque aunque tengan intereses en la importación, no tienen la capacidad de competir a nivel globalizado. Los grupos globalizados no son ya exclusivamente de origen nacional, son grupos que se han aliado a grupos de todo el mundo. Ellos son tremendamente inteligentes. Se mantienen en El Salvador, porque la estructura económica no se ha tocado, es la anterior todavía, y mantienen los beneficios nacionales de este sistema tan desigual e injusto y, a la vez, con las bondades y los beneficios de lo globalizado.

Nuevos escenarios

- *Esta alianza parece más compleja, por lo heterogénea, en relación a la vigente en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, electoralmente, logró seguir siendo bastante efectiva. Los resultados de la segunda vuelta en las últimas elecciones para algunos refutaron la idea de que la expresión política de esa alianza de derecha se estaba desarticulando definitivamente...*

Sí, eso se decía, pero no. Porque en realidad el problema es otro y se tiene que dirimir en este gobierno. Recuerdo que Alex

Segovia, el anterior secretario técnico de la presidencia, planteó una cuestión muy real: ARENA ha avanzado todos estos años, desde los Acuerdos de paz hasta acá, por una razón: el Frente no ha hecho nada para detener a la derecha, en el sentido de que las instituciones no han cambiado.

El partido político es uno de los instrumentos más importantes de la actualidad para el gobierno. En Argentina esto se manifiesta claramente: los grandes partidos políticos han perdido muchísima credibilidad pero finalmente, son los partidos los que hacen gobierno. En El Salvador hay dos grandes partidos pero ninguno de los dos, hasta el momento, propone cambio alguno. Hay elementos planteados por el Frente que, aunque no tienen todavía un carácter definido y definitivo deben tenerse en cuenta. ¿Qué es lo que hará en relación a los grupos oligárquicos que todavía manejan la estructura económica y con qué grupos sociales y políticos? Sabemos que lo hará desde los sectores populares, que siempre ha sido su fuente principal, y ahora desde ciertos nuevos sectores medios y hasta de sectores cafetaleros o empresarios con dificultades económicas y financieras que se le han acercado y con los que ha tenido vínculos desde el mecanismo de Alba y por los acercamientos durante el reciente proceso electoral. Es una nueva alianza más compleja y exigente. A todo lo cual hay que agregar la relación que desde el gobierno debe mantener con los opositores de derecha, los cuales tienen sus propias demandas.

El Frente enfatiza, en la actualidad, en la “cuestión empresarial” con una “perspectiva social”, de acuerdo con una importante experiencia empresarial de carácter mixto, en donde coinciden estructuras de gobierno local, miembros de partido, capital internacional y diversos sectores sociales. Hay que considerar los beneficios sociales distribuidos entre sectores de la población de diversos municipios. Ya no es solo una oposición desde la perspectiva política frente a los empresarios tradicio-

nales, sino que hay una oposición económica. Esto es novedoso y aún no se conocen las bases ideológicas y políticas para una estrategia de este tipo, aunque se conocen experiencias similares en otros países latinoamericanos liderados por la izquierda.

Algo que es muy evidente es que todas estas propuestas y estrategias se hacen desde “arriba”. No hay movimientos de masas. Las movilizaciones se organizan también “desde arriba”. Muchos se preguntan ¿es esto coherente con el pasado? Posiblemente no, pero eso no es lo más importante. Lo esencial de esto es comprender este proceso nuevo y las variaciones que se están introduciendo en la construcción de El Salvador del futuro. No hay duda de que estamos frente a un cambio, ante el cual hay que preguntarse sobre la viabilidad y sostenibilidad del mismo, pero sobre todo sobre su pertinencia para mejorar las situaciones de desigualdad de nuestra sociedad ¿Es viable económica y políticamente hacer un cambio en nuestras sociedades de esa forma? No lo sé, no hago una valoración de si es bueno o es malo, o desde la añoranza. Pero ahí está. Se está dando. Desde la empresa ALBA, por ejemplo, se han hecho una cantidad de experimentos, con muchos de los cuales estoy de acuerdo. Pero no sé si lograremos desprendernos de la lógica del desarrollo del capitalismo de esa forma. Capital y trabajo siguen siendo las dos grandes variables del sistema. ¿Cómo fortalecemos al trabajo con las propuestas actuales y no a las relaciones del capital que siempre actúa para prevalecer. ¿Qué políticas redistributivas y no solo de subsidios se pueden trazar desde esta situación?

Por otra parte, hay cosas que no han cambiado. Usted puede argumentar que ahora hay democracia, que hay elecciones... ¡pero los partidos siguen decidiendo sin importarle la gente! Para mí la democracia es participación. No hay forma de pensar democracia sin participación. Y los dos partidos se manejan demasiado allá en la cúpula. Los candidatos son gente que es

nombrada y no veo grupos populares que propongan tal o cual candidato. Muchos son los mismos de siempre ¿Es eso democracia? ¿Por qué los partidos políticos no logran evitar ese tipo de prácticas no-democráticas?. Un partido democrático es un partido de mucha participación interna, la democracia en su interior le otorga dinamismo, la gente propone, elige, moviliza: “hace” realmente política. Pero aquí sucede que, a través de un proceso que no es claro, se elige tal candidato. Ese candidato llega a ser alcalde, diputado o presidente y la distancia con las bases se ensancha. Su argumento suele ser el siguiente: “Yo represento al pueblo, yo represento a todos. No le voy a hacer caso a usted, ni a usted, ni a usted... porque yo represento a todos”. Ese es un razonamiento tramposo...

- Si, según su planteo, la dinámica partidaria iguala a los dos partidos más importantes, ¿qué los diferencia? Porque evidentemente mantienen una identidad definida y diferenciada, y discursos y votantes bien definidos y diferenciados...

En cuanto a lo que pueden lograr los gobiernos del Frente, muchos plantean el crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo, la seguridad, la reforma fiscal... Sí, pero eso la izquierda o la derecha tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que específicamente desde la izquierda se está proponiendo? No lo veo, pero habrá que esperar un tiempo más. No estoy en contra de lo que se está haciendo. Es lo que se puede hacer y lo entiendo. Eso nos llevará a llamar a las cosas por su nombre. No podemos hablar de socialismo, hablemos de capitalismo con “responsabilidad social empresarial” o con rostro humano, si es que puede pensarse en algo como eso. Pero hablemoslo, pues, muy claramente ¿Hacia dónde vamos realmente con eso? Esta problemática no es exclusiva de El Salva-

dor, sino que está sucediendo en otros países latinoamericanos cuyos gobiernos son descritos como con “tintes socialistas”, pero hasta en Venezuela se habla ya de un “giro pragmático” y de un relevamiento de los “radicales”. Todo esto debe impulsar el debate público en nuestro país sobre dónde estamos y hacia adónde vamos. Aun no hay elementos para que podamos dar respuestas a todos estos problemas.

- *¿Considera usted que nuevas generaciones o ciertos movimientos sociales puedan inyectar una nueva dinámica al Frente?*

Creo que eso habrá de esperar un ratito... Hay grandes necesidades postergadas en los sectores medios y populares, pero los movimientos sociales no aparecen con suficiente fuerza. Por un lado la emigración le resta fortaleza a los movimientos posibles y, por otro, hay ciertos logros sociales hechos desde el gobierno de Funes, que aunque no tienen una dimensión suficiente plantean que ¡Si se puede! desde el gobierno mejorar la vida de los más afectados por la desigualdad, ante lo cual éstos deciden esperar. Veo a los grandes postergados de los Acuerdos de Paz como los más inmediatamente posibles, es decir, los ex combatientes, tanto de las Fuerzas Armadas como de la guerrilla. Pero creo que va a tener que esperar un ratito... Primero el nuevo gobierno tendrá que fortalecer andamiajes muy urgentes y de emergencia.

Lucrecia Molinari es socióloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), becaria doctoral por CONICET - Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional Tres de Febrero (CEG - UNTREF). Investiga sobre el movimiento sindical salvadoreño durante la década de 1960, las Fuerzas Armadas y la política contrainsurgente en el período previo a la Guerra Civil salvadoreña. Email de contacto: lucrecia.molinari@gmail.com

De la hegemonía conservadora al debut de la izquierda: Implicaciones y retos para una sociedad más igualitaria en El Salvador

Irene Lungo Rodríguez

La presente nota busca reflexionar sobre algunas implicaciones que han tenido los cambios políticos recientes en la sociedad salvadoreña en las desigualdades, así como plantear algunos retos que enfrenta el país sobre el particular. Concretamente, me interesa discutir sobre posibles transformaciones en la distribución de la riqueza y de espacios de poder en el marco de la democratización del sistema político, así como los avances y desafíos planteados por la llegada de un partido de izquierda al Ejecutivo. Me gustaría apuntar que la mirada que presento se enfoca en las desigualdades estructurales en El Salvador¹; es decir, en las diferencias y jerarquías sociales que se generan a partir de los procesos de acumulación de capital y que se moldean a través de procesos políticos y sociales. En la configuración de dichas diferencias sociales intervienen disputas atravesadas por rela-

¹ Obsérvese que no me estoy centrando en el tema de pobreza, sino de desigualdades. Esto persigue abordar la problemática incorporando la interrelación existente entre riqueza y pobreza, así como evidenciar que en las desigualdades intervienen procesos de acumulación, desposesión, apropiación o explotación —aun cuando el tema del origen de desigualdades exceda los límites de la presente nota.

ciones de poder, de ahí que en esta nota busque reivindicar la centralidad de lo político.

Un rápido itinerario por la historia salvadoreña evidencia una sociedad profundamente desigual y empobrecida, mientras revela un sistema político que ha tendido a garantizar desigualdades, privilegios y explotación. En el fondo, el carácter desigual de la sociedad salvadoreña se ha asociado a la conjunción de una matriz productiva excluyente con un sistema político autoritario². Veamos brevemente: con la modernización capitalista, impulsada hacia la mitad del siglo pasado, se consolidó un modelo de acumulación oligárquico que propició un proceso progresivo de concentración de capital alrededor de un reducido número de familias. Este proceso se acompañó por la preeminencia de políticas estatales orientadas a garantizar un patrón distributivo jerárquico y un sistema político cerrado. En este escenario, las políticas salvadoreñas de protección estatal fueron aún más débiles y excluyentes que en otros países latinoamericanos en los que se ensayaron procesos más exitosos de Estado de bienestar, tal como en los casos argentino, uruguayo o costarricense.

Con el impulso del capitalismo neoliberal cristaliza el carácter desigual y se generan políticas destinadas a garantizar ejes de acumulación excluyentes en la sociedad salvadoreña. Con la implementación de las políticas de ajuste estructural, inspiradas en el Consenso de Washington, los procesos de privatización y redimensionamiento del Estado permitieron nuevas formas de acumulación, mientras se intentó dismantelar la escueta institucionalidad distributiva generada en el período previo. En este escenario, se han incrementado los niveles de concentración del ingreso en una elite regionalizada, persistiendo altos niveles de exclusión y pobreza. Con relación a los procesos políticos, cabe

2 Una serie de estudios revelan cómo se fue desarrollando una sociedad empobrecida a partir de un modelo de acumulación agroexportador y de la conformación de un estado oligárquico (Menjivar, 1980; Dada, 1983; Torres Rivas, 1989; Bulmer Thomas, 2011).

subrayar que hasta finales del siglo pasado el régimen político salvadoreño tuvo un carácter preponderantemente autoritario y excluyente. La transición desde ese régimen cerrado hacia uno democrático ha sido convulsa y conllevó costos sociales altísimos, entre ellos una cruenta guerra civil que tuvo lugar entre 1981 y 1992. La transición a la democracia cristalizó a partir de los Acuerdos de Paz signados en 1992³.

A partir de entonces, la disputa por el poder político en El Salvador ha tenido lugar en procesos electorales competitivos en los que sobresalen dos partidos políticos mayoritarios: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De un lado, ARENA constituye la representación política de la élite empresarial y de los sectores conservadores de la sociedad salvadoreña. Este partido político tuvo el control del Ejecutivo entre 1989 y 2009, lo cual dio empuje a la implementación del ajuste y permitió la consolidación de un proyecto de estado empresarial y antiestatista. Del otro lado, el FMLN, cuyo origen se encuentra en la estructura coordinadora de las cinco organizaciones insurgentes de los ochenta, comenzó a jugar con las cartas de la democracia representativa a partir de 1994 y no cuestionó más el orden capitalista⁴. A continuación sintetizaremos cómo ha sido abordado el tema distributivo en el escenario democrático.

LA HEGEMONÍA CONSERVADORA: CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y EL PODER

En El Salvador han predominado los regímenes políticos de tinte conservador, primero oligárquico y luego neoliberal. Du-

3 La discusión respecto de cuando inició la transición a la democracia en El Salvador no está zanjada. Hay autores que datan ese momento fundacional en 1983, momento en que una Asamblea Constituyente introdujo reformas a la Constitución vigente (Nota de la/os Editora/es).

4 La transición obligó al FMLN a replantear su estructura organizativa, su planteamiento ideológico y su relación con los movimientos sociales, en un contexto signado por el fin de la guerra fría y el auge del neoliberalismo (Martín, 2006: 92).

rante la mayor parte del siglo pasado, el sistema político estuvo protagonizado por terratenientes y militares que compartían un punto en común: promover la concentración de la riqueza y el poder en una reducida élite, en detrimento de las grandes mayorías de la población. Las dos décadas posteriores a los Acuerdos de Paz y a la democratización política siguieron la misma tendencia. Durante la última década del siglo pasado y la primera del presente se construyó un Estado pro empresarial, liderado por el partido ARENA. Inscritas en este marco, las políticas estatales apostaron a favorecer el crecimiento macroeconómico antes que a asumir un compromiso con el bienestar social o, menos aún, con la distribución de la riqueza generada en El Salvador. Además, el paquete de ajuste estructural implementado en el país⁵ promovió una reforma “antiestatista” que tendió a recortar las funciones de bienestar social que tenía el Estado.

Las políticas de atención a la pobreza comienzan a implementarse partir de los años noventa en el Salvador, como complemento de las políticas de ajuste estructural. Así, los primeros gobiernos de ARENA privilegiaron dos líneas centrales de acción: una de compensación social y otra de programas sociales sectoriales que procuraban la reducción de la pobreza y la formación de capital humano (Menjivar y Trejo, 1992: 106). Un punto de inflexión se lleva a cabo durante la administración del presidente Antonio Saca (2004-2009), cuando se formula un programa de atención a la pobreza de mayor alcance. Así comienzan los programas de transferencias condicionadas, hoy populares en América Latina. Resulta fundamental destacar que los programas de asistencia social se comienzan a promover por el Banco Mundial en el marco del ajuste estructural como mecanismo de reducción de su costo social. Es decir, lo que hoy se

5 Al igual que en el resto de Latinoamérica el ajuste estructural tuvo dos componentes fundamentales: a) abrir espacios de acumulación a la elite empresarial mediante privatización y liberalización comercial y, b) reducir el tamaño del estado.

conoce como “política social” nace subordinada al nuevo modelo de acumulación y se encuentra dirigida exclusivamente a atender de manera asistencial a aquellos sectores que no pueden incorporarse a los “beneficios” del ajuste.

EL GIRO HACIA LA IZQUIERDA: POLÍTICA SOCIAL Y ASISTENCIALISMO / AVANCES Y RETOS

Un espíritu conservador de larga data constituye el carácter esencial de las políticas estatales cuando Mauricio Funes y su gabinete llegan al Ejecutivo, en el año 2009. En el Estado salvadoreño se dibujaba un diseño institucional pro empresarial, antiestatista y anti-distributivo que se reflejó, entre otros elementos, en un sistema tributario regresivo —que carga la responsabilidad a de los ingresos del Estado a los sectores con menos recursos—, en exiguas políticas sociales y en políticas y tratados de comercio internacional orientados a favorecer la acumulación de capital, entre otros componentes. Este constituyó el punto de partida, en términos distributivos, para la izquierda en el poder.

Vale la pena señalar dos elementos relacionados con avances en el papel distributivo del Estado durante el gobierno de Funes: a) la apertura de espacios de participación política a actores tradicionalmente excluidos y, b) la implementación de un programa más ambicioso de política social. En primer lugar, con la llegada del gobierno de Funes la elite económica dejó de tener representación directa de sus intereses en el Ejecutivo, mientras otros actores pudieron negociar espacios de participación política y negociación. Destaca, al respecto, el caso de los veteranos y veteranas históricos del FMLN, entre otros. Se trata de un proceso de apertura que, no obstante, no cuestionó las fuentes de riqueza de la élite salvadoreña⁶.

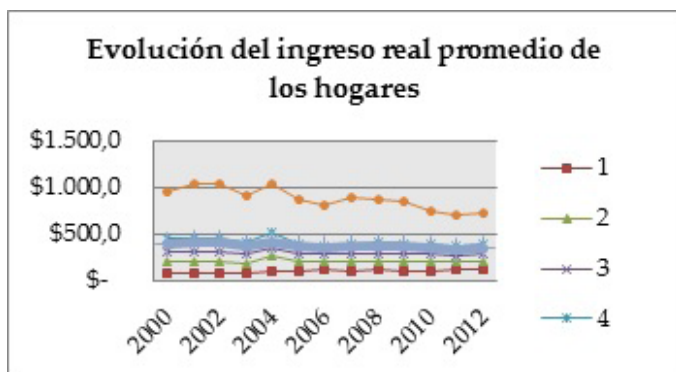
6 Cabe señalar que la Reforma Fiscal constituye uno de las principales deudas del gobierno de Funes. No se sabe aún si será retomado por el actual gobierno de Sánchez Cerén. Al momento continua primando un sistema tributario profunda-

En segundo lugar, el primer gobierno de izquierda amplió la cobertura de los programas sociales heredados e implementó nuevos programas de protección social. Si comparamos la política social de los gobiernos de ARENA con la implementada durante la administración Funes, existe una importante brecha, no solo respecto de recursos /beneficiarios, sino también en tanto articulación de estrategias sectoriales. El pilar de la política social fue el denominado “Sistema de Protección Social Universal” que, básicamente, consistió en la ampliación en cobertura de los programas ya existentes de transferencia condicionada. Ello se complementó con subsidios para fomentar la educación, medidas de compensación para víctimas de la guerra y para adultos mayores y el inicio de una importante Reforma a la Salud⁷.

Es difícil medir el impacto específico de estos programas en las desigualdades estructurales. Sin embargo, los datos oficiales sugieren que se ha dado una leve disminución de brechas en la desigualdad de ingresos⁸. Luego del primer quinquenio en manos de una alianza de izquierda, llama la atención que los ingresos de los segmentos ubicados en el quintil con más recursos han caído, fenómeno que no han experimentado los cuatro quintiles que tienen menor acceso a recursos y que constituyen el 80% de la población. Esta tendencia podría sugerir que durante la primera administración de izquierda se asistió a una ligera disminución en las brechas de desigualdad, al menos medidas en ingresos.

mente regresivo que beneficia a la elite económica nacional y transnacional.

- 7 La principal estrategia consistió en la articulación entre: Sistema de Protección Social Universal, Reforma de Salud, Plan Social Educativo Vamos a la Escuela y el Reconocimiento y reparación de derechos de grupos afectados por el conflicto (Secretaría Técnica de la Presidencia, 2014).
- 8 Es difícil identificar el impacto de cinco años sobre desigualdades estructurales de larga data, que tienden a mantenerse. Además, las desigualdades estructurales no se pueden reducir a la medición de pobreza o de la distribución de ingresos reportados por las Encuestas de Hogar. Sin embargo, esta información es la única disponible, por lo cual servirá de base para analizar tendencias.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

No obstante, hay que tener el cuidado de no emitir interpretaciones triunfalistas sobre la tendencia apuntada. Si bien los datos sugieren que ha disminuido la distancia entre el quintil más rico y el resto de la sociedad, las políticas sociales no han incidido en los mecanismos de producción de las desigualdades: acumulación, apropiación o explotación de los trabajadores, entre otros. Esto se debe al carácter mismo de la política social implementada por el gobierno de Funes, concebida como medidas compensatorias y asistencialistas frente a los desequilibrios generados por el neoliberalismo. Es decir, no cuestionan la naturaleza misma de las desigualdades y las jerarquías sociales.

Por otra parte, las últimas elecciones reflejan que ha mercedado la injerencia directa por parte de la élite en los procesos políticos locales, respecto del pasado. Ahora un partido de izquierda, originado en las organizaciones insurgentes de los ochenta, preside el Ejecutivo. Es decir, el poder político se ha desconcentrado. La sociedad salvadoreña tiene un rostro más complejo en los albores del Siglo XXI. Sin embargo, hay algo que no parece cambiar a lo largo del tiempo: la persistencia tanto de

la alta concentración de la riqueza como de la pobreza estructural y ahí se encuentra uno de los retos más grandes del FMLN como partido político de izquierda.

Irene Lungo Rodríguez es académica salvadoreña. Actualmente cursa el Doctorado en Sociología del Colegio de México (COLMEX). Magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), Licenciada en Antropología por la Universidad San Carlos de Guatemala. Email de contacto: irene.lungo@gmail.com

El FMLN, el movimiento popular y la “marcha por las instituciones”

Kristina Pirker

Organizaciones clandestinas luchando como fuerza social en la década de 1970; Ejército popular en alianza con los sectores democráticos de la sociedad salvadoreña en la década de 1980, partido de oposición en contra del proyecto neoliberal de la derecha en la década de 1990, y primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña a partir de 2009. De acuerdo a esta narrativa partidista, expresada también por Sánchez Cerén, la legitimidad de fungir como representantes de los intereses populares y democráticos, se construyó porque los cuadros y militantes del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) supieron en cada una de estas etapas “compenetrarse” con el pensamiento y las preocupaciones tanto de la población más desposeída, como de las capas medias progresistas, así como ganar nuevos militantes provenientes de estos sectores (Sánchez Cerén, 2012, 52-53).

Lo que en los relatos partidistas aparece como un proceso lineal que dio como resultado el acceso del FMLN al gobierno, fue en realidad una articulación mucho más compleja entre organizaciones populares de diversa índole y organización partidista que contribuyó a la conformación de “dobles

militancias” (es decir, partidistas y sectoriales). A partir de reconocer esta complejidad, hay que preguntarse de qué manera y hasta qué punto estos vínculos históricos se reflejan e importan en el programa, la agenda y las políticas gubernamentales del FMLN. Este artículo busca dar algunos elementos para responder a esta pregunta.

Revisando la constitución histórica del movimiento revolucionario salvadoreño, en efecto, entre 1975 y 1980, las organizaciones sindicales y campesinas antigubernamentales (junto con la iglesia y la universidad) funcionaron como espacios sociales estratégicos para que los militantes revolucionarios ampliaran la influencia de sus organizaciones por medio de la “lucha por la hegemonía”. Es decir, enfrentándose a través de volantes, periódicos clandestinos y en asambleas con los miembros de organizaciones reformistas y otros grupos y organizaciones político-militares, para reclutar nuevos miembros y ganar espacios en las instancias directivas de las organizaciones legales para determinar sus estrategias políticas. De esta manera, con la consolidación de las estructuras de las organizaciones populares se introdujeron también las diferencias y divisiones políticas de la izquierda armada. La centralidad del movimiento popular antigubernamental como espacio de disputa, pero también de encuentro entre los grupos de la izquierda armada, en un contexto de creciente radicalización política, se expresa no sólo en el protagonismo de los Frentes de Masas como voceros de un proyecto político contrahegemónico, sino también en el hecho de que la Coordinadora Revolucionaria de Masas, fundada en 1980, anticipó la unificación del FMLN.

La ola represiva de 1980 a 1983 obligó a miles de militantes a incorporarse a las estructuras armadas o exiliarse para evitar el secuestro y la muerte. En esta primera mitad de la década de 1980, el FMLN se consolidó y ganó visibilidad como ejército popular, mientras cuadros y militantes civiles intentaron reor-

ganizar las estructuras sindicales y gremiales. De esta manera surgió en 1985 la UNTS (Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños), como una coordinadora multisectorial y antigubernamental conformada para protestar en contra del deterioro de las condiciones de vida de la población y exigir una solución política del conflicto. La UNTS estaba vinculada de manera estrecha aunque clandestina con el aparato político-militar del FMLN.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, los vínculos entre organización partidista y organizaciones populares se debilitaron, sin desaparecer por completo. Por una parte, muchos cuadros de las organizaciones populares se desmovilizaron y/o se incorporaron a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que habían surgido para administrar los recursos de la cooperación internacional y atender las necesidades de grupos sociales específicos (desplazados, repobladores, mujeres, jóvenes, etcétera). A la vez, la inserción del FMLN en la política electoral convirtió a la Asamblea Legislativa en el principal espacio de lucha política y a los procesos electorales en los momentos centrales para probar las correlaciones de fuerza y movilizar las bases sociales de la izquierda.

Desde la perspectiva del partido, el nuevo rol significó la constitución de un aparato partidista legal, la profesionalización de militantes y cuadros provenientes de las organizaciones sociales como funcionarios públicos o asesores de la Asamblea o de gobiernos municipales, así como la orientación de la actividad política de las bases hacia los grupos municipales de base y el apoyo en las jornadas electorales. En consecuencia, organizaciones y movimientos sociales se vaciaron de líderes y cuadros, algunos se distanciaron de la izquierda e incluso se acercaron al sector empresarial o gubernamental, como sucedió con la emblemática federación sindical FENASTRAS (Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños).

A través de distintos mecanismos, el FMLN pretende demostrar su vinculación con la sociedad organizada. Por ejemplo, dentro

de la estructura partidista existe una “Secretaría del Movimiento Social”, a cargo del diputado Santiago Flores (Miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Salud); muchos dirigentes históricos y cuadros medios del partido provienen de las filas de las organizaciones sociales históricas, como Salvador Sánchez Cerén, quien fue sindicalista del gremio magisterial ANDES 21 de Junio antes de ingresar a la lucha clandestina en 1978, o Guillermo Mata, dirigente del Colegio Médico durante las movilizaciones en contra de la privatización del sistema de salud en 2001/2002, compañero de fórmula presidencial de Schafik Handal en las elecciones presidenciales de 2004 y actualmente diputado del FMLN y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea.

La participación de militantes del FMLN en marchas como la del 1ero de Mayo o la conmemoración del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (24 de marzo), las escenificaciones ritualizadas y públicas del encuentro —sobre todo en tiempos de campaña electoral— entre candidatos partidistas y líderes sociales para intercambiar propuestas, demandas y compromisos, refuerza la percepción respecto de la existencia de afinidades electivas e identidades políticas compartidas entre el partido de izquierda y un segmento importante de los sectores populares organizados. Pero también hay un potencial conflictivo en estas articulaciones, expresado hasta el día de hoy en que las alianzas sociales tienden a basarse más en afinidades ideológicas que en intereses sectoriales compartidos. En otras palabras, la cercanía o distancia frente al proyecto político y el gobierno del FMLN se ha constituido en uno de los principales principios de oposición en el campo de la movilización popular.

EXPECTATIVAS Y DESENCUENTROS: ORGANIZACIONES POPULARES Y EL GOBIERNO DEL FMLN

Si bien los tiempos político-electorales terminaron por condicionar la agenda del FMLN, llama la atención que el ascenso

electoral del partido, a partir de las elecciones legislativas de 2003, se vio beneficiado por (y fue consecuencia del) repunte en la movilización popular en el periodo de la posguerra. La lucha en contra de la privatización del sector salud impulsada por los médicos y trabajadores de la salud y la Alianza Ciudadana en contra de la Privatización logró reunir apoyos sociales amplios, como se evidenció en la marcha en contra de la reforma neoliberal que movilizó a unas 200,000 personas en el 2002, en la mayor manifestación ocurrida en El Salvador desde la Marcha de la Unidad en enero de 1980. Los apoyos de la bancada legislativa del FMLN —participar en las marchas de protesta, impulsar un decreto parlamentario que prohibiría la privatización del sistema de salud (pero que fue derogado por ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y otros partidos de derecha y centro-derecha— evidenciaron, sobre todo desde la perspectiva de los sectores sociales organizados, la necesidad de romper el control de ARENA sobre las instancias estatales para impedir el avance del proyecto neoliberal. En otras palabras, el crecimiento electoral del FMLN se debe *no solamente* a la habilidad de la bancada del FMLN de aprovechar políticamente el espacio legislativo o la exitosa gestión administrativa de los gobiernos municipales de izquierda, sino a la actualización de tradiciones políticas, experiencias sociales y redes de lucha en la movilización en contra de las políticas neoliberales.

En este contexto, la planilla presidencial del FMLN en 2004 —compuesta por Schafik Handal y Guillermo Mata— expresó la alianza de clase entre el FMLN y organizaciones y movimientos populares, como una clara contrapropuesta a la alianza oligárquica representada por ARENA. La reorganización del movimiento popular cercano a la izquierda se expresó en la constitución de cinco coordinadoras o bloques sociales que presentaban sus demandas y agenda política a la fórmula Handal-Mata: MPR-12 de Octubre (Movimiento Popular de Resistencia-12 de

Octubre), BPS (Bloque Popular Social), TR (Tendencia Revolucionaria), Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones y MPT (Movimiento Patria para tod@s).

La candidatura de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén en las elecciones de 2009 apostó a una ampliación de las alianzas para atraer no sólo a los “sectores desposeídos y capas medias”, sino también a grupos empresariales marginados por la alianza (neo)oligárquica de ARENA para desplazar a la derecha del poder Ejecutivo y mostrar las capacidades de un gobierno de izquierda para mantener la estabilidad política y socioeconómica. El pragmatismo se expresó también en las principales acciones gubernamentales, inspiradas en un desarrollismo moderado orientado a revitalizar ciertas medidas estatales de regulación, como: otorgar créditos para fomentar sectores productivos nacionales, apoyar al sector campesino para avanzar hacia la soberanía alimentaria y detener las privatizaciones de empresas públicas. Sin embargo, no se planteaba cambiar los pilares fundamentales de la economía y del Estado liberal salvadoreño, expresados en la Constitución liberal de 1983 y en la dolarización de la economía (Pirker, 2010).

Entre los principales avances del gobierno de Funes que afectaron positivamente las condiciones de vida de un segmento importante de la población salvadoreña se encuentra, sin duda, la implementación, ampliación y consolidación, a través de una Ley, de programas sociales, como Comunidades Solidarias o Ciudad Mujer¹, la inclusión de los empleados domésticos en la

1 Comunidades Solidarias en su versión rural y urbana es un programa para canalizar recursos y acciones gubernamentales a municipios prioritarios por su grado de marginalidad y pobreza extrema. Ciudad Mujer ha sido considerado uno de los programas más exitosos del gobierno Funes para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Impulsado por la Secretaría de Inclusión Social, el modelo de atención de Ciudad Mujer consiste en concentrar en un mismo espacio a 14 instituciones públicas que prestan servicios especializados para las mujeres. Los centros operan solamente con personal de mujeres. Durante la administración de Mauricio Funes se abrieron 6 centros Ciudad Mujer. Véase, Gobierno de

prestación de salud y la elevación de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones (Martín, 2014: 360). En el ámbito de las reformas institucionales para garantizar derechos ciudadanos, la administración Funes retomó demandas que habían quedado pendientes desde la Firma de los Acuerdos de Paz, debido a la resistencia del sector empresarial y ARENA, como la instalación de un Consejo Económico y Social coordinado por el Ejecutivo e integrado por representantes de los movimientos populares y gremiales, el sector empresarial y académicos, o la ratificación, en el 2009, de los Convenios 87 y 98 de la OIT, por medio de los cuales se extiende el derecho a la sindicalización a los trabajadores de las instituciones públicas y semiautónomas.

No obstante el avance que significaron estas políticas y reformas para ampliar derechos económicos y sociales (por ejemplo, desde el 2010 la tasa de pobreza extrema disminuyó en 1,6% por año, CEPAL, 2013), no se avanzó en la solución de problemas estructurales como la falta de acceso a trabajo formal o la hostilidad casi generalizada del empresariado frente al sindicalismo. De acuerdo con Gilberto García de la organización CEAL (Centro de Estudios y Apoyo Laboral), el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) salvadoreña sigue laborando en el sector informal y sólo un 7,38% está sindicalizada, primordialmente en el sector público. Asimismo, la negociación colectiva sigue siendo un derecho concentrado en el sector público: sólo un 0,46% de los trabajadores en el sector privado tienen acceso a este derecho (Trucchi, 2014).

En los compromisos de campaña, Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz prometieron continuar y profundizar dichas reformas, sobre todo en relación con las políticas sociales y el combate a la pobreza, pero al mismo tiempo conservar las alian-

El Salvador, *Plan Quinquenal 2010-2014*, El Salvador, 2010, disponible en <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37713692>, Sitio electrónico del programa Ciudad Mujer <http://www.ciudadmujer.gob.sv/> (ambos consultados en julio de 2014).

zas con el sector empresarial. En cuanto a la relación con los sectores populares organizados y afines al proyecto de gobierno, esta estrategia significó reconocerlos principalmente como militantes partidistas, encargados de la movilización del voto territorial y en menor grado como representantes de organizaciones populares con intereses específicos. Esta tendencia se confirma también en la invisibilización del discurso de clase en la programática electoral y su sustitución por el discurso de la participación ciudadana, concepto que implica la idea de una relación directa entre el individuo-ciudadano con el Estado, sin intermediación de organizaciones partidistas o sectoriales.

Definir la relación con el gobierno de izquierda profundizó las divisiones entre las organizaciones populares hasta llevar a la formación de dos vertientes: una que apoya la gestión gubernamental (aunque a veces expresando reservas y críticas), conformada por aliados históricos del partido de izquierda, como ANDES 21 de junio, la confederación de cooperativas agrícolas CONFRAS, la coordinadora de organizaciones de desarrollo local CRIPDES, la Coordinadora Unitaria Social y Sindical (CUSS) y el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS). En la otra vertiente se encuentran organizaciones que también se reconocen como herederas del movimiento revolucionario de la década de 1970, pero que reivindican su autonomía frente al Estado y el partido gubernamental y cuestionan las alianzas del FMLN con el sector empresarial. Dentro de esta vertiente se encuentran, por ejemplo, Bases Magisteriales, grupos feministas como el Instituto de la Mujer (IMU) o la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Pero ambas vertientes se encuentran ante la misma problemática: una desmovilización generalizada de la población que se refleja en pocas protestas, demandas particulares y coyunturales y poca presencia de demandas con un potencial para unificar luchas —por ejemplo, en contra del alto costo de la vida, empleo digno, reforma agraria, (Pineda, 2014)— y, en general, la ausencia de un proyecto político alternativo.

Este contexto favorece, sin duda, el rol del FMLN como referente central para la acción política progresista, como se expresó en la solicitud de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dirigida al entonces candidato Sánchez Cerén, de prohibir de manera definitiva las actividades de exploración y extracción mineras, compromiso que él asumió públicamente, por considerar la extracción metálica una “amenaza de vida” (Carías, 2014). Al mismo tiempo, la situación profundiza las paradojas y tensiones propias de la delegación del poder y de las expectativas de cambios sustantivos en representantes y funcionarios públicos que dependen de la reproducción de un aparato partidista dentro del espacio político, las reglas del juego y las instancias públicas existentes.

El primer manifiesto de la Coordinadora Nacional de organizaciones populares “Roque Dalton”, publicado en junio de 2014, pone este dilema en términos concretos: “La historia patria nos enseña que sin desarrollo de un movimiento social consistente no hay cambio social posible o, por lo menos, sostenible, a no ser que lo hagan las clases dominantes para prevenir los cambios desde abajo; lo social-organizativo es la materia prima de lo político-organizativo y más” (CONA-RD, 2014:1). Esta lectura parece más que acertada si tomamos en cuenta que la diferencia de votos entre el FMLN y ARENA bajó a 6,364 votos entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral de 2014. El empate técnico, aunque favoreció al FMLN, confirma que en un contexto electoral marcado por la polarización el “voto de agradecimiento” por los programas sociales no es suficiente para contrarrestar la estrategia de ARENA de usar los miedos y fobias sociales para despertar el voto ideológico de derecha, tan arraigado en la sociedad salvadoreña.

Como bloque de organizaciones y movimientos populares que reivindican las tradiciones y el legado político del FAPU y la Resistencia Nacional, el CONA-RD considera necesario formu-

lar un “programa mínimo” y un proyecto político propio, diseñado desde las organizaciones y movimientos populares que se presenta al gobierno del FMLN como agenda de políticas alternativas a las propuestas por el sector empresarial (CONA-RD, 2014). El estrecho margen de votos con el cual Sánchez Cerén obtuvo la victoria pone de manifiesto que la desmovilización social como resultado del realineamiento de organizaciones y movimientos sociales con un gobierno amigo puede tener costos políticos para el partido en el gobierno, porque se puede traducir en desmovilización electoral. Por esta razón, y tomando en cuenta la cercanía de las elecciones legislativas en 2015, urge redefinir las relaciones y las expectativas mutuas de organizaciones populares y partido. Como demuestran los ejemplos, esta redefinición necesariamente pasará por las redes, tradiciones y experiencias históricas acumuladas a lo largo de más de 40 años de lucha y movilizaciones populares en El Salvador.

BIBLIOGRAFÍA:

- Carías, Alfredo (2014), “Sánchez Cerén se compromete a prohibir la minería en El Salvador”, *Diario Digital*, Contrapunto, El Salvador, Centroamérica, 24 de febrero, disponible en línea <http://www.contrapunto.com.sv/politica/sanchez-ceren-se-compromete-a-prohibir-la-mineria-en-el-salvador> [consultado en julio de 2014].
- CEPAL (2014), *Panorama Social América Latina 2013*, CEPAL/Santiago de Chile, disponible en línea <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51769/PanoramaSocial2013-capitulol.pdf> [consultado en julio de 2014].
- Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares “Roque Dalton” (CONA-RD), Manifiesto, Junio de 2014.
- Martín, Alberto (2014), “Sociedad civil y movimientos sociales en El Salvador de postguerra”, *NATAL*, Alejandro y Alberto Martín, La sociedad civil en Centroamérica a una generación del conflicto armado ¿Avances o retrocesos?, Colima, Universidad de Colima, pp. 341-364.

- Pineda, Roberto (2014), “El Salvador. Clases y fracciones de clase del nuevo bloque en el poder salvadoreño”, *ALAI, América Latina en Movimiento*, 13 de Junio, disponible en línea <http://alainet.org/active/74552&lang=es> (consultado en julio de 2014).
- Pirker, Kristina (2010), “Tensiones de un matrimonio de conveniencia: El gobierno de Mauricio Funes y el FMLN en El Salvador”, *Nostramo*, Año III, No. 3, Primavera-Verano 2010, pp. 143-156.
- Sánchez Cerén, Salvador (2012), *FMLN en el gobierno*, Ocean Sur, 2012.
- Trucci, Giorgio (2014), *Reforma Laboral: Prioridad para el próximo gobierno* (con Gilberto García), Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Rel-UITA), 20 de marzo, disponible en línea: <http://www.rel-uita.org/index.php/es/sindicatos/item/4454-reforma-laboral-prioridad-para-el-proximo-gobierno>.

Kristina Pirker es Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Viena. Investigadora-profesora del Instituto Dr. José María Luis Mora, México. Email de contacto: kpirker@institutomora.edu.mx

El Salvador: continuidad del cambio

Ricardo Ribera

En 2009 la elección presidencial salvadoreña representó la disyuntiva entre continuidad o cambio. La de este año ha sido la reafirmación del cambio iniciado con la administración de Mauricio Funes. Es decir, significa una síntesis dialéctica: la continuidad del cambio.

1. SIGNIFICADO DEL MOMENTO HISTÓRICO

Es un recorrido decisivo el que ha realizado el país desde 1994, las primeras elecciones propiamente democráticas de su historia, es decir, con participación de todo el espectro de fuerzas políticas y en condiciones igualitarias. Por quinta vez desde el final de la guerra civil la ciudadanía era convocada a las urnas para ejercer su soberanía, en el marco del consensuado régimen de democracia representativa, para elegir las máximas autoridades del Ejecutivo. Son veinte años que nos han llevado más allá de la etapa de transición democrática, a la normalización política, en la medida que pudo concretarse la alternancia y ésta recién acaba de confirmarse con el resultado electoral de 2014.

Mientras siguieran ganando las fuerzas políticas de derecha, que han venido funcionando como instrumentos de la clase dominante, la democracia era sólo hipótesis. Por eso fue determinante el resultado eleccionario de 2009, pues por primera vez la izquierda ganaba la Presidencia. Su victoria electoral fue respetada por sus adversarios políticos y por las instancias de poder real, que no están bajo control democrático de la ciudadanía (poder económico, poder mediático, poder eclesiástico, poder académico, poder militar, poder imperial). La transición quedaba concluida. Quedaba pendiente de ser ratificado en 2014.

La voluntad popular se expresó con claridad: aunque por escaso margen, dio un ganador, el mismo que casi se proclama en la primera vuelta. La victoria de la izquierda es decisiva para el proceso y por ello no es de extrañar el crujido de estructuras, el tono apocalíptico de algunos discursos y la amenazante actitud de ciertos personeros del poder real. Eso envalentonó a la cúpula del partido perdedor, que intentó revertir el dictamen de las urnas. Tras casi dos semanas de discursos incendiarios, insinuaciones golpistas, movilizaciones de calle, exabruptos y recursos legales, por fin la racionalidad y el realismo se impusieron. Se necesita respeto a las reglas de juego, diálogo y concertación, para poder encarar en conjunto los graves retos que enfrenta la nación. Nadie quiere regresar a un pasado de autoritarismo, imposiciones e inestabilidad. Los extremistas se fueron quedando solos.

De modo que, a la hora del balance, los conatos de rebeldía e insumisión del perdedor no le han restado legitimidad al resultado eleccionario. Por el contrario, ha quedado resaltada la capacidad de imposición de la realidad histórica, marcada por la voluntad democrática y pacífica del pueblo salvadoreño. Su sabiduría se evidenció, no tanto por la distribución de sus preferencias —como algunos han dicho— sino por no haberse hecho eco de los llamados a la desestabilización que, a nom-

bre de su millón y medio de electores, en forma insensata hizo la fórmula perdedora. El pueblo se distanció de tal postura irresponsable y la aisló.

2. DERECHA DIVIDIDA

Era el dato de la realidad más relevante a la hora de intentar predecir las posibilidades del escenario que se presentaba en el proceso eleccionario del presente año: era la derecha la que esta vez llegaba dividida, a raíz de la expulsión a fines de 2009 del ex-presidente Saca de Arena, la fundación de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, y la conformación de la coalición Unidad. Mientras, la izquierda aparecía unida y sin controversias de importancia.

En segundo lugar, otro hecho de la realidad a tomar en cuenta era la valoración positiva del gobierno “del cambio” y la alta puntuación obtenida por el presidente Mauricio Funes en las encuestas. Podía favorecer mucho al FMLN en sus aspiraciones de reeditar el triunfo electoral de 2009, sobre todo en la medida que el distanciamiento y los roces entre el mandatario y el partido se superasen en el marco de la contienda electoral.

Es lo que ocurrió, una vez los amagos de Funes por potenciar una formación política propia no despegaron y la campaña arenera comenzó a centrarse en atacar el presunto “desastre del primer gobierno del FMLN”. Esto terminó por decantar al presidente, que inspirándose en la máxima de que “la mejor defensa es el ataque”, se lanzó a una eficaz y contundente campaña contra el partido opositor, desvelando casos de corrupción de los ex-funcionarios areneros. El más impactante fue el de Francisco Flores, ex-presidente de la República y principal asesor de la campaña del candidato Norman Quijano.

El asesor resultó ser el mayor punto débil de la campaña arenera, la cual de entrada ya tenía otro: la mediocridad del candidato. Falto de carisma y de trayectoria, éste no gozaba de

aceptación plena entre las bases del partido ni entre los distintos grupos de poder que disputan a su interior el rumbo y la conducción. Todo esto se reflejó en la tibieza de los apoyos y en el resultado de la primera vuelta, que estuvo cerca de dar directamente el gane a los candidatos del Frente. No obstante, factor principal de la coyuntura del 2 de febrero fue la división de la derecha. Al sumar los sufragios obtenidos por Arena a los de Unidad (coalición de tres partidos conservadores), más los de dos partidos derechistas formados para la ocasión, se mira que el bloque de derecha aglutinaba más sufragios que el FMLN. El voto conservador aventajaba al progresista. Pero, por primera vez, aparecía dividido.

Por ello, lo ajustado del resultado en la segunda vuelta no debiera haber sido sorpresa, pues la nación aparece escindida ideológicamente en dos mitades. Pero las encuestas tras la primera ronda mostraron que la brecha se ensanchaba y esto dio pie al triunfalismo de la izquierda y a la posterior lectura de “remontada épica” que ha hecho la derecha. Los medios conservadores subrayaron la sorprendente recuperación y se preguntaron: ¿cómo hizo Arena para agregar más de 400 mil votos a su resultado de febrero?

Debe recordarse: meses antes de la elección todos los sondeos de opinión daban como ganador al doctor Norman Quijano en una eventual segunda vuelta contra el profesor Sánchez Cerrén. Por eso la pregunta debería ser otra: ¿cómo hizo el FMLN para invalidar este pronóstico desfavorable, desmentir que hubiese alcanzado su techo electoral el 2 de febrero y atraer cerca de 200 mil votantes extra para la segunda vuelta del 9 de marzo? ¿Cómo fue posible, a pesar de la ofensiva propagandística de la derecha con el tema Venezuela y la débil respuesta efemelenista durante marzo? Es señal de que el FMLN ha logrado atraer sectores desencantados con la derecha, los que hicieron la diferencia.

3. IZQUIERDA AMPLIADA

No solamente hay que valorar los errores y debilidades de la derecha para analizar su “no gane”. Entre las claves para comprender la derrota arenera están las cosas que hizo bien el FMLN. Su estrategia de diálogo amplio y de atracción de sectores, logró fuerte impacto en la opinión pública. Por ejemplo, el Pacto Nacional por el Café, donde el anfitrión fue Antonio Salaverría, ex-presidente del Comité Ejecutivo de Arena (Coena), cuya iniciativa fue ahora boicoteada por su propio partido. También haber sabido atraer empresarios y ex-directivos de gremiales del sector privado, aliados fieles a lo largo de la campaña. Asimismo, intelectuales y sectores de clase media, que despuntaron en movimientos sociales de apoyo.

Clave en la actual coyuntura ha sido la estrategia efemelecionista de atracción de las masas campesinas. Ahí tenía Arena su fortaleza electoral principal, su base social más amplia. Le había sido leal desde 1989, cuando Alfredo Cristiani ganó la presidencia. Éste empezó a parcelar y a repartir tierras de las cooperativas de la reforma agraria entre sus socios, a fin de desmontarla desde su base. La derecha supo explotar las debilidades ideológicas del campesinado, las malas experiencias de ciertas cooperativas agrarias, el generalizado deseo del campesino de ser propietario de su parcela y su desconfianza hacia las formas de propiedad social. “Comunitarismo y comunismo es lo mismo” —afirmaba en su época d’Aubisson. “Los demócrata cristianos son como las sandías, —decía el mayor— verdes por fuera pero rojos por dentro”. Atacando a la Democracia Cristiana y sus reformas, Arena atacaba simultáneamente a la izquierda. Eso caló hondo, durante un cuarto de siglo¹.

1 El autor se refiere a la frontal oposición ejercida por el caudillo de la ultra derecha salvadoreña Roberto D’Aubisson, fundador de Arena, en contra del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El PDC gobernó el país en la década de 1980, primero en el marco de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) y después legitimado

De ahí la magnitud del éxito de la política agraria del FMLN, que utilizó su primer período de gobierno para socavar el predominio histórico de la derecha en el área rural y lograr el apoyo de los sectores vinculados al agro. Es un triunfo estratégico, difícilmente reversible. Fue consecuencia del abandono en que Arena dejó a la agricultura por veinte años y del accionar gubernamental junto a las empresas ALBA, que apoyan decisivamente al sector agropecuario. En los últimos cinco años el campesinado ha sentido un alivio a su precaria situación, el país ha dejado de ser importador neto de alimentos. Hoy exportamos granos básicos y vamos camino de alcanzar la seguridad alimentaria.

4. ESCENARIO POS-ELECTORAL

El costo de esta exitosa transformación del FMLN, que en sólo un quinquenio ha logrado cambiar su anterior perfil de partido urbano de clase media, obteniendo la preponderancia rural sobre su adversario político, tal como acabamos de describir, es el debilitamiento de la influencia efemelenista sobre las capas medias. Traducido en geografía electoral: gane decisivo en el departamento de San Miguel y regiones rurales del interior del país, pérdida significativa en la ciudad capital y varios municipios del área metropolitana. Consecuencia de la definición de prioridades —y en eso consiste en buena medida el quehacer político, en fijar prioridades— era algo prácticamente inevitable. Ha sido el costo a pagar.

Mientras el daño causado a los intereses de la derecha arenera puede ser definitivo, en cambio los perjuicios derivados para la izquierda efemelenista son subsanables. Arrebatándole el control político del agro, privándole este carácter paradójico de ser el partido de los pobres al tiempo que es el partido de

por las elecciones presidenciales de 1984. El líder pedecista Napoleón Duarte fue presidente de El Salvador durante el período 1984-1989, después de lo cual Arena asumió el Ejecutivo (Nota de la/os Editora/es).

los ricos, anulando la base clasista del proyecto pseudo-fascista de lanzar las clases trabajadoras del campo contra las clases trabajadoras de la ciudad, rompiendo la oposición campesinado versus clase obrera, la contradicción campo-ciudad, se le quebró el espinazo a esta derecha arenera con señas de identidad fascistas, por nacimiento, y prácticas neoliberales, por vocación. Con la columna vertebral rota, se le descontrolan sus extremidades sociales, separadas de la cabeza. Arena entra así a una fatal crisis de identidad.

El problema de la derecha es que su tiempo ya pasó, la crisis que había al ser fundada Arena no existe más, el país ya no es el mismo y la izquierda que enfrenta también ha cambiado. Por ello, a falta de coordenadas para ubicar su propia posición, luce confusa y desorientada. En este contexto pudieran surgir nuevas identidades de derecha. Es una situación que bien puede aprovechar la izquierda.

En primer lugar, si traza metas definidas para las elecciones de 2015, tal como acaba de hacer, fijándose la recuperación de las alcaldías de San Salvador y municipios aledaños, como una prioridad inmediata. En segundo, una política de atracción de las capas medias, afectadas por la crisis económica, necesitadas de alivio y de confianza en que no va a seguir deteriorándose su poder adquisitivo. En tercer término, diálogo y concertación con el movimiento social y con las organizaciones de la sociedad civil, para empoderar a las mayorías populares. Por último, abrir canales de diálogo y negociación con los empresarios, de las gremiales tradicionales y otras instancias. De hecho, los primeros encuentros han sido calificados por ambas partes de positivos a pesar de las iniciales protestas empresariales por haber delegado el presidente electo en Óscar Ortiz, futuro vicepresidente, el encabezar las conversaciones.

Mientras su compañero de fórmula se encargaba del diálogo con los diferentes sectores de la vida nacional, en un ejemplar

trabajo de equipo, Sánchez Cerén centró sus primeras actividades en desarrollar la agenda internacional. Hizo una gira por todos los países de la región, una significativa visita a Cuba y otra al Vaticano, donde tuvo una audiencia con el Papa Francisco. Culminó su intensa actividad diplomática con un viaje a Venezuela y otro a Estados Unidos, donde fue recibido por el Secretario de Estado, John Kerry. El presidente venezolano Nicolás Maduro abrió la posibilidad de ingresar a Petrocaribe y reducir así la factura petrolera, mientras en Estados Unidos se afianzó la probabilidad de aprobación de los fondos del Reto del Milenio (Fomilenio-II) para proyectos de desarrollo en la zona costera por 247 millones de dólares.

En esas pocas semanas el presidente electo ha empezado a mostrar su talla de estadista. Son buenos augurios. Pasada la tormenta electoral, el cielo luce hoy despejado y se avizora mejor tiempo para la travesía que aguarda. Pese a los escollos, la nave ha enderezado el rumbo y avanza serena. Como en el mito clásico de la Odisea, la larga aventura rumbo a Itaca inició ya y parece hoy más factible.

Ricardo Ribera es historiador y filósofo. Nacido en Catalunya (España) y radicado hace tres décadas en El Salvador. Es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Colabora permanentemente con análisis políticos sobre la coyuntura salvadoreña en medios digitales nacionales.

La situación económica de los gobiernos de izquierda en El Salvador

Melissa Salgado

El presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre las políticas económicas de la primera administración del gobierno central de la izquierda salvadoreña y sus perspectivas de futuro en el segundo mandato. Para ello se iniciará con una contextualización histórica de su ejercicio estatal, se señalarán las prioridades en políticas económicas mostradas en el quinquenio, la capacidad de ruptura de la lógica neoliberal y/o continuidades y, por último, se destacarán los principales ejes económicos del segundo gobierno de izquierda.

1. CONTEXTO ECONÓMICO

El contexto económico del primer gobierno central de izquierda en la historia de El Salvador (2009-2014) se debe de analizar desde el plano internacional, así como desde el plano nacional.

En el plano internacional, la izquierda salvadoreña inicia su administración en un contexto de crisis mundial. La recesión de Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, impactó mediante el comercio internacional, disminuyendo el flujo de exportaciones y de importaciones, y mermando la entrada de

remesas, es decir, las principales transferencias de divisas que recibe el país producto del enorme flujo migratorio. Además, disminuyó la cooperación internacional, entre los principales factores. Todo ello resultó en una caída del PIB al -3.5% para el año 2009.

En el plano nacional, para el año 2009 se cumplían dos décadas de continuos ajustes estructurales, producto de la aplicación del neoliberalismo. Ello implicó: privatizaciones de las principales empresas públicas (banca, telefonía, sistema de pensiones, exportación del café, etc.); una reforma fiscal que colocó impuestos al consumo en general y exentó al patrimonio, remarcando el carácter regresivo del sistema tributario; una política monetaria (dolarización en el 2001) dirigida a las grandes transacciones económicas realizadas por las élites nacionales (sistema financiero, comercio internacional) y no a la actividad económica nacional; reformas en el mercado laboral, en cuanto a flexibilización en temporalidad de contratos, reducción de los sindicatos, flexibilización en las garantías a las prestaciones sociales de ley; y un enorme proceso de liberalización económica e integración internacional, regido principalmente por las firmas de TLC que no reconocen asimetrías entre los países en competencia. El caso más destacado de esto último fue el CAFTA, puesto en marcha a partir de 2006.

Los resultados de estas reformas estructurales fueron: una estructura productiva cuya base de competitividad se fundamenta en la erosión sistemática de los salarios, poca tecnología, generación de empleo precario, complejización y persistencia de la desigualdad social y mantenimiento de la heterogeneidad estructural en el sector terciario. Es decir, el sector servicios — el que más empleo genera — se caracteriza por mantener trabajadores altamente calificados en convivencia con trabajadores sin calificación.

Es importante precisar dos aspectos. En primer lugar, la decisión de asumir el neoliberalismo desde 1989 como el edificio

superestructural de esta nueva fase en El Salvador se dio sin considerar que el país enfrentaba la peor crisis de su historia reciente (la guerra civil, los impactos de la crisis de la deuda, la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, etc.). Las medidas de ajuste estructural se implementaron bajo las peores condiciones posibles en términos sociales, políticos y económicos.

En segundo lugar, la reorientación económica en manos de la iniciativa privada y el repliegue del Estado dejó a este último con menos fuentes de ingresos, principalmente por las privatizaciones de las empresas públicas y la drástica disminución de los aranceles en el proceso de apertura. Las funciones del Estado se redujeron en cuanto a la provisión de servicios básicos a la población. Sin embargo, puso a disposición parte de su institucionalidad para el reacomodo de los nuevos requerimientos del neoliberalismo, en superintendencias del sistema financiero, pensiones, telecomunicaciones, electricidad, etc.

La izquierda salvadoreña asume la administración del gobierno central en un momento en el que el neoliberalismo daba claras señales de agotamiento como modelo económico excluyente, con un Estado debilitado en materia de distribución de ingresos, sin soberanía monetaria por la dolarización, con un fuerte condicionamiento en materia de recaudación de impuestos para la política fiscal y bajo un enorme proceso de liberalización económica en donde prevalecen las importaciones y las rentas extranjeras generadas en el país.

2. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Las principales orientaciones en materia de política económica y social del primer gobierno de izquierda en El Salvador se centraron en cinco aspectos: reactivación del carácter distributivo del Estado, agricultura, educación, salud e infraestructura. En cuanto a la reactivación del papel distribuidor del Estado, es preciso detallar que inicia en la última administración de ARE-

NA (2004-2009), bajo el reconocimiento implícito de la enorme desigualdad generada en el neoliberalismo. Opera, además, mediante transferencias que el Estado realiza a grupos sociales focalizados en situación de pobreza. La diferencia sustantiva entre estas políticas impulsadas por el FMLN y ARENA es que este último realizó transferencias únicamente en municipios gobernados por ese partido, mientras que el FMLN lo amplió al resto de la población y articuló las demandas sociales con la producción de pequeños y medianos productores, en vestuario y alimentos principalmente.

Como es bien sabido, el sector agrario fue gravemente afectado en la etapa neoliberal. En El Salvador, durante las décadas de ajuste estructural, este sector desapareció de la agenda de políticas públicas, disminuyó su presupuesto, dejó de ser beneficiario de créditos para la producción, sobrellevó la liberalización de los precios de los alimentos y se perdió la autosuficiencia en la producción agrícola, entre otras consecuencias negativas. Esta ausencia del Estado en el sector primario se realizó omitiendo el hecho de que las zonas rurales continúan absorbiendo más del 40% de la población total del país, siendo, además, las áreas donde mayormente se concentra tanto la pobreza extrema como la relativa.

El primer gobierno de izquierda incorporó dentro de sus prioridades a la agricultura, mediante programas de reactivación del sector (Programa de Apoyo Familiar, PAF), los cuales lograron el incremento de la producción de alimentos y con ello la estabilidad de los precios de la canasta básica a lo largo del quinquenio.

En salud, el ejercicio estatal se concentró en mejorar el acceso, sobre todo en la zona rural. Ejemplo de ello son los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), cuya principal función ha sido articular las comunidades que carecían de servicio de salud al sistema nacional, es decir, a las consultas especializadas y a la red hospitalaria.

En educación, el ejercicio del Estado también se ha centrado en mejorar el acceso, principalmente en la zona rural. Además, ha priorizado el mantenimiento de los niños y las niñas en la escuela primaria (nivel educativo que registra la mayor deserción escolar). Para ello asumió los principales gastos educativos: del inicio del ciclo escolar (uniformes, zapatos, utensilios escolares) y alimentación durante la jornada educativa.

En infraestructura, la gestión se ha enfocado principalmente en la construcción y mantenimiento de puentes y carreteras. Mucho de este esfuerzo le ha dado continuidad a proyectos de infraestructura vial que, por escándalos de peculado de las administraciones anteriores de ARENA, habían quedado truncos.

3. ¿CAPACIDADES DE REVERSIÓN DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES O CONTINUIDADES?

Las principales condicionantes heredadas de la etapa neoliberal en El Salvador se ubican en la forma de integración económica: la apertura comercial, la continuidad en la firma de Tratados de Libre Comercio (tal es el caso del AdA) y el asocio público-privado (negociado con Estados Unidos). Además, la dolarización, aunque esta medida de política monetaria respondió, más que al neoliberalismo, a la necesidad de las transacciones comerciales de las élites nacionales.

Todo ello ha impactado en la estructura productiva nacional, que ha sido sometida a una agresiva competencia internacional sin considerar las fallas estructurales que de por sí mantiene (baja tecnología, mano de obra poco calificada, etc.), generando presión por la menor generación de empleo formal, por condiciones cada vez más precarias de trabajo (en términos de contrato, jornada laboral, etc.) y la erosión sistemática en la capacidad adquisitiva de los salarios.

Por otra parte, el intento de la reactivación del papel de Estado como distribuidor de recursos sólo se ha focalizado en la distribución y no en el proceso productivo como tal. Esto supone una limi-

tante muy profunda, puesto que se requiere de fondos públicos para su ejecución. Como se mencionó anteriormente, el Estado ahora tiene menos fuentes de ingreso, lo cual le obliga a acudir al endeudamiento externo. El problema deriva en la capacidad de sostenibilidad de los programas sociales con el paso del tiempo, a no ser que se refuerce la orientación del Estado hacia la esfera productiva.

En cuanto a capacidades de reversión de las políticas neoliberales, considero que este primer gobierno de izquierda ha logrado contener conflictos medioambientales, en la minería. Para el año 2006, el Ministerio de Economía (MINEC) registraba más de 35 áreas concesionadas para la explotación de minería metálica, la mayoría de ellos localizados en la cuenca del Río Lempa (que proporciona agua a 13 departamentos de los 14 del país). Estos proyectos lograron la etapa de la exploración, en donde comprobaron la existencia de yacimientos de oro y plata. Sin embargo, por presión de los movimientos sociales y el reconocimiento del enorme impacto medioambiental de la actividad minera en El Salvador, este gobierno decretó la prohibición de la explotación de minería metálica, pero no así una ley.

4. La segunda administración del FMLN (2014-2019)

De acuerdo al plan de gobierno propuesto por el FMLN durante la última campaña electoral, “El Salvador adelante”, la prioridad en su gestión se centrará en la generación de empleo. Para ello ha planteado la reactivación de la industria, el fortalecimiento del turismo, la continuidad en los programas agropecuarios, un banco de desarrollo y la apuesta por fuentes de energía renovables.

Destaca la diferencia entre esta prioridad manifestada por el FMLN y los programas de gobierno propuestos por los partidos de derecha ARENA, “Plan País”, y Unidad, “Avanza país”, los cuales se centraban en el crecimiento económico. Adoptar como prioridad el crecimiento económico en un país como El Salvador

significa priorizar las ganancias, por ser estas las que mayoritariamente explican la variación en la producción año con año.

Por otra parte, esta segunda administración del FMLN continuará con los programas sociales, como lo constata la “Ley de Desarrollo y Protección Social”, aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de abril de 2014.

Hasta el momento, el FMLN ha descartado la posibilidad de des-dolarizar la economía, a pesar de reconocer que es un fuerte obstáculo para la reactivación productiva. Según el MINEC, están en procesos de negociación los Tratados de Libre Comercio con Japón, Corea del sur, Canadá, Belice, Perú, Ecuador, Cuba y el Mercosur. En este sentido, la cartera de economía muestra que, si bien la lógica de integración económica heredada del neoliberalismo persiste, esta administración ha proyectado ampliar dicha concepción, al momento de programar vínculos económicos con países que no se han regido deliberadamente por el neoliberalismo, tal es el caso de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, etc. El ejemplo más claro de ello es que al segundo día de asumir la segunda administración del FMLN, El Salvador ingresó a Petrocaribe.

Sólo logrado este segundo quinquenio, es decir, a diez años del FMLN como regidor del gobierno central, podremos saber a ciencia cierta qué procesos económicos y sociales se reforzarán más, si los heredados por el neoliberalismo o los que han significado la superación de este. Mientras tanto, existen fuertes condicionantes neoliberales, pero también existen intentos de reactivar el papel del Estado como distribuidor de recursos, de proponer un modelo más incluyente y operativizar el consenso y el compromiso social.

Melissa Salgado es magíster en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente estudia el Doctorado en Economía, Instituto de Investigaciones Económicas, IIIEC-UNAM, en el programa PROGLOCODE, <http://www.proglocode.unam.mx/>. Investigadora/docente del Departamento de Economía, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) El Salvador. Email de contacto: melissa.salgado@gmail.com

Rivales siempre

Roberto Turcios

El Salvador tiene una secuencia de acontecimientos que parece de antología: la guerra de más de una década —que libró el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra la Fuerza Armada y un Gobierno apoyado por los Estados Unidos—, la negociación, la reforma constitucional, la desmilitarización, las elecciones con la participación de quienes habían sido guerrilleros, y la supervisión internacional. Ese es el catálogo de la peculiar transición salvadoreña a la democracia. Desde que ese proceso se desplegó plenamente en 1992, ha tenido dos referentes ineludibles, sujetos de sus avances y retrocesos: el FMLN, de izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha.

En el más reciente capítulo de su larga relación, ARENA y el FMLN mostraron que siguen siendo las fuerzas políticas dominantes, en la quinta elección presidencial de la posguerra (la primera ocurrió en 1994, dos años después de que se firmaran los Acuerdos de Paz, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas –ONU). El domingo 2 de febrero de este año, la población votante marcó su preferencia entre cinco partidos y dejó dos novedades: 1) la coalición

UNIDAD, de derecha, logró 11% de los votos, ubicándose en el tercer lugar; y 2) la diferencia tan amplia a favor del FMLN hizo parecer que la competencia estaba terminada. Nada de eso. El 9 de marzo el ballottage mostró que las luchas entre los dos principales partidos no pasan por la rendición; y menos ahora que aparecen condiciones para la redefinición de las estructuras fundamentales del poder, de las representaciones políticas y de los grupos sociales con acceso decisivo a la formulación de los programas gubernamentales.

LA RUTA ELECTORAL

Cuando la guerra se extendía por el territorio, en 1982, todos los partidos de derecha aceptaron competir en elecciones para una Asamblea Constituyente. De esa manera, los patrocinadores electorales, el gobierno estadounidense en primer lugar, podían argumentar sobre un avance político y rebatir las propuestas de negociación del FMLN y sus aliados del Frente Democrático Revolucionario (FDR). En 1984, hubo una gran contienda entre ARENA y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyos dirigentes emblemáticos se enfrentaron como candidatos presidenciales: el mayor Roberto D'Aubuisson y José Napoleón Duarte. Ganó Duarte, después de sostener en la campaña que D'Aubuisson había sido el creador de los Escuadrones de la Muerte. En el primer año de su mandato, Duarte aseguró que iniciaría diálogos con el FMLN y el FDR. El 15 de octubre de 1984 fue la primera ronda de conversaciones, pero pronto quedó cancelada. Los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos defendían las urnas y las ofertas de diálogo como una legitimación de su rechazo a la negociación promovida por el FMLN y el FDR. En cierta forma, ese cuadro era una modalidad local y regional de la Guerra Fría.

ARENA ganó las presidenciales en 1989 con el empresario Alfredo Cristiani, quien contaba con todo el apoyo de D'Aubuisson. Al final de ese año la guerra se impuso como la

primera realidad del país; ¡y cómo no, si la tropa del FMLN llegó hasta la capital, mostrando su capacidad militar! En ese ambiente, un grupo de oficiales de la Fuerza Armada decidió jugar al todo o nada y ordenó el asesinato de los curas jesuitas, en la Universidad Centroamericana (UCA). De la conjunción entre esos hechos nacionales, la intervención de fuerzas políticas y gobiernos de la región y la recta final de la Guerra Fría, salieron las condiciones que permitieron la negociación, los Acuerdos de Paz, un cese al fuego impecable, el predominio de las urnas y, en definitiva, la apertura de una transición fundacional a la democracia.

“Elecciones del siglo” fue la etiqueta periodística para los comicios de 1994, porque participaba, por primera vez, el FMLN y estaban en juego todos los cargos de elección popular. ARENA se impuso con holgura en la contienda presidencial, logrando su segundo mandato quinquenal; en 1999 obtuvo un tercero y en 2004 el cuarto triunfo. Total: 20 años con el Ejecutivo y con el control del Gobierno. El FMLN había logrado victorias legislativas y municipales, pero la presidencia parecía un sitio exclusivo para los areneros; hasta 2009.

El FMLN y su candidato Mauricio Funes —periodista y crítico permanente de los gobiernos de ARENA— triunfaron con el 51.3% de los votos (tres puntos porcentuales arriba de ARENA), pasando a encabezar un gobierno de izquierdas (2009-2014). No fue un gabinete exclusivamente del FMLN, sino algo parecido a uno de coalición, aunque sin pacto formal. Si el tipo de guerra y los Acuerdos de Paz fueron acontecimientos peculiares, el gobierno de Funes también lo fue. El partido en el Gobierno era el FMLN, pero el FMLN no dictaba las políticas del Gobierno. Por primera vez en toda la posguerra, el Gobierno y el presidente no seguían la línea de un partido ni estaban comprometidos con las cámaras empresariales. En agosto de 2012, Funes institucionalizó una parte de las nuevas correlaciones en el poder al decre-

tar que en los organismos de dirección de las autónomas ya no se privilegiarían las candidaturas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), federación gremial cercana a ARENA.

UNA CAMPAÑA CON NOVEDADES

ARENA y el FMLN se han disputado la conducción ideológica y política de la transición a la democracia. Con el tiempo, han construido una especie de hegemonía compartida, logrando ser los líderes del bloque propio, siempre enfrentado al rival. Sin embargo, en la última campaña aparecieron los perfiles de tendencias nuevas y singulares en esos dos bloques. Cuando se definieron las fórmulas presidenciales, quedó claro que los dos partidos querían dar señales de renovación. ARENA presentó como candidato a la Vicepresidencia a René Portillo, un joven docente universitario sin militancia en el partido, miembro de la mesa dirigente de una coalición de agrupaciones cívicas y empresariales. El FMLN jugó con una buena carta de renovación: Oscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla durante doce años, cabeza de corrientes de cambio en el partido y quien se atrevió a desafiar la candidatura de Schafick Handal (líder histórico de la izquierda nacional) en 2003, al postularse en las internas como su rival.

Más tarde hubo señales distintas a los patrones habituales. ARENA presentó un grupo asesor de su candidato sobre el gabinete futuro. Facundo Guardado, ex comandante guerrillero, ex coordinador general del FMLN y candidato presidencial del Frente en 1999, fue presentado como asesor, en materia de seguridad, del candidato de la derecha Norman Quijano. También se sumaron al grupo intelectuales con trayectoria pública independiente. Una de las mayores presiones que ha recibido ARENA ha sido por la renovación, por la apertura a nuevos miembros y planteamientos, así como por el distanciamiento de los símbolos tradicionales. A ARENA le ha costado presentar las pruebas de su voluntad reformadora por el apego hacia las se-

ñas fundadoras de su identidad. La presentación de Guardado debe de haber generado resistencias considerables.

Nunca el FMLN había hecho tantos gestos pro-empresariales como en la pasada campaña. Fue más que eso: hubo publicidad de esos gestos e información sobre las nuevas agrupaciones empresariales. Con base en un acuerdo con Venezuela, una empresa mixta (ENEPASA, Energía para El Salvador) y una filial de PDVSA (Petróleos de Venezuela) constituyeron Alba Petróleos, la que se ha convertido en una exitosa plataforma de negocios. El sostén de la estructura es el sistema venezolano que facilita combustible con una forma generosa de pago, pues un 40% del valor se convierte en deuda de largo plazo con una carga mínima de intereses. Ese acuerdo permite contar con recursos financieros para impulsar iniciativas empresariales con retornos seguros en el corto plazo. Precisamente eso ha hecho Alba Petróleos, ha respaldado la creación de una red amplia de negocios por dos vías: una directa, cuya muestra emblemática es la cadena de estaciones de venta de combustible; otra vía es indirecta, a través del financiamiento de actividades con buenas perspectivas, como una línea aérea para rutas centroamericanas (VECA, Vuelos Económicos Centroamericanos), o proyectos de cafetaleros o industriales que han tenido dificultades para acceder a los recursos en el mercado local. Las dos vías mencionadas le han permitido al FMLN una incursión en el mundo de los negocios: dirigentes del partido están al frente de Alba, cuya red tiene las estaciones distribuidoras de combustible, el procesamiento de productos alimenticios —Alba Alimentos— y una financiera para las empresas micro y pequeñas.

¿Están sufriendo mutaciones los grandes rivales políticos o sólo visten ropajes nuevos con el fin de mantenerse iguales? Tal vez asistimos a un momento especial, cuando los rivales históricos buscan la mutación más adecuada, la que renueva y conserva a la vez.

LAS TRAICIONES DEL PODER

Francisco Flores, presidente de la República entre 1999 y 2004, dirigía la campaña de ARENA y de su candidato, Norman Quijano, cuando empezó a ser objeto de acusaciones por el manejo irregular de varios millones de dólares procedentes de Taiwan. Desde octubre del año anterior, el presidente Mauricio Funes había denunciado la existencia de un Reporte de Operaciones Sospechosas, elaborado por el gobierno de los Estados Unidos, sobre tres cheques emitidos por Taiwan a favor del ex presidente Flores. Desde entonces, Funes, en su programa radial de los sábados, no dejó de reiterar la denuncia, describiendo los hechos como un ejemplo de la actuación del “poder oligárquico”.

El martes 28 de enero faltaban cuatro días para la votación y a Francisco Flores le tocaba sentarse, por segunda vez, ante una comisión especial integrada en la Asamblea Legislativa para investigar las donaciones de Taiwan. Durante la primera reunión, el 7 de enero, el ex presidente aceptó que había recibido los fondos, aduciendo haberlos destinado al combate a los secuestros y a la atención de las víctimas de los terremotos de 2001. Entre la primera reunión y la segunda, la Comisión se entrevistó con funcionarios del gobierno de Flores y miembros de ARENA; todos negaron que por sus despachos o controles legales hubiesen pasado los fondos y desconocieron el asunto. En su segunda cita con la Comisión Especial, se evidenció que los argumentos del ex presidente (sobre los presuntos “destinatarios”) se quedaban cortos ante la admitida inexistencia de controles sobre los donativos. El ex presidente pidió permiso para levantarse, amenazó con retirarse y solicitó que la siguiente cita fuera después de la primera votación. La respuesta de los diputados ante esta petición fue negativa. Fijaron la fecha de la siguiente entrevista, pero Francisco Flores no regresó. La Policía Nacional Civil lo buscó en su casa, sin encontrarlo y no se le volvió a ver.

ARENA llegó a la primera votación, el domingo 2 de febrero, con la pesada carga heredada por Flores. El hecho iba más allá del significado electoral, pues en el último medio siglo no se había dado un enjuiciamiento que cuestionara el ejercicio histórico del poder, que fuera tan explícito para la ciudadanía y, además, aceptado por el partido del acusado. El impacto en la primera votación de 2014 fue directo y abrumador, en contra de ARENA y a favor del Frente; y parecía irreversible e inamovible. Parecía, pero no fue así.

UN MES ASOMBROSO

Entre la primera votación, el 2 de febrero, y la segunda, celebrada el 9 de marzo (dado que el Frente no triunfó con el porcentaje legal requerido), se produjo una sorpresa. Lo impredecible desplazó a las predicciones de los especialistas —la baja de asistencia en la segunda votación. La diferencia inicial, de diez puntos porcentuales (268 mil votos), pasó a ser de un solo punto (6 mil votos). ¿Cómo ocurrió semejante cambio?

ARENA modificó la estrategia y los candidatos trataron de distanciarse del ex presidente Flores. Las acciones de los jóvenes simpatizantes del partido fueron especialmente decisivas para conseguir la movilización de votantes; también lograron impacto considerable los descuentos ofrecidos a quienes mostraran el dedo entintado después de votar, las facilidades a los empleados para que acudieran a las urnas y la asistencia a quienes no tenían vigente su documento de identidad. Además, la asociación publicitaria entre la crisis en Venezuela y la victoria del FMLN fue un ingrediente idóneo para activar los sentimientos anticomunistas.

El Frente, por su parte, pareció confiado en la amplia ventaja obtenida y en su difícil reversión. A lo largo de toda la campaña contó con dos factores a favor: uno, la participación del ex presidente Saca, como candidato de UNIDAD (poniendo de manifiesto

la división de derecha), y, dos, la intervención de Funes, enfrascado en la crítica más dura y sostenida contra la forma de gobernar de ARENA en los 20 años comprendidos entre 1994 y 2009. Así, mientras los candidatos Sánchez Cerén y Ortiz hacían propuestas afirmativas, Funes lanzaba fuego contra ARENA, amparándose en la opinión favorable de la ciudadanía a su gestión.

Entonces sucedió algo inexplicable: ARENA se dedicó a polemizar con el presidente, dejando que la candidatura rival creciera por una ruta con pocos obstáculos. Esa fue la tónica dominante antes de la primera votación. Después, la continuada intervención de Funes pareció llegar a la saturación y, por lo mismo, a la generación de rechazos entre la ciudadanía. Además, dirigentes de ARENA sostuvieron que Funes se había accidentado en un vehículo Ferrari, logrando sembrar dudas e incidir en el electorado. Ya se sabe cómo son hoy las campañas políticas: una combinación ruidosa de mensajes simples y frases hechas sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, junto a operaciones psicológicas, maniobras en medios digitales y sonrisas, muchas sonrisas. Así fue la más costosa, diversa y compleja campaña librada por los enconados rivales de la posguerra.

AGENDA DE LA INCERTIDUMBRE

Conforme quedaba atrás el enfrentamiento electoral se volvían más visibles los problemas urgentes: la inseguridad, el bajo crecimiento, los desajustes fiscales y el rezago institucional para ampliar la democracia. Todos asuntos que exigen soluciones desde ayer, pero que no se han logrado porque los grandes rivales de la posguerra y la transición han tendido más a la intolerancia que a forjar acuerdos. Así han conseguido roles hegemónicos indiscutibles en el campo propio y funciones compartidas en el plano nacional, que no evitan los vacíos ni la inacción en momentos cruciales.

La magnitud de los problemas y su urgencia están planteando la renovación y el tránsito a otra etapa menos confrontativa y más constructiva. Las actuales tasas de homicidios, las de crecimiento económico y las del déficit fiscal son insostenibles. De continuar así, las luces amarillas de todos los semáforos pasaran a ser rojas. La transición a la democracia registra avances fundamentales en materia de libertades, competencia electoral y alternancia política en el Gobierno. También presenta remiendos, roturas y partes abandonadas. El tiempo se mueve, exigiendo la sincronización de los relojes políticos con una redefinición de las estructuras de poder —que, de hecho, ya impulsan los grandes rivales— para lograr un modo nacional de desarrollo nuevo, que reduzca la pobreza y eleve la capacidad productiva. Hay otros relojes implacables, los de las maquinarias electorales, que ya están en marcha, porque su enfrentamiento próximo será en el primer trimestre de 2015.

Roberto Turcios es historiador salvadoreño, autor de *Autoritarismo y modernización* (Dirección de publicaciones e impresos, San Salvador, 2003) y *Ungo una vida por la democracia y la paz* (FUNDAUNGO, San Salvador, 2012).

Sobre las posibilidades de la unidad nacional

Carmen Elena Villacorta

El apretado triunfo electoral del FMLN sobre ARENA en las recientes elecciones presidenciales condujo a la izquierda partidaria de El Salvador a enarbolar un discurso concertador y moderado, que enfatiza en la importancia del entendimiento entre las partes como modo de sortear la evidente polarización del país. En tanto estrategia para apaciguar los caldeados ánimos de la derecha, que amenazó, incluso, con desconocer el resultado de los comicios, la actitud conciliadora del Frente ha sido exitosa. ¿Pero es realista pensar que los dos partidos provenientes de la guerra civil llegarán a consensos básicos en materia de política económica y social?

El presente texto sostiene la tesis del fracaso histórico de la derecha salvadoreña en la construcción de un Estado nacional moderno. Sin haber sido ese el proyecto fundante del FMLN y de su gesta revolucionaria, hoy la ex insurgencia se encuentra frente al reto de modernizar el Estado, dentro de las reglas del marco liberal. No creo que pueda contar para ello con la anuencia de la retrógrada derecha del país. Sólo en estrecha unidad con sus bases, con el movimiento popular y con las fuerzas progresistas, podrá el FMLN iniciar la difícil tarea de refundar la nación salvadoreña.

1. LA DISCUSIÓN SOBRE LA NACIÓN DURANTE LA POSGUERRA

Las alusiones al Pacto de Nación, la unidad nacional o el diálogo de país han sido una constante durante las dos décadas de posguerra en El Salvador. Sin embargo, son dos las coyunturas en las que el debate al respecto ha cobrado una significación particular: tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, en 1992; y ahora, tras el triunfo del FMLN en las elecciones presidenciales de marzo de 2014. En 1992, la cuestión se tornó candente por obvias razones. Puesto punto final al conflicto armado, se abría la posibilidad de la reconstrucción, la reconciliación y la superación de la profunda crisis militar, política, económica y social que caracterizó al país durante la década de 1980. Se impuso entonces la pregunta sobre el proyecto de nación que se pretendía impulsar, sobre el horizonte hacia el cual se debería caminar, sobre el rumbo hacia el cual las diferentes fuerzas vivas de la sociedad debían echar a andar a El Salvador.

Las tensiones que caracterizaron las negociaciones entre el FMLN y el primer gobierno de ARENA, llevadas a cabo entre abril de 1990 y enero de 1992; el desequilibrio, desfavorable para la izquierda, que la caída del muro de Berlín supuso en la correlación de fuerzas de la geopolítica internacional; y las diferencias de enfoque que emergieron en la comandancia general del Frente de cara al proceso de negociación, entre otros factores, impidieron que los Acuerdos de Paz salvadoreños incluyeran la discusión de la agenda económica y social. Dos instancias intentaron, infructuosamente, subsanar semejante vacío: el Foro de Concertación Económica y Social y el “Plan de Nación”, elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo.

La letra de los Acuerdos de Paz comprometía al gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) a impulsar el Foro de Concertación Económica y Social, espacio en el que el movimiento sindical, las cámaras empresariales (especialmente la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP) y el Estado

se darían cita para determinar la política económica de El Salvador. No obstante, la poca o nula disposición de ARENA y de ANEP para llegar a acuerdos básicos con las fuerzas progresistas respecto del proyecto socioeconómico consiguió que el Foro muriera por inanición. Ni ARENA ni ANEP concertarían, entre otras cosas porque su proyecto había sido decidido en el seno de su tanque de pensamiento, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), durante la segunda mitad de la década de 1980¹. En El Salvador se aplicarían a rajatabla las medidas de ajuste estructural recogidas en el Consenso de Washington.

Algo similar ocurrió con la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) y su “Plan de Nación”. Creada hacia el final de la segunda administración de ARENA (Armando Calderón Sol, 1994-1999), la CND generó cierta expectativa al conjuntar a un grupo de intelectuales que, tras nueve meses de consulta ciudadana, hicieron público el documento “Bases para el Plan de Nación”, presentándolo como pivote para un proceso más amplio y de larga data en aras de concertar el rumbo de país. Sin embargo, el sucesor de Calderón Sol —el también arenero Francisco Flores (1999-2004)— optó por privilegiar la dolarización, en aras de facilitar las transacciones transnacionales a los capitales que durante la primera década de la posguerra migraron desde la agroexportación hacia el sector financiero, antes que por dar continuidad a las propuestas recogidas en “Bases para el Plan de Nación”. La CND hablaba de concertación y defendía la necesidad de que los diferentes sectores llegaran a acuerdos básicos respecto de cómo desarrollar El Salvador. Nada más contrario a ese discurso que la imposición de una medida indigna, que significó la renuncia a la soberanía monetaria, como fue la dolarización.

1 Financiada por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y liderada por una nueva generación de grandes empresarios salvadoreños, FUSADES empezó a operar en El Salvador en 1983, como tanque de pensamiento de la derecha en donde se planificó la puesta en marcha del proyecto neoliberal.

No fue extraño que Flores engavetara las “Bases para el Plan de Nación” y dolarizara la economía, ni que las únicas medidas provenientes de la CDN adoptadas por el último de los gobiernos areneros —el de Elías Antonio Saca (2004-2009)— se limitaran a obras de infraestructura. Tampoco fue de extrañar que durante 20 años de sucesivos gobiernos de ARENA se insistiera en el neoliberalismo a ultranza, siendo evidente, como era, que estaba lejos de ser ese el modelo más adecuado para un país estructuralmente pobre y de precarios recursos, sumergido durante una década en la guerra civil, urgido de una política de reconstrucción incluyente y solidaria con las mayorías desposeídas. No fue extraño, porque la observación del comportamiento de la oligarquía salvadoreña en perspectiva de larga duración permite constatar su falta de compromiso y, más aún, su desconocimiento supino, de lo que es la nación y de lo que debe hacerse para construir una.

2. LA FRACASADA NACIÓN DE LA OLIGARQUÍA SALVADOREÑA

Con todo y la aberración que supuso la colonización de América, los condicionamientos geo-históricos y socioeconómicos particulares, en conjunción con la voluntad de ciertas élites políticas, consiguieron en cada espacio geográfico resultados distintos. Por eso se observan en el continente una diversidad tan amplia de estados nacionales, desde la colosal potencia mundial estadounidense, hasta las exóticas realidades insulares del mar Caribe, pasando por la fortaleza geográfica y económica de Canadá y Brasil, y por la casi risible pequeñez, geográfica y económica, de países como El Salvador, Honduras y Haití.

La tendencia a la naturalización de la historia hace que olvidemos con facilidad que el hecho de que hoy en día Brasil haya llegado a las grandes ligas de la economía mundial no es fortuito ni azaroso, sino el resultado de una combinación entre sus condicionantes estructurales y las decisiones que en materia de

política económica han tomado los poderes gubernamentales y fácticos de ese cuasi subcontinente suramericano. Tampoco es casual que Argentina y Cuba sean dos de las sociedades más igualitarias y cuenten con los más altos índices de cobertura en educación y salud públicas de Latinoamérica. Esos logros obedecen a las luchas populares y a la política social implementada por el gobierno revolucionario cubano y por los gobiernos nacional-populares argentinos.

El ejemplo obligado al que en Centroamérica debemos acudir es el de Costa Rica. ¿Por qué la nación costarricense cuenta con el sistema democrático más antiguo y mejor aceitado del Istmo? ¿Por qué su sociedad no se encuentra asolada por la extrema pobreza y la extrema violencia que hieren la vida de las poblaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador? Porque contaron en su haber histórico con élites políticas que desarrollaron un proyecto de nación. O, dicho en otras palabras, que se tomaron en serio el ideario liberal.

Así como en Europa el colonialismo es la contraparte perversa de la “civilidad” de sus naciones, en América Latina lo contrahecho y deforme de los Estados nacionales muestra rostros macabros, tales como: el genocidio, la exclusión, la abismal desigualdad socioeconómica, el autoritarismo y la violencia y corrupción exacerbadas. En unos países más que en otros, sin embargo, las élites políticas se propusieron construir Estados sólidos, complejos, entramados institucionales capaces de dar cabida a cierta oposición, tolerar la libertad de expresión, dar alas al movimiento sindical, cooptar, normalizar, asimilar y homogenizar, diversificar sus recursos (más allá del de la represión burda, que en todos estuvo y sigue estando a la orden del día), para imponer su cosmovisión y garantizar sus privilegios.

No intento defender el Estado-nación, de raigambre liberal, como el mejor de los mundos posibles. Trato de desenmascarar la hipocresía que entraña la apuesta por la “nación” y por el

“liberalismo” de las que presume la derecha salvadoreña, cuando sus decisiones han sido todo menos nacionalistas, aún en el sentido defectuoso y amorfo de las naciones latinoamericanas. Lo que hizo la oligarquía salvadoreña a lo largo de 200 años de República fue levantar un Estado precario, antojadizo y excluyente, a la medida de su necesidad de salvaguardar sus latifundios y sus millonarios negocios agroexportadores y financieros. Reprodujeron todos los defectos del proyecto liberal, sin fomentar ninguna de sus virtudes. Tanto es así, que ante el primer alzamiento popular que abrió una grieta en ese *status quo*, como lo fue el de 1932, prefirieron depositar en la Fuerza Armada la responsabilidad de la conducción estatal, antes que modernizar el Estado.

Si echamos un vistazo sobre el siglo XX salvadoreño podremos constatar que las pocas reformas que se llevaron a cabo fueron lideradas por militares que, pretendiendo introducir algunos gramos de modernidad en la obsoleta estructura económica y el rígido sistema político imperantes, se enfrentaron con la sempiterna oposición de una de las oligarquías más obtusas del continente. En su mentalidad, simplista y rayana en la ignorancia, nacionalismo equivale a anticomunismo (hoy antichavismo) y liberalismo a libertad empresarial. Todo aquel que ha hablado de refundar la nación en función de la incorporación de las mayorías desposeídas ha sido, y sigue siendo, por ellos acusado de traicionar a “la patria” y de pretender emular políticas extranjeras, siendo al mismo tiempo ellos quienes han rendido, y rinden, todo tipo de pleitesías a los Estados Unidos.

También Europa tuvo que reconstruirse y levantarse de los escombros en los que las dos guerras mundiales la dejaron. ¿Cómo lo consiguió? Otorgando protagonismo a sus Estados, los cuales, valiéndose de una decidida política fiscal y protegiendo la estructura productiva de cada nación, garantizaron el funcionamiento de un capitalismo distributivo. Los Acuerdos de Paz le sirvieron en bandeja de plata a la gran empresa salva-

doreña la oportunidad de reivindicarse, comprometiéndose con el ideario liberal que adscribe en su discurso y encarnando el nacionalismo del que hizo uso a la hora de denominar a su instrumento partidario Alianza Republicana Nacionalista. Contando ya con su propio partido, ejerciendo el mando del timón del Estado, subidos sobre la cresta de la ola que la firma de la paz les redituó, recibiendo las cuantiosas ayudas provenientes de la cooperación internacional para la reconstrucción y legitimada políticamente en elecciones, todos los vientos soplaban a su favor para mostrarse republicanos y encaminar al país hacia una dirección semejante a la adoptada por las naciones del primer mundo que tanto dicen admirar.

Pero, en lugar de hacer eso, optaron por exactamente lo contrario: achicar y empobrecer el Estado, privatizar las prestadoras de servicios públicos, malvender la banca nacional, desatender el aparato productivo del país, fomentar los impuestos regresivos, desgravar al patrimonio y abrir las puertas a una inversión extranjera leonina, a costa de precarizar las condiciones laborales. Durante veinte años gobernaron, no para la nación, sino de espaldas a ella y a sus profundas y sentidas necesidades.

3. CONCLUSIÓN

La segunda derrota consecutiva en elecciones presidenciales sufrida por ARENA en 2014 expresa el fracaso del partido de derecha en convencer a El Salvador de que su proyecto de país es desarrollista e incluyente. Con todo, la diferencia de apenas 6634 votos que aventajó al FMLN sobre ARENA en los comicios alertó a la izquierda respecto de la fuerza político-electoral con la que continúa contando la derecha y obligó al Frente a levantar las banderas de la negociación y el diálogo. De ahí la premura con la que la fórmula presidencial electa el pasado 9 de marzo buscó aproximarse a la ANEP, con la que inició conversaciones y a la cual ha procurado apaciguar con el discurso más conciliador posible.

No olvidemos, sin embargo, que se trata de la misma asociación que sistemáticamente se ha opuesto a negociar el pacto fiscal con el gobierno, la misma que cada vez que se abre la discusión sobre la escasa recaudación, la evasión fiscal y el indispensable reajuste impositivo en pro del financiamiento del Estado para la inversión social, se excusa en todo tipo de argumentos, desde la crisis mundial, hasta el problema de la seguridad nacional, para terminar asegurando que no es el momento y que exigen garantías anticorrupción antes de soltar prenda. Incapaces de comprender que El Salvador, como cualquier país con intenciones de desarrollarse, requiere que los que tienen más paguen más, los grandes empresarios salvadoreños insisten en que el Estado debe dar muestras de austeridad. Insultan la inteligencia de la audiencia con desfachateces como aparecer en los medios desvirtuando los llamados a la solidaridad empresarial, argumentando que la oferta de empleo debe ser considerada como un gesto “solidario”.

No quisiera convertirme en ave de mal agüero frente a los buenos augurios generados en torno del discurso con el que Salvador Sánchez Cerén asumió su mandato el 1 de junio de 2014. Pero la mirada histórica hacia la derecha con la que la izquierda salvadoreña está obligada a consensuar no da margen para demasiado optimismo. Paradójicamente, la ex insurgencia está hoy al frente de los destinos de El Salvador por una vía que no fue la que originalmente eligió, la electoral, y ante un desafío que tampoco responde a su proyecto fundacional de instaurar el socialismo: modernizar el precario Estado-nación. ¿Podrá contar para ello con el respaldo de una derecha que cuando debió y pudo hacerlo prefirió otra cosa? No parece realista pensarlo. La alianza del FMLN con el pueblo vuelve hacerse, como sucedió durante la guerra, perentoria. Sin la participación de las masas históricamente excluidas en la reconstrucción del país, no habrá proyecto de nación. Así como fue necesaria una revo-

lución armada para conquistar la posibilidad de instaurar una democracia y acceder por medio de ella al poder del Estado, se impone ahora la necesidad de una revolución cultural que concite hegemonía en torno de la aplazada necesidad de reorientar la política económica en favor de las mayorías.

Carmen Elena Villacorta es docente, ensayista y pensadora salvadoreña. Candidata a Doctora y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Licenciada en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. Email de contacto: carmenelenta-villacortazuluaga@gmail.com

Rupturas y debates internos del FMLN desde los acuerdos de paz a la victoria electoral

Manuel Yañez

El 9 de marzo de 2014 se confirmó la victoria por un estrecho margen de Salvador Sánchez Cerén, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales salvadoreñas frente al candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano. El triunfo del que anteriormente fuera líder sindical y comandante guerrillero significaba la llegada a la presidencia de un dirigente histórico de la izquierda salvadoreña, con una extensa trayectoria política. El perfil de Sánchez Cerén resultaba sustancialmente diferente al de Mauricio Funes, candidato propuesto por el FMLN y quien resultaría finalmente electo en las elecciones de 2009. Durante los años previos, Funes se había presentado como un periodista sumamente crítico de los gobiernos de ARENA. Sin embargo, no era militante del FMLN e incluso durante su mandato mantuvo una manifiesta distancia en relación a algunas de las definiciones políticas de dicha organización.

El FMLN había surgido en 1980 como un frente entre cinco organizaciones: las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), el Partido Comunista de El Salvador (PCS),

el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). A comienzos de la década de 1990 y tras la firma de los acuerdos de paz, el FMLN se incorporó al ámbito político institucional, dando inicio a un itinerario que lo terminaría llevando a las victorias electorales de 2009 y 2014. Dicho derrotero, sin embargo, no estuvo libre de disputas y conflictos al interior de la organización acerca de las definiciones políticas y la estrategia que debía adoptarse; además de que no faltaron escisiones de sectores partidarios disidentes. En este sentido, el presente trabajo pretende realizar un breve recorrido de las rupturas y de algunos de los debates internos del FMLN desde su institucionalización como partido político legal luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992 hasta la victoria electoral de 2009.

LOS ACUERDOS DE PAZ Y EL INGRESO DEL **FMLN** AL ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Con el acto de firma de los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992 se empezó a poner fin de manera formal a los largos años de conflicto armado entre las fuerzas militares salvadoreñas y las organizaciones integradas en el FMLN. Algunas de las condiciones políticas que enmarcaron el resultado plasmado en dichos acuerdos estuvieron dadas por el denominado “empate militar” entre ambos contendientes y el desgaste social producto de más de una década de guerra; la relativa legitimidad ganada por el régimen político salvadoreño; y un contexto internacional signado por el desmoronamiento de la Unión Soviética y la derrota del sandinismo en las elecciones nicaragüenses de 1990; todo lo cual resultaba poco propicio para el sostenimiento de una estrategia de lucha armada (Martín Álvarez, 2006: 109-113). El gobierno salvadoreño estaba encabezado en esa coyuntura por Alfredo Cristiani, del partido ARENA, quien se había alzado con la victoria en las elecciones

presidenciales de 1989. En definitiva, desde ese momento ARENA se consolidaría como el partido de gobierno, encabezando durante las siguientes dos décadas la implementación del proyecto neoliberal en El Salvador (Lungo Rodríguez, 2008).

Por su parte, desde mediados de la década del ochenta el FMLN había venido orientando sus acciones en el sentido de fijar como parte de sus objetivos principales la consolidación de una institucionalidad política que asegurase las libertades democráticas, la desmilitarización del aparato estatal, la reformulación de las instituciones judiciales y la reforma del sistema electoral. Dicha perspectiva fue acentuándose con el paso del tiempo, condicionando de esta manera cuáles deberían ser los requisitos ineludibles que deberían estar incluidos en cualquier proyecto de acuerdos de paz. En este sentido, durante 1990 el FMLN dio a conocer el documento titulado “Proclama a la Nación. La Revolución Democrática”, el cual contenía gran parte de las cuestiones señaladas en vistas al escenario de negociación abierto con el gobierno salvadoreño. De esta manera, mientras los puntos relacionados con la desmilitarización y con la institucionalidad política y jurídica estuvieron contemplados en los acuerdos alcanzados, los compromisos asumidos en torno a las problemáticas socioeconómicas fueron escasos y –en el caso en que éstos se produjeron– tuvieron pocas derivaciones prácticas. Entre otras cuestiones, se dejó de lado el reclamo por una amplia reforma agraria –reivindicación histórica de la izquierda salvadoreña– y sólo se transfirieron tierras a ex combatientes de las fuerzas en disputa y a algunos sectores campesinos. En este sentido, señala Martín Álvarez (2006: 116) que “el resultado final de dicha negociación para el FMLN fue el mantenimiento de buena parte de sus demandas en los planos político y de seguridad, a costa de renunciar a cambios estructurales en lo económico y social”.

En este marco, señala Sánchez Cerén (2007; 242-243) que dos fueron los objetivos de corto plazo asumidos por el FMLN.

En primer lugar, se estipuló como prioridad el asegurar la puesta en práctica de los acuerdos de paz, para lo cual los cuadros partidarios integraron las diferentes comisiones e instancias encargadas de realizar el seguimiento de su cumplimiento. En segundo lugar, se impulsó la conformación del FMLN como partido, mediante el cumplimiento de la legislación vigente.

En efecto, a partir de que el FMLN decidió asumir la disputa electoral como parte importante de la lucha política a desplegar en la nueva coyuntura, su institucionalización como partido legal se ubicó como tarea de primer orden teniendo en vistas las elecciones presidenciales de 1994. Un primer punto a destacar es que las cinco organizaciones que conformaban el FMLN no desaparecieron automáticamente, sino que siguieron existiendo como estructuras paralelas por algún tiempo. Así, la antigua Comandancia General, que durante la guerra reunía a los comandantes guerrilleros de cada organización, se transformó en la Comisión Política del FMLN. Pero a pesar de esta aparente continuidad, la lógica en que se desarrollaban las relaciones y la manera en que se cristalizaban jerarquías al interior del FMLN se vio trastocada, con el transfondo de tensiones y diferencias que se habían mantenido atenuadas en el marco de la confrontación armada. En definitiva, el nuevo escenario abierto con los acuerdos de paz trajo aparejado una intensificación de las tensiones ideológicas y de disputa por el liderazgo entre miembros de las cinco organizaciones, y aún entre antiguos miembros de una misma organización (Lungo Rodríguez, 2007; Martín Álvarez, 2006).

En este marco, los comicios de 1994, que serían denominados las “elecciones del siglo”, configuraron un importante primer desafío para el FMLN a nivel electoral. El Frente acudió a dicha cita coaligado con fuerzas de tendencia socialdemócrata¹,

1 En esa coalición estaban representados los ex integrantes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) que durante los años ochenta había aglutinado a los alia-

quienes llevaban como candidato presidencial a Rubén Zamora. El candidato de ARENA, Armando Calderón Sol, resultó finalmente vencedor, para lo cual debió triunfar en una segunda vuelta electoral. Para el FMLN, por su parte, quedó claro que tenía abierto el camino para erigirse como la fuerza principal de la izquierda salvadoreña. Dicha situación se vio confirmada en las elecciones municipales y legislativas de 1997, cuando se hizo del control de varias alcaldías importantes y aumentó su número de diputados.

DISPUTAS INTERNAS, RUPTURAS Y AVANCE ELECTORAL

La evolución del FMLN a partir de 1992 y su consolidación como principal fuerza de izquierda no estuvo libre de dificultades. Sáenz de Tejada (2006) destaca el hecho de que el FMLN sufrió, a lo largo de poco más de diez años, al menos cuatro crisis orgánicas que incidieron en rupturas o alejamientos de sectores integrantes del partido que no comulgaban con la línea mayoritaria. En definitiva, dichas crisis giraron en torno a la disputa entre dos sectores al interior de la organización, los cuales se fueron configurando con el paso de los años, especialmente a partir de la segunda mitad de la década de 1990: los denominados “socialistas revolucionarios” u “ortodoxos”, por un lado; y los que finalmente fueron conocidos como los “renovadores”, por el otro.

La primera crisis se desarrolló luego de las elecciones de 1994, aunque tenía sus raíces en discusiones que se venían desarrollando desde algún tiempo antes. La expresión de dicha crisis estuvo dada por salida de los líderes del ERP y de la RN del FMLN, llevando tras de sí a una parte de la militancia. Resumidamente, podemos señalar que los sectores que salieron

dos de tendencia socialdemócrata del FMLN. Estas fuerzas centroizquierdistas ya habían participado en las elecciones presidenciales de 1989.

del partido proponían que el Frente reformulara su identidad en un sentido socialdemócrata y adoptara una política más amplia de alianzas. Por su parte, el sector que finalmente continuó en el FMLN –en su gran mayoría se trataba de integrantes del PCS y las FPL– defendía el sostenimiento de definiciones políticas más izquierdistas y mantenía una perspectiva cautelosa respecto a las alianzas políticas a realizar. Finalmente, los grupos escindidos, encabezados por el líder del ERP Joaquín Villalobos crearon el Partido Demócrata (PD). El PD tuvo un resultado discreto en la siguiente cita electoral y terminó desapareciendo del escenario político salvadoreño (Sáenz de Tejada, 2006: 75).

En respuesta a esta situación de inestabilidad interna, a partir de 1994 el FMLN se propuso dejar de lado su carácter de coalición de partidos y avanzar en el establecimiento de una estructura única con la intención de reforzar su “voluntad unitaria” (Lungo Rodríguez, 2008: 96). Es durante esos momentos en que el FMLN se define como un “partido de tendencias”, integrando a las organizaciones preexistentes pero manteniendo la posibilidad de crear tendencias estables a su interior. En definitiva, esta salida pretendía consolidar la organización sin desconocer las distintas perspectivas ideológicas y políticas presentes en su interior.

Un segundo momento de tensión al interior del Frente se desarrolló en 1997 en el marco de la contienda por el cargo de coordinador general del FMLN entre Facundo Guardado y Salvador Sánchez Cerén, ambos ex integrantes de las FPL. Dicha disputa no logró ser saldada a pesar del triunfo de Guardado, quien proponía la apertura organizativa del FMLN y su alineación con los postulados de la socialdemocracia. El sector renovador también logró vencer, con Guardado como candidato, en la elección de la fórmula presidencial del FMLN para los comicios de 1999, luego de un dilatado y conflictivo proceso que debilitó la imagen que daba el partido al exterior del mismo. Tras la derrota en las

elecciones presidenciales de 1999, el sector de la denominada corriente socialista revolucionaria retomó el control de la organización, en el marco de la salida de varios integrantes del sector de los renovadores. Luego de esta disputa, el FMLN eliminó el derecho a agruparse en tendencias, las cuales dejaron de existir oficialmente. Zamora (1998) destaca el hecho de que el FMLN pasó, en un período relativamente corto, de cinco organizaciones diferentes en 1992; a su unificación en una única estructura pero permitiendo la existencia de tendencias luego de las elecciones de 1994; hasta una organización única sin la existencia formal de tendencias –lo que no evitó la persistencia de corrientes de opinión al interior del partido con posturas diferenciadas.

La tercera coyuntura crítica de disputa al interior del Frente se inició con la salida en 2002 de un grupo de diputados y dirigentes efemelenistas –incluido el ex coordinador y ex candidato presidencial Facundo Guardado– quienes lanzaron el denominado Movimiento Renovador. A continuación, durante el año 2003, las tensiones resurgieron en torno a la disputa entre la corriente socialista revolucionaria y el sector renovador sobre las definiciones políticas que debía adoptar la Convención Nacional del FMLN. Los primeros estuvieron liderados por Schafik Handal, quien se presentó como el candidato de ese sector en las primarias presidenciales del partido, resultando finalmente vencedor frente al candidato de la corriente renovadora Oscar Ortiz (Sáenz de Tejada, 2006: 78). Más allá de su extensa trayectoria política², es durante esta etapa que se logró afianzar definitivamente el liderazgo de Handal en el

2 Schafik Handal había sido el Secretario General del PCS desde principios de la década de los setenta e integraba de la Comandancia General del FMLN desde su creación en 1980; además de haber encabezado la comisión del FMLN encargada de las negociaciones de paz con el gobierno de El Salvador. Luego de la firma de los acuerdos, Handal es electo como Coordinador General del FMLN en 1992, cargo para el que fue reelecto en 1993 durante la Primera Convención Ordinaria. A partir de entonces se desempeñó como diputado y líder de la bancada del FMLN.

FMLN como expresión del predominio interno del sector de los socialistas revolucionarios. El desempeño de la candidatura de Handal a presidente en 2004 resultó ciertamente alentadora para el FMLN, obteniendo un nada despreciable 36% del total en un escenario de alta participación –lo cual no es la norma en El Salvador– y logrando más que doblar la cantidad absoluta de votos respecto a la elección presidencial anterior.

Finalmente, un último momento de conflicto y ruptura se dio durante 2006, en el marco de una nueva definición de candidaturas electorales del partido, con la salida del entonces alcalde de San Salvador y algunos diputados del FMLN. Estos sectores fundaron a continuación el Frente Democrático Revolucionario (FDR), retomando el nombre de la que fuera la coalición socialdemócrata aliada al FMLN durante los años ochenta. Durante es mismo año el FMLN abolió la elección interna directa de las candidaturas, con el fin de evitar las tensiones que acompañaron las sucesivas coyunturas electorales. De acuerdo con el propio Sánchez Cerén, dirigente del sector mayoritario del FMLN, esa decisión “ha generado mayor coherencia y ha habilitado en el seno del FMLN mejores espacios para los debates políticos de fondo que interesan al país, superándose ciclos políticos con rasgos de lucha interna, sectarios, por el dominio del partido” (Sánchez Cerén, 2007: 249).

LA ALIANZA CON FUNES Y LA LLEGADA DEL FMLN AL GOBIERNO

Los conflictos desatados al interior del FMLN han girado principalmente en torno a dos cuestiones: en primer lugar, se han puesto en discusión las definiciones programáticas e identitarias acerca del carácter del FMLN; y en segundo lugar, se ha debatido acerca de la estrategia política a asumir, especialmente en relación a la política de alianzas en el marco de las disputas electorales. En otro orden de cosas, se destaca el hecho de que el paulatino afianzamiento del predominio de la corriente socialista revolucionaria al interior del partido fuese acompa-

ñado por un mejoramiento de su desempeño en las sucesivas citas electorales, con su correlato en una creciente y sostenida presencia en las instituciones estatales.

En este marco, Sáez de Tejada (2006: 87) señala la aparente paradoja de que hayan sido los sectores caracterizados por sus rivales como más dogmáticos y con un discurso de cambio más radical los que hayan conseguido mejorar el rendimiento electoral durante los años que han liderado el partido. Por nuestro lado, una aparente paradoja adicional que podemos agregar es el hecho de que esa misma dirección partidaria, identificada como el sector más “a la izquierda” al interior del FMLN, haya sido la misma que impulsó, tras el fallecimiento de Handal en enero de 2006, el acercamiento a Mauricio Funes como una manera de alcanzar el hasta entonces esquivo triunfo electoral. En definitiva, lo que Funes representaba era la predisposición a una mayor apertura con aquellos sectores que, en un principio, eran reticentes a apoyar al FMLN y que terminaron siendo fundamentales para la victoria de 2009 (Freedman, 2009).

Entre el FMLN y Funes –y aquellos sectores que aglutinó en torno suyo, como los denominados “Amigos de Mauricio”– se concretó una suerte de alianza que ha tenido altibajos a lo largo de los años. Efectivamente, la influencia del FMLN ha sido limitada durante los años de gobierno de Funes, pudiendo ocupar algunos cargos ministeriales y en áreas puntuales –generalmente ligadas al ámbito de la política social o educativa–, sin poder incidir de manera determinante en cuestiones como la política económica o exterior. Medardo González, secretario general del FMLN, a pocos meses de la asunción de Funes resumió la situación afirmando: “Somos el partido que ganó las elecciones, pero no somos gobierno” (Arauz, 2009). Ante la investidura como presidente de Sánchez Cerén, en el inicio-se lo que se presume será un gobierno más claramente identificado con el FMLN, se abre el interrogante de cuánto de continuidad y cuánto de cambio habrá respecto al período de gobierno anterior.

BIBLIOGRAFÍA:

- Arauz, Sergio (2009): "Somos el partido que ganó las elecciones, pero no somos gobierno" [Entrevista a Menardo González] en *Revista Envío*, Número 332, noviembre. Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/4089>
- Freedman, Elaine (2009): "Un empujón popular sacó a ARENA del gobierno" en *Revista Envío*, Número 325, abril. Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/3969>
- Lungo Rodríguez, Irene (2008): *Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador 1989-2004*, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO, México.
- Martín Álvarez, Alberto (2006): "El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): de movimiento de liberación a partido político" en Martí i Puig, Salvador y Figueroa Ibarra, Carlos (editores): *La izquierda revolucionaria en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral*, Catarata, Madrid.
- Sáenz de Tejada, Ricardo (2006): *Revolucionarios en tiempos de paz. Rompimientos y recomposición en las izquierdas de Guatemala y El Salvador*, CLACSO. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/semi/2004/partidos/saenz.pdf>
- Sánchez Cerén, Salvador [Leonel González] (2008): *Con sueños se escribe la vida. Autobiografía de un revolucionario salvadoreño*, Ocean Sur, México.
- Zamora R., Rubén (1998): *El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos en la post-guerra*, FLACSO El Salvador, San Salvador.

Manuel Yañez es Licenciado en Ciencia Política y maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos, en ambos casos por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Integra el Grupo de Estudios sobre Centroamérica (Instituto de Estudios de América Central y el Caribe, IEALC-UBA) y el proyecto de investigación UBACyT (2012-2014) "Elites políticas, culturales y económicas en Centroamérica. De la modernización al neoliberalismo". Además, es docente en la Universidad Nacional de Lanús. Su tesis de maestría aborda el análisis de las organizaciones de izquierda en Nicaragua y El Salvador en el marco de la hegemonía neoliberal. Email de contacto: manuelya7@gmail.com

4.

Апехо

Costa Rica: caracterización de los principales partidos políticos

Gisela Brito

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas celebradas en 2014 en Costa Rica (en primera vuelta el 2 de febrero, y en segunda vuelta el 6 de abril) supusieron un viraje significativo en la evolución que se venía dando en las últimas décadas en cuanto al mapa de los partidos políticos. Los resultados electorales cristalizaron en forma acelerada la reconfiguración de la representación partidaria de la política que hasta el momento venía respondiendo a un patrón de alternancia bipartidista. Tras un periodo de preponderancia de la tendencia liberacionista (PLN), surgida a partir del ciclo político inaugurado por la guerra civil de 1948, entre 1986 y 2002 se instauró en el país un sistema bipartidista representado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que se fueron alternando en la presidencia en forma hegemónica.

La emergencia del Partido de Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones de 2002 fue únicamente el germen de un proceso de transición hacia un novedoso mapa político partidario, marcado por la emergencia de fuerzas políticas por fuera de los partidos tradicionales. Es realmente luego, en el año

2014, con la contundente victoria del candidato Luis Guillermo Solís Rivera (PAC) frente a Johnny Araya (PLN), cuando es posible afirmar que el ciclo político del bipartidismo costarricense ha terminado para dar inicio a una nueva etapa en la historia política del país, en sintonía con lo que ha venido ocurriendo en muchos países de América Latina. El creciente desfase entre las respuestas y discursos de los viejos partidos y los nuevos problemas y demandas de la mayoría del pueblo en Costa Rica, así como la escasa diferencia entre sus programas de gobierno posiblemente expliquen la crisis del sistema de alternancia en el poder entre el PLN y el PSUC, y la irrupción de una nueva fuerza política elegida para acometer los nuevos desafíos en los próximos años.

A continuación se abordan brevemente los orígenes y trayectorias políticas de las principales fuerzas partidarias que marcaron el escenario político del país durante las últimas décadas.

Partido de Acción Ciudadana (PAC): Partido político de orientación centro / centro-izquierda fundado en 2000 por varios exmiembros del Partido de Liberación Nacional bajo el liderazgo de Ottón Solís Fallas (exministro de Planificación durante el gobierno de Arias Sánchez y exdiputado del PLN), Margarita Penón Góngora (exprimera dama y precandidata presidencial del PLN en 1993) y Alberto Cañas Escalante, (miembro fundador del PLN). En sus inicios surge con un discurso de oposición al bipartidismo (PLN-PUSC) que se alternó en el poder desde 1986, centrándose en la propuesta de un modelo de desarrollo solidario y en la lucha contra la corrupción como ejes de campaña. En las elecciones legislativas del 2002, con Ottón Solís Fallas como candidato presidencial, el PAC logra posicionarse inesperadamente como la tercera fuerza política a nivel nacional, obteniendo el 26.19% de los sufragios que se tradujeron en 14 de los 57 escaños parlamentarios, situación inédita en el país

que marcó el inicio del quiebre del bipartidismo. En sus inicios la fuerza electoral del PAC estuvo concentrada en los sectores urbanos y en un segmento de votantes de alto nivel educativo y socioeconómico (Raventós y Ramírez, 2006).

Durante la campaña presidencial de 2006, nuevamente con Ottón Solís como candidato, el PAC manifestó su rechazo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana, que debía ser refrendado por la Asamblea Legislativa, en contra de lo que sostenía el PLN. Este debate fue el eje central de la campaña electoral para las elecciones en las que el PAC se posicionó como segunda fuerza electoral, obteniendo el 41.11% de los votos, con una diferencia de apenas 1% sobre Arias Sánchez, electo por el PLN, en el contexto de una elección marcada por el declive del caudal de votos del PUSC.

Luego de un desempeño menor en 2010 (cuando Ottón Solís obtuvo el 25% de los sufragios), el PAC se presentó nuevamente a las elecciones presidenciales en 2014, siendo el partido más votado en primera vuelta, aunque no logró alcanzar el 40% de los votos, necesarios para evitar un ballottage. El candidato del PAC, Luis Guillermo Solís Rivera resultó electo en abril de 2014 por el 77,9% de los votos, registrando una diferencia de más de cincuenta puntos frente al candidato del PLN, Johnny Araya Monge. Con un programa de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico con generación de empleo y la reducción de la desigualdad social, el PAC alcanzó la presidencia del país. De esta forma se erigió en el primer partido político “no-tradicional” en acceder al poder desde 1986, poniendo fin al bipartidismo PLN-PUSC.

Partido de Liberación Nacional (PLN): partido social liberal afiliado a la Internacional Socialista, cuyos orígenes se remontan a una fusión entre el Partido Social Demócrata y el Movimiento

de Liberación Nacional en 1951. Entre sus principales líderes se encuentran José Figueres Ferrer, Francisco José Orlich y Jorge Rossi Chavarría. Originalmente de orientación socialdemócrata, el PLN dominó la escena política costarricense hasta fines de la década del '70, logrando capitalizar la agenda social de demandas de la población con un programa de políticas sociales con expansión de derechos, manteniendo así un lugar dominante en la Asamblea Legislativa y accediendo a la presidencia en dos de seis periodos disputados. Durante la presidencia de Monge (1982-1986), en un contexto de profunda crisis económica que atravesaba el país desde finales de los setenta, el PLN pactó con la oposición (debilitada por haber sido el partido de gobierno durante el estallido de la crisis) su conversión en partido político (con el beneficio económico que implicaba) a cambio de presentar una propuesta nacional unificada frente a la administración Reagan que permitiera iniciar la reestructuración de la economía (Raventós y Ramírez, 2006). De esta forma se inauguraba un sistema de gobierno de alternancia entre el PLN y el PUSC que marcaría la historia política de las últimas tres décadas en el país centroamericano. Durante los '80 y '90, el PLN gobernó adhiriendo a las políticas neoliberales impulsadas por el Consenso de Washington que incluían la apertura y liberalización de la economía y la reducción del rol del Estado en la definición de la política económica. Las posiciones entre los dos partidos gobernantes fueron estrechándose, y en 1995, el presidente Figueres Olsen (PLN 1994-98), firmó un pacto con el expresidente Calderón Fournier (PUSC 1990-1994) a partir del cual comenzó una política de reforma y achicamiento de los beneficios sociales alcanzados por las políticas del Estado benefactor. La reacción fue un aumento significativo de la protesta social que se tradujo en un marcado aumento de la abstención electoral que terminó por debilitar a ambos partidos. Tras perder dos elecciones seguidas, el PLN volvió a la presidencia en 2006, cuando el

candidato Arias Sánchez obtuvo una estrecha victoria sobre el PAC, recientemente fundado. Durante su presidencia, se realizó el referéndum para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLP) entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana, cuya aprobación fue abiertamente impulsada por el PLN. Finalmente, el tratado fue aprobado entrando en vigor a partir de 2009. En 2010, resulta electa en primera vuelta Laura Chinchilla (PLN) convirtiéndose en la primera mujer presidente del país. Su campaña electoral y acciones de gobierno estuvieron centradas en torno al eje de la seguridad ciudadana, siendo de facto una continuidad con las políticas de neoliberalismo económico que habían regido la economía del país desde la década del '80. En las elecciones de 2014, el PLN obtuvo en primera vuelta un 29,71% de los votos, por lo que actualmente ocupa 18 escaños en la Asamblea, siendo la primera fuerza legislativa.

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): partido de extracción socialcristiana cuyas raíces se encuentran en el Partido Republicano Nacional y en la herencia ideológica de Rafael Calderón, figura destacada de la guerra civil de 1948. Fundado en 1983, como una coalición entre el Partido Unión Popular, el Partido Republicano Calderonista, el Partido Demócrata Cristiano de Costa Rica y el Partido Renovación Democrática, el PUSC participa por primera vez en las elecciones presidenciales de 1986, donde si bien es derrotado por el PLN logra obtener 25 escaños parlamentarios. Se pone fin así a un largo periodo de hegemonía liberacionista dando inicio al sistema bipartidista que dominará el escenario político electoral costarricense hasta el 2014. El 1990, el PUSC accede a la presidencia al triunfar su candidato por el 51% de los votos, y a su vez obtiene la mayoría legislativa. Tras perder por escaso margen en 1994, el PUSC llega nuevamente a la presidencia en 1998 de la mano de Rodríguez Echeverría. Durante su mandato se producen importantes mo-

vilizaciones sociales en rechazo a reformas acordadas por ambos partidos políticos (PLN-PUSC) que incluían privatizaciones de servicios públicos de telecomunicaciones y energía eléctrica. Posteriormente, durante el gobierno de Pacheco de la Espriella (2002-2006), el PUSC se ve envuelto en importantes escándalos de corrupción que terminan por socavar su base de apoyo electoral, llevándolo prácticamente a desaparecer del espectro político en las elecciones de 2006, cuando obtiene apenas un 3,67% de los votos, cuestión que también contribuye a profundizar la crisis del bipartidismo en el país. En el 2010 obtiene un porcentaje de votos similar y en el 2014 alcanza un 6% de apoyo electoral y 8 bancas en el parlamento. Actualmente el PUSC es una fuerza aliada al gobernante Partido de Acción Ciudadana.

Frente Amplio (FA): partido que representa al sector político más a la izquierda del sistema político costarricense. Fundado inicialmente a escala provincial en 2004 por el español José Merino del Río, exdiputado por el partido Fuerza Democrática. Sus integrantes provienen de otros partidos de la izquierda costarricense, y de las luchas ambientales y sociales de la última década contra la privatización del ICE (Instituto Costarricense de la Electricidad), contra la firma del TLC, etc. El FA participó por primera vez de las elecciones a nivel nacional en 2010 obteniendo una banca en el parlamento ocupada por José María Villalta, posterior candidato presidencial del FA en las elecciones de 2014. Durante la campaña electoral, Villalta aparecía posicionado en las principales encuestas como el segundo candidato en intención de voto, aunque finalmente resultó tercero con un 17,25% de los sufragios. El FA obtuvo en esta ocasión nueve escaños parlamentarios. Los principales ejes programáticos del partido están sustentados en un programa que se propone como una alternativa real al neoliberalismo y a la corrupción de los partidos tradicionales. El FA se presenta abiertamente

como un partido socialista y latinoamericanista, lo que le valió una amplia campaña de desprestigio mediático durante la etapa previa a la última contienda electoral por parte del PUSC y el PLN.

Movimiento Libertario (ML): partido de extracción liberal surgido en 1994 fundado por ex miembros del partido de derecha PUSC. Liderado por Otto Guevara Guth, representa a los sectores de derecha que propugnan los principios de la libertad individual y la libertad de empresa en el marco del capitalismo neoliberal. En 1998, el ML logró obtener una banca de diputados para Otto Guevara Guth, posterior candidato presidencial en las elecciones de 2002, 2006, 2010 y 2014. Durante esos primeros años sus propuestas eran de corte liberal clásico, apuntando a la reducción del rol del Estado en la economía, la defensa del libre comercio, la apertura económica y privatizaciones, y a la defensa de las libertades individuales. En 2002 se posicionó como cuarta fuerza electoral con un escaso 1,7% de los votos. Posteriormente, el desempeño electoral del ML continuó creciendo en 2006 (8,76%) ubicándose en el tercer lugar tras superar al PUSC, 2010 (20,92%) sólo detrás del PLN y el PAC, que obtuvieron 46,91 y 25.06% respectivamente. En 2010 y 2011 los escándalos de corrupción alcanzaron a los principales líderes del ML por irregularidades en el financiamiento del partido. En las elecciones presidenciales y legislativas del 2014, el ML se presentó como un partido liberal de centro, y su líder hizo un giro discursivo orientado a posiciones más conservadoras al proclamarse defensor de los valores cristianos. Esto generó tensiones al interior del partido que presentó un desempeño electoral desfavorable obteniendo sólo el 11,34% de los votos, por lo que vio reducida su cantidad de escaños de nueve a cuatro respecto del último periodo de gobierno.

BIBLIOGRAFÍA:

- Solís, L. G. (2011) "Transición y nueva política en Costa Rica", en *Revista TEMAS*, La Habana, Cuba, número 14, diciembre 2011.
- Raventós Vorst, C. y Ramírez Moreira, O. (2006) "Transición política y electoral en Costa Rica (1998-2006)", Instituto de Investigaciones Sociales / Universidad de Costa Rica.
- Quesada, C. A. (2007) "Transición política en Costa Rica y el Partido Acción Ciudadana", en *Elecciones en América Latina. Una perspectiva histórica*. Dossier coordinado por Aude Argouse y Elizabeth Burgos.

Gisela Brito es licenciada en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Partidos Políticos en El Salvador

Alejandro Faris

La reciente plena democracia electoral en El Salvador y la consolidación de los tres principales partidos políticos que fueron protagonista de la escena política salvadoreña durante los últimos 30 años tuvieron su punto de origen en el último golpe de estado de 1979, hecho que puso fin a un sistema de elecciones fraudulentas y golpes de estado impuestos por una alianza oligárquico-militar que detento el poder político y económico dentro del país durante 52 años.

A partir de 1979 la sociedad salvadoreña comienza un lento proceso de transición y transformación hacia un nuevo sistema democrático, proceso principalmente marcado por una guerra civil y sus consecuencias políticas, económicas y sociales que sacudieron al país durante 12 años (1980-1992). Esta contienda armada solo fue resuelta definitivamente con la firma de los “Acuerdos de Paz” de Chapultepec, México en 1992 que pusieron fin a la misma y habilitaron al partido insurgente de izquierda (FMLN) a competir dentro del nuevo sistema electoral. Este acontecimiento inauguró un nuevo periodo de democracia plena, legal y transparente como nunca había existido en el país.

A continuación esbozaremos brevemente los orígenes y las tendencias de los tres principales partidos políticos que fueron protagonistas durante esta transición histórica y que tuvieron como principal premisa la consolidación democrática en el país hasta nuestros días.

Partido democrático cristiano (PDC): tuvo sus orígenes a partir de la década del '60 como frente opositor a la alianza oligárquico-militar que se había sucedido consecutivamente con el poder político dentro del país desde 1932. Se constituyó como un partido de centro dentro de la lógica internacional de la guerra fría, la Revolución Cubana y la Doctrina Kennedy. Su principal referente fue Napoleón Duarte quien ganó por primera vez en 1964 la alcaldía de San Salvador.

Entrada la década de los '70 el partido formó una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO) con partidos de izquierda (MNR y UDR) y se presentó en dos oportunidades a elecciones presidenciales (1972 -1977), elecciones que quedan signadas por la imposición de fraude electoral por parte de agrupaciones afines a las organizaciones militares.

Luego del golpe de estado de 1979 y ya dentro del marco de la guerra civil salvadoreña fue la expresión de tinte reformista pro-injerencista y principal promotora y representante de la política exterior contrainsurgente de Estados Unidos.

En los años ochenta el PDC participó activamente dentro de la Asamblea Constituyente para la redacción de la nueva Constitución promulgada en 1983 y gana con su principal mandatario Napoleón Duarte los comicios presidenciales de 1984.

Su programa político-económico reformador, que contó con una constante financiación estadounidense, no pudo contrarrestar la crisis económica y social gestada por la guerra civil y la estructura económica desequilibrada que persistía en el país.

Frecuentemente el PDC fue fuertemente cuestionado por su política ambigua en materia de reformas estructurales y sociales y por la falta de resolución al conflicto armado en el que estaba sumido el país.

En los comicios presidenciales de 1989 Fidel Chávez Mena candidato del PDC pierde las elecciones frente al candidato del partido ARENA Alfredo Cristiani.

A partir de la derrota electoral de 1989, bajo un fuerte desprestigio heredado por su política de magros resultados y sumado al triunfo electoral inesperado del FMLN en las elecciones presidenciales de 1994, el PDC quedo desplazado como fuerza política alternativa dentro del país hasta la actualidad.

Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): es un partido conservador de derecha de carácter nacionalista. Fue la expresión reaccionaria de la dirigencia salvadoreña a la infiltración de lo que llamaron el ataque marxista-leninista luego del golpe de Estado de 1979. Fundado por el Mayor Roberto D'Aubuisson Arrieta en 1981 el partido es el principal representante de los intereses de la elite agrícola y empresarial en el Salvador. De fuerte tinte anticomunista sus principios promovidos desde su fundación están instituidos por una línea conservadora en lo político y una neoliberal en lo económico. Fue el principal partido opositor de derecha a la corriente reformista impuesta por el PDC y a la injerencia estadounidense en el país, aunque con este ultimo continuo manteniendo buenas relaciones a lo largo del tiempo.

Durante los años '80 el partido fue denunciado en varias oportunidades de ser colaboradores de los comandos paramilitares de ultraderecha denominados "los escuadrones de la muerte".

Uno de sus principales referentes fue Alfredo Cristiani, un hombre relacionado directamente con los empresarios y terratenientes salvadoreños, quien logro ser elegido presidente de la Republica en los comicios presidenciales de 1989 con el

53,4% de los votos derrotando al candidato democristiano Fidel Chávez Mena. Cristiani quien ejerció la presidencia en el periodo 1989-1994 tuvo una importante participación en los intentos de acuerdo de paz con los grupos guerrilleros para poner fin a la guerra civil. Estos tuvieron su resolución a partir de la firma de los “Acuerdos de paz” de 1992 que pusieron fin a la guerra y legalizaron al partido revolucionario insurgente FMLN.

A partir de la victoria en los comicios presidenciales en 1989 ARENA mantuvo el puesto presidencial en todas las elecciones desde el fin de la guerra civil hasta el 2009. Las presidencias consecutivas de Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca Gonzales siguieron un lineamiento marcado por un avance en la transformación del modelo productivos del país que intento dinamizar la economía salvadoreña apostando a la creciente “financierización” en detrimento de la agro exportación.

En los comicios presidenciales del 2009 bajo el liderazgo de Rodrigo Ávila, ARENA pierde por primera vez desde 1989 frente a Mauricio Funes candidato por FMLN. A partir de esta derrota el partido ARENA ha entrado en un proceso de inestabilidad y descomposición partidaria interna que persiste hasta el presente.

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): partido político socialista revolucionario fundado el 10 de octubre de 1980 por una coalición de cinco partidos de izquierda (FPL, ERP, PCS, RN, PRTC). Fue en sus inicios la organización armada insurgente que participo en la contienda bélica de la guerra civil contra las fuerzas militares gubernamentales y la injerencia estadounidense dentro de la zona hasta 1992 y que posteriormente se transformo en su organización política que se mantiene hasta el presente. Su política e ideología de carácter populista está ligada directamente con la lucha por la justicia social, la colectivización, la democracia y la inclusión social,

principios que son reclamados por los sectores más postergados de la sociedad salvadoreña.

A principios de 1981 la guerrilla revolucionaria lanzó lo que llamó la “ofensiva final” o “general” con la idea de derrotar a las fuerzas militares gubernamentales y tomar el poder estatal. Aunque esta ofensiva fracasó no impidió que la guerrilla se instalara en distintas “zonas liberadas” de cinco departamentos (Morazán, Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán) como principal frente insurreccional.

Entre los años 1987-1988 comienzan a existir diferentes posiciones dentro del partido que intentaron encontrar una salida pacífica al conflicto armado instando a una negociación consensuada con las autoridades gubernamentales. Este periodo de negociación se concretó con la firma de los “Acuerdos de paz” de Chapultepec, México en 1992 que puso fin a la guerra civil y que a su vez le permitió la concesión de la personería jurídica por parte de la “Junta Suprema Electoral” que lo transformó en un partido legal y público dentro del sistema democrático salvadoreño.

En su primera participación electoral durante los comicios presidenciales de 1994 llevando como candidato a Rubén Zamora, el FMLN logró ser la segunda fuerza electoral a nivel nacional, desplazando al PDC, ganando 15 alcaldías y 21 encañones en la Asamblea Legislativa con el 21.39% de los votos.

Desde su paso a la legalidad el FMLN ha trascendido por un proceso de transición y reestructuración partidaria, unificando los distintos lineamientos ideológicos, políticos y estratégicos que persistían dentro de la organización para hacerlo más acorde a la lucha democrática.

En 1995 en la Tercera Convención del Partido se instó a que el FMLN dejara de ser un partido de partidos para convertirse en un partido de tendencias con una estructura única.

En las elecciones parlamentarias del 2004 el FMLN logra por primera vez la mayoría parlamentaria y en los comicios presi-

dencial de 2009, el periodista Mauricio Funes gana la presidencia con el 51,32% de los votos, derrotando a la fórmula presidencial del partido de la Alianza Republicana nacionalista por primera vez desde 1989.

Luego de ganar recientemente las elecciones presidenciales del 9 de marzo de 2014 con Salvador Sánchez Cerén como candidato, el FMLN se presenta como la primera fuerza política a nivel nacional en El Salvador.

BIBLIOGRAFÍA:

González Marrero, Secundino; Harto de Vera, Fernando (1994) "Transiciones y elecciones en El Salvador", en *América latina hoy: Revista de ciencias sociales*, VOL. 8, págs. 73-80.

Torres-Rivas, Edelberto (2008) *Centroamérica: entre revoluciones y democracia*. CLACSO Coediciones, Bogotá.

Villacorta, Carmen Elena (2014) "El FMLN en El Salvador: de la revolución a la negociación", en *Revista Contemporanea*, Año 4 N° 5, págs. 1-30 [Disponible en: http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/13_EL_FMLN_en_EL_Salvador_de_la_revolucion_a_la_negociacion.pdf].

Villacorta Zuluaga, Carmen Elena (2010) *Democracia electoral y neoliberalismo en El Salvador. La transición política salvadoreña entre 1979 y 2009*, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México [Disponible en: <http://132.248.9.195/ptb2010/julio/0659585/Index.html>].

Alejandro Faris estudia la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Email de contacto: afaris89@hotmail.com